

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



Informe Jurídico: Caso Susel Paredes. EXP. N°
02653-2021-PA/TC

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogada
que presenta:

Ana Paula Isla Jiménez

ASESOR:

Juan Carlos Díaz Colchado

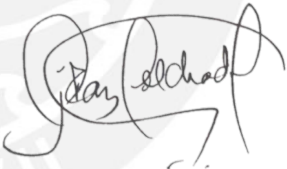
Lima, 2023

Informe de Similitud

Yo, JUAN CARLOS DÍAZ COLCHADO, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) del trabajo académico titulado **“Informe Jurídico: Caso Susel Paredes. EXP. N°02653-2021-PA/TC”**, de la autora ANA PAULA ISLA JIMÉNEZ, de constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 34%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el 11/07/2023.
- He revisado con detalle dicho reporte, así como el Trabajo Académico, y no se advierten indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lima, 12 de julio del 2023

<u>Apellidos y nombres del asesor / de la asesora:</u> JUAN CARLOS DÍAZ COLCHADO	
DNI: 41168411	Firma: 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5602-7673	

A mi mamá y mi papá por todo su amor, paciencia y apoyo para que nunca me rindiera.

A Leia Pupuchina por estar conmigo toda la carrera, porque ella también ya es bachiller y abogada.

A Caneloides por llegar en el momento preciso para hacer todo más alegre y divertido.

A mis mejores amigos por todo su apoyo en cada momento, por saber acompañarme cuando más lo necesitaba, por toda su comprensión y cariño.

Los adoro muchísimo.



RESUMEN

El presente informe jurídico busca analizar la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la improcedencia de la demanda de amparo, presentada por Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Losada. La pretensión de la demanda materia de análisis era que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inscriba el matrimonio celebrado por las demandantes en la ciudad de Miami, Estados Unidos. En ese sentido, cuestionamos si la utilización del artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional para declarar la improcedencia de la demanda ha sido válido, tomando en cuenta que el argumento principal de la mayoría de los magistrados ha sido declarar la no existencia del derecho constitucional al matrimonio de las personas homosexuales. La presente investigación se realizó en base a la investigación de fuentes doctrinarias, la comparación de jurisprudencia de países latinoamericanos, y el análisis de las distintas normas que forman parte de nuestro sistema jurídico. A manera de conclusión, señalamos que no fue válida la declaración de improcedencia debido a que el Tribunal Constitucional no motivó de manera suficiente la aplicación del artículo mencionado y, en consecuencia, limitó injustificadamente el alcance de la institución del matrimonio a las demandantes y los derechos y obligaciones relacionados.

Palabras clave

Matrimonio igualitario, Derechos Fundamentales, Tribunal Constitucional

ABSTRACT

This legal report seeks to analyze the decision of the Constitutional Court to declare the amparo suit, filed by Susel Ana María Paredes Piqué and Gracia María Francisca Aljovín de Losada, inadmissible. The purpose of the suit under analysis was that the Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) register the marriage celebrated by the petitioners in the city of Miami, United States. In this sense, we questioned whether the use of article 7.1 of the Constitutional Procedural Code to declare the claim inadmissible was valid, taking into consideration that the main argument of the majority of the magistrates has been to declare the non-existence of the constitutional right to marriage of homosexual persons. This research was carried out based on the investigation of doctrinal sources, the comparison of jurisprudence of Latin American countries, and the analysis of the different norms that are part of our legal system. By way of conclusion, we point out that the declaration of inadmissibility was not valid because the Constitutional Court did not sufficiently motivate the application of the aforementioned article and, consequently, it unjustifiably limited the scope of the institution of marriage to the plaintiffs and the related rights and obligations.

Keywords

Marriage equality, Fundamental Rights, Constitutional Court

ÍNDICE

<i>PRINCIPALES DATOS DEL CASO</i>	1
<i>1. Introducción</i>	2
1.1. Justificación de la elección de la resolución	2
1.2. Presentación del caso	2
<i>2. Antecedentes y hechos del caso</i>	4
2.1.- Contexto de la población LGTBIQ+ y el derecho al matrimonio en el Perú	4
2.2. Cronología de los hechos relevantes del caso	7
<i>3. Identificación de los problemas jurídicos</i>	8
3.1. Problema principal	8
3.2. Problemas secundarios	9
3.3. Respuestas preliminares a los problemas principal y secundarios	10
<i>4. Jurisprudencia latinoamericana sobre el matrimonio igualitario</i>	11
4.1. El matrimonio de parejas del mismo sexo en Latinoamérica	11
4.2. Jurisprudencia colombiana	14
4.3. Jurisprudencia argentina	16
<i>5. El matrimonio en el ordenamiento jurídico peruano: de la Constitución al Código Civil</i>	19
5.1.- El matrimonio en la Constitución Política del Perú	19
5.2.- El matrimonio en el Código Civil peruano	22
5.3.- Análisis sobre proyectos de Ley relacionados a la unión matrimonial de personas del mismo sexo	24
<i>6. Análisis de los argumentos del Tribunal Constitucional</i>	26
6.1.- Identificación de los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional para declarar improcedente la demanda de Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Lozada	26
6.2.- En el contexto del caso, ¿los hechos y el petitorio de la demanda de Susel Ana María Paredes Piqué y Gracias María Francisca Aljovín de Lozada no estaban	

referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invocaron en su demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil?	29
6.2.1.- Los derechos constitucionales que invocaron las demandantes y su contenido constitucionalmente protegido	29
6.2.2.- ¿Es válido interpretar la Constitución a partir de las disposiciones de la ley? El concepto constitucional de matrimonio del artículo 4 de la Constitución y su desarrollo por el artículo 234 del Código Civil	33
6.2.3.- Análisis de la posición del Tribunal Constitucional respecto de las lesiones alegadas por las demandantes, Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Lozada, vinculadas con los derechos que invocaron	35
6.3.- ¿Cómo se debe interpretar la Constitución? Entre una interpretación evolutiva o sociológica y una interpretación histórica o estática de las disposiciones constitucionales que reconocen derechos fundamentales	43
6.3.1.- Aproximaciones teóricas sobre las teorías evolutivas e históricas de la interpretación de la Constitución	43
6.3.2.- Grado de vinculación para el Perú de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH	45
6.4.- Evaluación de los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional para justificar que, a partir de lo establecido en los artículos 2.2 (derechos al a igualdad y no discriminación) y 4 (promoción del matrimonio) de la Constitución, las demandantes, personas del mismo sexo, no tienen el derecho a que la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca su matrimonio contraído en el extranjero y conforme a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico	48
<i>7. Conclusiones</i>	55
Bibliografía	57

PRINCIPALES DATOS DEL CASO

N° EXPEDIENTE	EXP. N° 02653-2021-PA/TC
ÁREA(S) DEL DERECHO SOBRE LAS CUALES VERSA EL CONTENIDO DEL PRESENTE CASO	Derechos fundamentales y Derecho Constitucional
IDENTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y SENTENCIAS MÁS IMPORTANTES	-
DEMANDANTE/DENUNCIANTE	Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Losada
DEMANDADO/DENUNCIADO	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
INSTANCIA ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL	Tribunal Constitucional

1. Introducción

1.1. Justificación de la elección de la resolución

La elección de la sentencia para el presente informe jurídico se debe a que en esta se puede apreciar la discriminación directa hacia la comunidad LGTBIQ+, buscando soslayar el tema con argumentos formalistas, que tienen un tinte ideológico y procurando establecer prejuicios hacia la misma comunidad, desde la posición importante con la que cuenta el Tribunal Constitucional (en adelante TC) dentro del funcionamiento del Estado.

Consideramos totalmente relevante cuestionar esta sentencia en la cual la mayoría de los magistrados del TC no interpretan los derechos fundamentales de tal manera que tengan un alcance general; sino que, por el contrario, buscan reducir su alcance para evitar que se modifiquen las instituciones del Estado y, de esa manera, evitar que las personas homosexuales puedan ejercer libremente su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

De manera preliminar, se aprecia que con esta sentencia se perdió una gran oportunidad para reconocer más derechos para la comunidad LGTBIQ+ y que, además, se ha marcado un retroceso en la búsqueda de un sistema jurídico más inclusivo y tolerante con las diversas orientaciones sexuales. Por lo tanto, es sumamente importante cuestionarnos cómo se están justificando las decisiones del TC, cuál es el límite a la discrecionalidad de los magistrados para justificar sus sentencias en opiniones personales que no son parte del derecho, y qué tanto afecta el ejercicio de esta discrecionalidad a nuestro sistema jurídico y nuestra organización como sociedad.

1.2. Presentación del caso

El presente caso involucra a la actual congresista Susel Ana María Paredes Piqué y su esposa Gracia María Francisca Aljovín de Losada, quienes contrajeron matrimonio en la ciudad de Miami el 4 de agosto del 2016. Debido al rechazo del Reniec para convalidar su acta de matrimonio, comienzan una demanda de amparo, cuya pretensión principal fue que las resoluciones

emitidas por el Reniec sean declaradas nulas y se emita una nueva calificación. Luego de acudir hasta la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y que se declarare infundada la demanda, las demandantes deciden presentar un recurso de agravio constitucional ante el TC. Sin embargo, en esta instancia, nuevamente se declaró improcedente la demanda.

En este caso, identificamos un problema principal y tres problemas secundarios. Como problema principal proponemos la siguiente pregunta:

¿Fueron correctos los argumentos de la mayoría de los Magistrados del Tribunal Constitucional empleados para justificar que a partir de lo establecido en los artículos 2.2 (derechos a la igualdad y no discriminación) y 4 (promoción del matrimonio) de la Constitución las demandantes, personas del mismo sexo, no tienen el derecho a que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca su matrimonio contraído en el extranjero y conforme a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico?

Frente a esta pregunta, como respuesta preliminar, consideramos que no fue correcta la decisión de declarar improcedente la demanda presentada. Los argumentos que fundamentan esta decisión no son adecuados. Además, consideramos que los argumentos expuestos por la mayoría de los magistrados del TC terminan vulnerando los derechos fundamentales de las demandantes ya que acentúan aún más los prejuicios hacia la comunidad LGTBIQ+ y restringen una interpretación más amplia de los derechos estipulados en nuestra Carta Magna.

Para complementar la respuesta anterior, de manera preliminar, podemos decir que la argumentación realizada por los magistrados del TC no ha sido válida para determinar la improcedencia de la demanda. En primer lugar, lo que se debió realizar es una interpretación de las disposiciones de la Constitución de tal manera que el alcance de los derechos sea el mayor posible; en este caso, una interpretación evolutiva hubiera sido necesaria para poder proteger los derechos de las demandantes, que forman parte de la comunidad LGTBIQ+.

En adición a ello, la forma en que se dotó de contenido a la institución del matrimonio no ha sido adecuada porque fue contraria al principio de jerarquía normativa, cuando se ha utilizado el Código Civil para condicionar la comprensión de la institución del matrimonio que reconoce el artículo 4 de la Constitución. Por tanto, en base a esta argumentación, se terminó por vulnerar los derechos de las demandantes tales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho a la dignidad

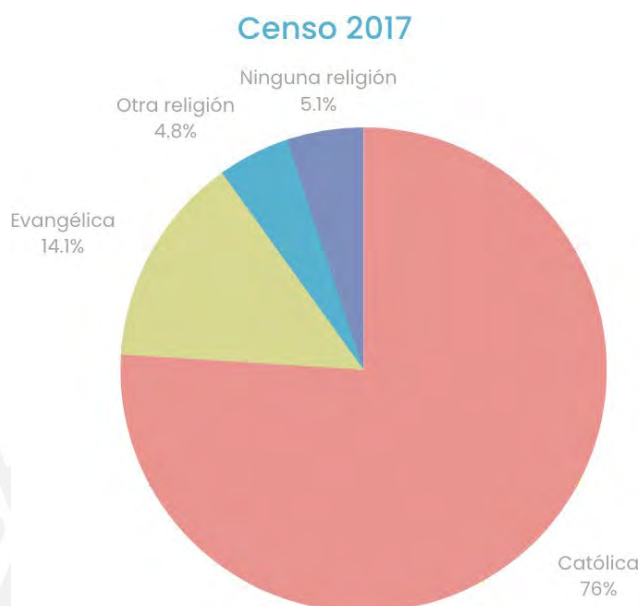
En la presente investigación, utilizaremos legislación y jurisprudencia extranjera, en especial de países latinoamericanos como Colombia y Argentina quienes ya tienen sus propias leyes en la materia. Además, para complementar el análisis internacional, recurriremos a doctrina especializada en la materia por autores de los respectivos países. Finalmente, recurriremos a tratados internacionales (y su interpretación) que hayan sido ratificados por el Perú y se buscará interpretarlos de tal forma que amplíen su alcance de protección hacia la comunidad LGTBIQ+.

2. Antecedentes y hechos del caso

2.1.- Contexto de la población LGTBIQ+ y el derecho al matrimonio en el Perú

El ordenamiento jurídico peruano puede llegar a ser sumamente conservador y apegado a costumbres religiosas, ello se puede demostrar con una lectura rápida del preámbulo de la Constitución Política en la cual se señala: “El Congreso Constituyente Democrático, **invocando a Dios Todopoderoso**, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución” (el resaltado es nuestro). Además, el artículo 50 de la misma Carta Magna es bien directa al establecer que, en el Estado peruano, la religión católica juega un papel muy importante en la formación cultural e histórica del mismo. Por lo tanto, sería un error afirmar que la sociedad peruana no se encuentra totalmente influenciada por las creencias que componen el

catolicismo. En línea con lo anterior, podemos observar los siguientes porcentajes respecto a la influencia del catolicismo en el Perú:



Creación propia. Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática , 2018)

Sin embargo, en la actualidad, el TC ha tenido algunas sentencias que podrían ser consideradas como de corte “progresista”. Un claro ejemplo de ello sería la STC Exp. N° 00238-2021-PA/TC del 21 de marzo de 2023 que ordena al Ministerio de Salud a distribuir de manera gratuita la llamada “píldora del día siguiente”, a pesar de que en el año 2010 el mismo TC emitió una sentencia que prohibía su repartición porque se consideraba como un método abortivo.

Otro ejemplo de esta tendencia puede ser la reciente sentencia STC Exp. N° 02970-2019-PHC/TC que ordena al Reniec que se modifique el DNI de la demandante cambiando el orden de sus apellidos; además, exhorta al Congreso de la República a modificar el artículo 20 del Código Civil para brindar una solución a las personas que no están conformes con el orden de sus apellidos.

No obstante, hay ciertos temas que aún son controvertidos para el TC y sus magistrados. Uno de los temas principales son los casos relacionados a la comunidad LGTBIQ+. Para entender ello, debemos recurrir al Código Civil, en específico el artículo 234 que señala como uno de los requisitos para contraer matrimonio en nuestro país que las partes sean de distintos sexos: un hombre y una mujer. Por lo tanto, podemos ver reflejado un pensamiento conservador dentro de nuestros instrumentos legales ya que, como sabemos, las relaciones de pareja no solo se dan entre personas de diferentes sexos, y estas parejas también deciden formar un plan de vida en común que también debería ser reconocido por el Estado.

Durante los años 2013 y 2021, se presentaron proyectos de ley con el propósito de regular el reconocimiento de las relaciones homosexuales por nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, ambos fueron rechazados por el Congreso de la República. Como podemos observar, los operadores políticos del Estado peruano han sido reacios a implementar un régimen más inclusivo con las parejas homosexuales. Además, los argumentos utilizados para rechazar la unión de parejas del mismo sexo, tal como veremos más adelante, son de corte sumamente iusnaturalista y conservador lo cual genera un estigma muy fuerte hacia las personas que desean formar un plan de vida con sus parejas más allá del sexo o género de las mismas.

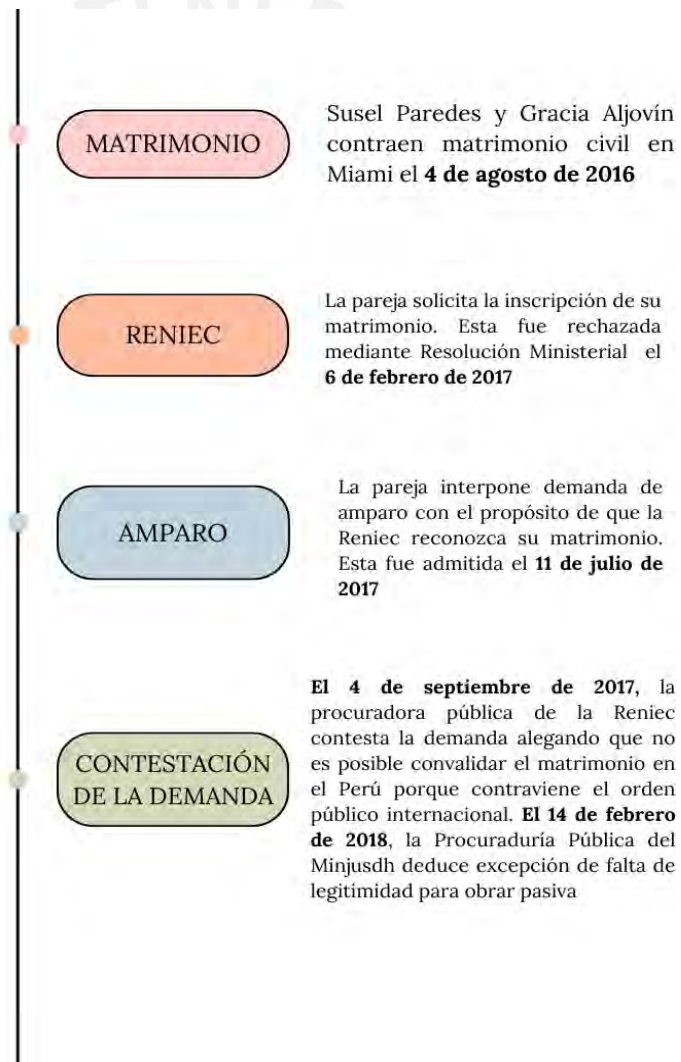
Es en este contexto que vemos el caso de Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín. Ellas contrajeron matrimonio válidamente en Estados Unidos y decidieron regresar al Perú para desarrollar su proyecto de vida. En virtud de ello, recurrieron a la Reniec para hacer valer sus derechos y reconocer su matrimonio dentro de las instituciones del Estado. Sin embargo, debido al artículo 234° del Código Civil, dicha institución decidió rechazar su solicitud de inscripción. En consecuencia, la pareja interpuso una demanda de amparo alegando que se han violado sus derechos fundamentales; dicha demanda llegó hasta el TC, que decidió declararla improcedente por mayoría de sus magistrados. Los argumentos expresados en la sentencia solo confirman que

en nuestro país aún prevalece el pensamiento iusnaturalista y conservador. Estos serán analizados más adelante.

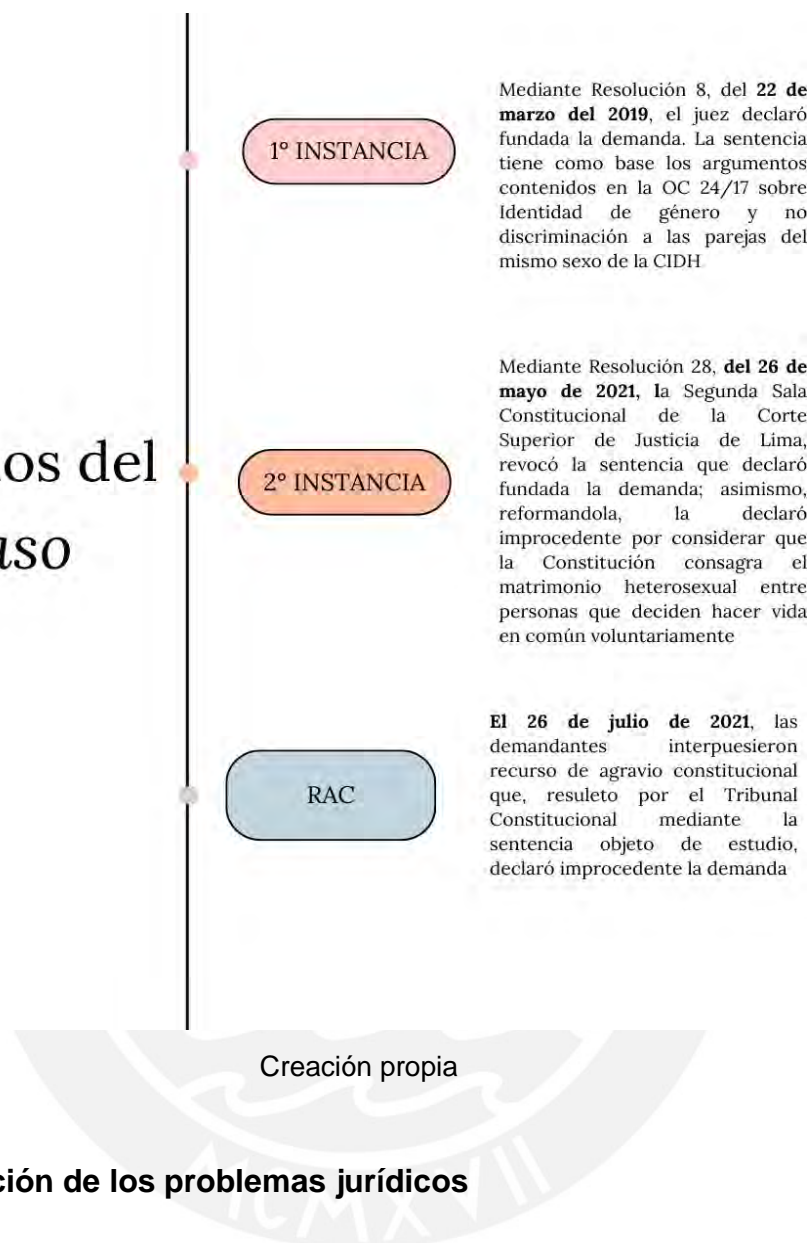
Tomando en cuenta todos los hechos anteriormente expuestos, procederemos a analizar la sentencia que declara la improcedencia del pedido de reconocimiento del matrimonio de Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín.

2.2. Cronología de los hechos relevantes del caso

Hechos del caso



Hechos del caso



3. Identificación de los problemas jurídicos

3.1. Problema principal

¿Fueron correctos los argumentos empleados por la mayoría de los Magistrados del Tribunal Constitucional para justificar que, a partir de lo establecido en los artículos 2.2 (derechos a la igualdad y no discriminación) y 4 (promoción del matrimonio) de la Constitución, las demandantes, personas del mismo sexo, no tienen el derecho a que la Reniec reconozca su matrimonio contraído en el extranjero y conforme a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico?

3.2. Problemas secundarios

1. De acuerdo a las disposiciones de los artículos 2.2 (derechos al a igualdad y no discriminación) y 4 (promoción del matrimonio) de la Constitución de 1993, ¿es posible afirmar y justificar que los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo en ordenamientos jurídicos extranjeros deben ser reconocidos por las autoridades peruanas del Reniec?
 - ¿Cómo se deben interpretar las disposiciones de la Constitución?
¿Es posible una interpretación evolutiva de las mismas?
 - ¿Cuál es el grado de vinculación de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado Peruano?
2. ¿Ha sido válida la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la improcedencia de la demanda en aplicación del artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional que establece que no procede la demanda (de amparo en el caso) cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho que se invoca?
 - ¿Cuáles han sido los derechos invocados por las demandantes y su contenido constitucionalmente protegido?
 - ¿Ha sido válido dotar de contenido a la institución del matrimonio que se reconoce en el artículo 4 de la Constitución conforme a las definiciones que al respecto contiene el artículo 234 del Código Civil?
 - ¿Los argumentos presentados por el Tribunal Constitucional para justificar la improcedencia de la demanda, vulneran de manera directa los derechos fundamentales de las demandantes y el contenido constitucionalmente protegido de estos?

3.3. Respuestas preliminares a los problemas principal y secundarios

En primer lugar, consideramos que los argumentos utilizados por los magistrados del TC no fueron correctos para determinar la improcedencia de la demanda, y argumentar que en la Constitución peruana no existe el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo.

A partir de ello, podemos decir que sí existen argumentos suficientes para decir que es posible reconocer los matrimonios homosexuales en el ordenamiento peruano. Ello en base a una interpretación evolutiva de las disposiciones de la Constitución, es decir, una interpretación que tenga una visión más progresista de los derechos y que busque ampliar el alcance de los mismos, en este caso, a la comunidad LGTBIQ+.

Además, para reforzar este argumento, es necesario que recurramos a la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH). En este trabajo, argumentamos que, si bien es cierto las opiniones consultivas no tienen carácter vinculante como tal, de todas maneras, es importante tomarlas en cuenta al momento de interpretar la Constitución. Ello debido a que el Perú, como país miembro de la CIDH, debe respetar lo dispuesto en la Convención y también tomar en cuenta, o por lo menos fundamentar sus argumentos de la mejor manera posible para mostrar desacuerdo con las posiciones de la Corte IDH, porque esta es la intérprete última de la Convención y de los otros instrumentos ratificados por el Estado peruano en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Por lo tanto, señalamos que la decisión de declarar improcedente la demanda no es válida ya que, al delimitar el contenido del matrimonio en base a los límites establecidos en el Código Civil, ha terminado por vulnerar los derechos fundamentales alegados por las demandantes. En primer lugar, esa interpretación va contra el principio de jerarquía normativa porque una norma de rango menor estaría dotando de contenido a lo estipulado en la Constitución. En razón de ello, se limita la interpretación constitucional y se

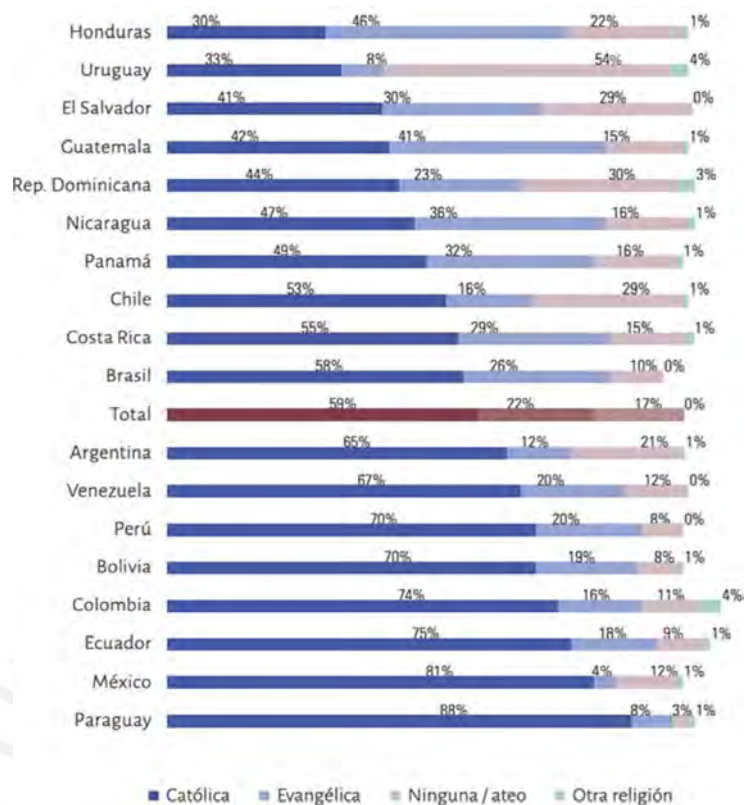
hace una diferenciación, que no se encuentra debidamente fundamentada, entre las personas heterosexuales y homosexuales lo cual limita el acceso a los derechos y afecta directamente el derecho a la igualdad ante la ley ya que no hay un argumento suficiente para tratar diferente a estas relaciones de carácter afectivo. Además, al no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, se estaría frustrando el plan de vida de las demandantes lo cual vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por ende, se vulnera su derecho a la dignidad.

4. Jurisprudencia latinoamericana sobre el matrimonio igualitario

4.1. El matrimonio de parejas del mismo sexo en Latinoamérica

En el presente subcapítulo, en primer lugar, analizaremos la situación del matrimonio igualitario en América Latina. Para ello, en primer lugar, expondremos la situación del matrimonio igualitario en América Latina y cuál ha sido el rol de los jueces para la conquista de los derechos de las personas homosexuales. En segundo lugar, analizaremos la jurisprudencia de dos países que se pueden considerar como representantes del debate sobre la aprobación del matrimonio igualitario en nuestra región. Finalmente, se realizará una comparación entre los argumentos utilizados por estos países para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

América Latina se ha caracterizado por tener una tradición católica conservadora debido a que partimos de un antecedente histórico en común: la conquista española, que impuso en nuestro territorio sus tradiciones y sus costumbres. Debido a ello, la gran mayoría de la población latinoamericana se declara perteneciente y practicante de la religión católica. Por ello, se comparten los valores y la idea conservadora que se presenta dentro de la religión católica, en su mayoría, pero no de manera exclusiva. Para corroborar ello, compartimos el siguiente gráfico para tener un acercamiento a la cantidad de personas que pertenecen a dicha religión:



Fuente: (ZENIT, 2022)

Debido a ello, la sociedad latinoamericana se ha caracterizado por contar con grandes movimientos sociales que se auto catalogan como cristianos y conservadores. Al respecto, el autor Flores Borda señala lo siguiente:

Debido a la influencia norteamericana, el cristianismo cultural latinoamericano comprende argumentos “provida” y “profamilia”, de uso político. Durante la campaña presidencial costarricense, el evangélico Fabricio Alvarado lideró la primera vuelta gracias a su defensa de la “familia tradicional”, aseverando que “Costa Rica le ha dejado claro a los políticos tradicionales: nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con nuestros hijos” (Flores Borda, 2022)

Otro ejemplo lo podemos observar en México, en el año 2016, en donde ocurrió una marcha multitudinaria en contra del proyecto presentado por el presidente Enrique Peña Nieto a favor del matrimonio igualitario. A esta marcha acudieron miles de personas pertenecientes al Frente Nacional por la Familia quienes utilizaron frases como “la familia, como Dios la formó, es un hombre con una

mujer e hijos” o “la familia se determina como natural porque la familia se define por su origen, no por su condición” (BBC Mundo, 2016). Este no es un caso aislado, Latinoamérica se ha distinguido por ser una región altamente peligrosa para las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ. El inmenso rechazo hacia la comunidad se ve reflejado en las alarmantes cifras respecto a la violencia constante que viven:



Creación propia. Fuente: (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015)

Por tanto, podemos ver que la sociedad latinoamericana se ha mostrado reacia a reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ+ ya que estos comparten ideas relacionadas a la familia como base de la sociedad; sin embargo, ello no significa que en estos países no se hayan reconocido paulatinamente derechos a favor de la comunidad. Ello se debe a que existe una tendencia mayor hacia la tolerancia con una influencia progresista, la cual trata de proteger distintas estructuras familiares que se forman sobre la base de relaciones afectivas más sociales en donde la libertad y el libre desarrollo de la personalidad son la base de la actuación de los poderes públicos; ello se ha podido dar gracias a las sentencias con enfoque más progresista emitidas por los tribunales, los cuales

realizaron una interpretación jurídica más amplia en relación a las nociones de familia, igualdad y prohibición de la discriminación (Cabrales Lucio, 2015).

Ahora bien, a partir del contexto presentado en líneas anteriores, en los siguientes subcapítulos analizaremos jurisprudencia de dos países pioneros en reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ+: Colombia y Argentina.

4.2. Jurisprudencia colombiana

La Constitución Política colombiana tiene la siguiente definición de familia en su artículo 42: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. De la mano de esta acepción, en el Código Civil colombiano, en su artículo 113, se define al matrimonio de la siguiente manera: “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.

Tal como podemos ver, en la normativa colombiana se ha definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, ha sido mediante el desarrollo jurisprudencial que se ha dotado de contenido a la institución matrimonial y se ha ampliado el alcance de tal forma que las uniones homosexuales también son consideradas dentro de la noción de matrimonio. Es así que, a partir del 30 de junio del 2013, las parejas homosexuales pudieron acudir a notarios y jueces colombianos para formalizar su unión mediante un vínculo contractual, ello gracias a la sentencia C-577 del 2011 (Molina Ricuarte & Carrillo Cruz, 2018).

Como podemos ver, fue gracias al desarrollo jurisprudencial que se reconoció el derecho al matrimonio igualitario en Colombia, empero, ello no ocurrió de un momento a otro, la Corte Constitucional tuvo que revisar decisiones anteriores al año 2013 y replantear los alcances del derecho al matrimonio. Para comenzar, la Corte, en base a la Ley 54 de 1990, había afirmado que

establecer una protección diferenciada y especial a las parejas conformadas por personas de distintos sexos no constituiría un acto de discriminación hacia las parejas homosexuales debido a que habría una justificación válida al respecto: promover la procreación, la salvaguarda de los niños, y la necesidad de proteger los derechos patrimoniales de los niños nacidos en matrimonios heterosexuales; por lo tanto, la Corte reconoce que existía un vacío en la ley respecto a parejas del mismo sexo, pero ello no significa que se de en sí mismo un caso de discriminación (Cabral Lucio, 2015).

Sin embargo, en el año 2007, la Corte cuestionó la constitucionalidad de la Ley 54 de 1990 mediante una revisión de constitucionalidad. A partir de ello, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley y señaló que la protección otorgada a las parejas heterosexuales debería hacerse extensiva a las parejas homosexuales. Es a partir de esta sentencia que las parejas homosexuales pueden compartir legalmente sus vidas y propiedades; además, se declara que tienen derecho a beneficiarse de los sistemas de seguridad social, siempre y cuando hayan convivido por lo menos dos años. Para acceder a estos derechos y acreditar su situación, la pareja debería acudir a un notario y certificarlo (Cabral Lucio, 2015).

A pesar del gran avance jurisprudencial que hemos podido exponer anteriormente, aún existía una carencia respecto a la protección jurídica hacia las parejas homosexuales. La Corte no veía esta diferenciación como discriminatoria ni mucho menos inconstitucional ya que, en teoría, se encontraba totalmente justificada; a pesar de ello, esta diferenciación no contó con la debida motivación.

Así es como eventualmente llegamos a la sentencia C-577 del año 2011 en la cual se cuestionó el artículo del Código Civil referido al matrimonio. Debido a su redacción, la regulación del matrimonio sólo se encontraba referida a las parejas heterosexuales, en concordancia con lo establecido en la Constitución. Por tanto, al realizar una interpretación literal, podríamos afirmar que el matrimonio se encontraba regulado casi exclusivamente para las parejas

conformadas por personas de distinto sexo lo cual excluía la posibilidad de formar familias de las parejas homosexuales.

El análisis de la Corte en la sentencia mencionada lo llevó a determinar que las parejas del mismo sexo compartían un elemento en común que les permite configurarse como familia (Molina Ricuarte & Carrillo Cruz, 2018). La Corte señaló que las uniones homosexuales estables cuentan con los elementos necesarios que dotan de identidad a la familia, debido a que sus vínculos tienen como objetivo desarrollar un plan de vida basado en el apoyo mutuo y la compañía; por tanto, se debe interpretar el artículo 42 de tal manera que se abarque a las parejas homosexuales ya que estos vínculos también son naturales y jurídicos (Corte Constitucional de Colombia, 2011)

Como pudimos ver, es gracias al desarrollo jurisprudencial que el matrimonio de personas homosexuales fue reconocido en Colombia. A partir de estas sentencias, podemos observar que los jueces han tenido la labor de desarrollar más a profundidad el contenido del derecho al matrimonio. Lo más resaltante es que el argumento utilizado para el reconocimiento del matrimonio igualitario es la defensa del derecho a la igualdad de las personas homosexuales. A partir de esta ampliación del contenido se modificó la percepción de familia que tenía arraigada la Corte y se optó por una mirada mucho más inclusiva y progresista. Ahora que ya hemos analizado la jurisprudencia colombiana, a continuación, procederemos a analizar la jurisprudencia argentina.

4.3. Jurisprudencia argentina

El artículo 14 bis de la Constitución de Argentina menciona la protección integral a la familia y la defensa del bien de familia por parte del Estado; sin embargo, en ningún artículo se brinda una definición de familia. De la mano con ello, el artículo 172 de su Código Civil señala lo siguiente: “es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo”.

Por lo tanto, la redacción de los artículos mencionados no delimita estrictamente el contenido del matrimonio y de la familia. Debido a ello, ha sido el desarrollo jurisprudencial el que se ha encargado de dotar de contenido a la familia y al matrimonio. El desarrollo jurisprudencial comenzó el 10 de noviembre del 2009, cuando el Tribunal Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires aceptó el recurso de amparo interpuesto por una pareja homosexual que buscaba casarse. En dicho recurso, la pareja cuestiona la constitucionalidad del artículo 172 que, como vimos anteriormente, sí establece la relación entre hombre y mujer para celebrar el matrimonio.

Para desarrollar este caso, el Tribunal recurrió a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, del 1 de octubre de 1996, cuyo artículo 11 señala lo siguiente:

Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, **orientación sexual**, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo (...). (el resaltado es nuestro).

A partir de este artículo, el Tribunal argumentó que en este caso se invierte la carga de la prueba y le corresponde al Estado probar razones suficientes para crear diferencias en base a una “categoría sospechosa” como lo sería la orientación sexual. Al realizar su evaluación, una de las conclusiones del Tribunal fue que el propósito de tener clasificaciones que se encuentren fundamentadas en la orientación sexual es que se evite la creación de un prejuicio hacia la población LGTBIQ y, de esa manera, eliminar paulatinamente la idea de que existe una situación de inferioridad jurídica hacia esta población (Cabrales Lucio, 2010)

En atención a lo señalado, el Tribunal concluyó que no se puede realizar una clasificación basada enteramente en la orientación sexual de las personas, con

la intención de que se busque propagar la discriminación negativa sufrida históricamente por las personas homosexuales (Cabrales Lucio, 2015). Por tanto, declaró inconstitucionales los artículos del Código Civil alegados por la parte demandante y, a partir de ese momento, determinó que los matrimonios podrían ser inscritos en el Registro Civil.

Sin embargo, se presentó ante el Tribunal Civil un recurso de anulación para celebrar el matrimonio que terminó con una medida cautelar “innovativa” que implicaba la suspensión temporal del permiso para registrar el matrimonio. La base de la motivación de la medida cautelar se encontraba en la interpretación literal de los artículos cuestionados ya que limitaba el matrimonio a solo parejas heterosexuales y que la Corte buscó reformar el Código Civil sin tomar en cuenta que ello es potestad exclusiva del Poder Legislativo. Finalmente, la pareja no pudo registrar su matrimonio en Buenos Aires y por ello tuvieron que trasladarse a la ciudad de Ushuaia que fue la primera ciudad en Latinoamérica en donde se registró un matrimonio homosexual. Posteriormente, en el año 2010 se aprobó la ley que autoriza el matrimonio homosexual en todo el país (Ley 26.618), y es a partir de esta ley que se le otorgan todos los derechos sociales, sin ningún tipo de distinción, a las parejas homosexuales (Cabrales Lucio, 2015).

Como pudimos observar, en el caso de ambos países, las Cortes constitucionales tomaron un rol activo en el desarrollo del contenido del matrimonio y la familia. Ha sido mediante el desarrollo jurisprudencial que estos han buscado ampliar la protección jurisdiccional hacia las parejas homosexuales, argumentando que no hay justificación suficiente para excluirlas de dicha protección. Entre los argumentos más resaltantes tenemos el reconocimiento de que el matrimonio tiene como finalidad el desarrollo de un plan de vida en pareja, sin importar el sexo de las personas que la conforman, y que en la realidad no existen verdaderas diferencias entre las parejas homosexuales y heterosexuales ya que estas están basadas en prejuicios por parte de una sociedad conservadora.

Ahora que hemos analizado dos países latinoamericanos, en el siguiente subcapítulo procederemos a analizar cómo está regulado el matrimonio en nuestro país y cuáles han sido las iniciativas legislativas que tuvieron como objetivo extender el contenido del matrimonio a las parejas homosexuales.

5. El matrimonio en el ordenamiento jurídico peruano: de la Constitución al Código Civil

5.1.- El matrimonio en la Constitución Política del Perú

En nuestra Constitución Política, que data del año 1993, su artículo 4, perteneciente al Capítulo II sobre los derechos sociales y económicos, se establece la protección a la familia y la promoción del matrimonio de la siguiente manera:

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

Nuestra Constitución señala que el matrimonio y la familia son una base fundamental para la sociedad; sin embargo, no la ha dotado de contenido señalando quiénes conforman una familia, o qué quiere decir con “institutos naturales” para la sociedad. Además de ello, debemos preguntarnos, que el matrimonio esté estipulado en la Constitución de esa manera ¿lo hace un derecho fundamental? Al respecto, debemos hacer referencia al Exp N° 2868-2004-AA/TC, en el cual, en su fundamento 13, señala lo siguiente:

13. En primer lugar, el Tribunal ha de recordar que del artículo 4° de la Norma Fundamental, no es posible derivar un derecho *constitucional* al matrimonio. En efecto, cuando dicho precepto fundamental establece que el “Estado protege a la familia y promueve el matrimonio”, reconociéndolos como “institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, con ello simplemente se ha limitado a garantizar constitucionalmente ambos institutos [la familia y el matrimonio]

con una protección especial, la derivada de su consagración en el propio texto constitucional.

Más que de unos derechos fundamentales a la familia y al matrimonio, en realidad, se trata de dos *institutos jurídicos constitucionalmente garantizados* (...). (TC del Perú, 2004)

Por tanto, de la cita anterior, vemos que el matrimonio no es un derecho fundamental sino un instituto jurídico constitucionalmente garantizado. Esta protección especial que dota el TC al matrimonio implica que se reconoce a este como una institución que forma parte de las bases estructurales de nuestra sociedad; por lo tanto, se busca que los rasgos esenciales del matrimonio sean protegidos y, para ello, es necesario que el legislador no pueda modificar su contenido de manera arbitraria ya que terminaría por desnaturalizarlo (Ugarte Mostajo, 2014).

Como vimos, al utilizar el término instituto jurídico constitucionalmente garantizado, lo que se busca es proteger el contenido del matrimonio; sin embargo, la misma constitución no ha sido expresa respecto a qué implica el matrimonio y qué se busca proteger. Debido a ello, ha sido la jurisprudencia constitucional la que ha tenido que ir desarrollando el contenido de la familia y el matrimonio; al respecto, recurrimos a la sentencia del Exp N° 09332-2006-PA/TC:

7. Desde la perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. (...). Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de uniones de hecho, las monoparentales o las que en doctrina se han denominado familias reconstruidas (TC del Perú, 2007):

Ahora bien, con la sentencia anterior podemos ver que la posición del TC es una más abierta respecto a las diferentes concepciones de familia que se han

ido desarrollando durante el transcurso del tiempo. El TC tiene una posición clara respecto a que la institución de la familia no se ha mantenido p etra y que para formar una, no es necesario que est e fundada en un matrimonio, ya que reconoce que tambi en pueden formarse en base a uniones de hecho o a partir de familias reconstruidas. Por lo tanto, la Constituci n no ha asumido un concepto  nico de familia y, en realidad, se ha mostrado abierta y respetuosa a la pluralidad de las diversas formas de establecer una familia; de todas formas, el Estado alienta a la formalizaci n de las mismas para quienes deseen contraer matrimonio (Fernandez Revoredo, 2014).

Sin embargo, no podemos asumir que este fue el contenido que el legislador busc  proteger al momento de redactar el art culo 4 de la Constituci n de 1993. Para ello, debemos recurrir al concepto de matrimonio que se encuentra en nuestro C digo Civil, en el art culo 234: “uni n voluntariamente concertada por un var n y una mujer legalmente aptos para ella (...) a fin de hacer vida en com n”.

Por tanto, del C digo Civil se desprende directamente la caracter stica de la heterosexualidad para el reconocimiento del matrimonio. Adem s, en el a o 1984, en la cultura jur dica de nuestro pa s, se relacionaba mucho el concepto de matrimonio con el concepto de familia. Por lo tanto, en la  poca en la que fue aprobada nuestra Carta Magna actual, podemos suponer que el legislador siempre tuvo presente la definici n redactada en nuestro C digo Civil y, por tanto, considerar a la heterosexualidad como rasgo esencial del matrimonio; ello pues, si hubiera querido establecer lo contrario, lo hubiera colocado expresamente en nuestra Constituci n, sin embargo, al no hacerlo, podemos entender que la uni n de personas de diferentes sexos es un elemento constitutivo del matrimonio (Ugarte Mostajo, 2014).

Hemos presentado dos posiciones con respecto al matrimonio: en primer lugar, encontramos que el contenido esencial del matrimonio no se encuentra definida por lo establecido en la Constituci n y que, por tanto, es responsabilidad de los

magistrados del TC dotarla de contenido mediante sus sentencias; en segundo lugar, tenemos la posición en la cual señalamos que el legislador, al momento de regular el matrimonio, tuvo en mente que la heterosexualidad era un elemento fundante del matrimonio y que, por lo tanto, se debe interpretar de esta manera ya que es la más acorde al contenido del Código Civil.

A continuación, en el siguiente subcapítulo, veremos más a detalle qué señala el Código Civil peruano respecto al matrimonio.

5.2.- El matrimonio en el Código Civil peruano

En el Código Civil, en el artículo 234, se define al matrimonio de la siguiente manera:

Unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.

A partir de este artículo podríamos señalar que existen distintos elementos que componen el matrimonio: debe ser voluntario, entre varón y mujer, que se encuentren legalmente aptos para optar por el matrimonio. Por lo tanto, contrario a lo expresado en la Constitución, se puede observar que en el Código Civil hay un claro predominio de la concepción heterosexual de las relaciones afectivas. Esta característica se ha pensado así desde antes de la promulgación del Código Civil de 1984, en específico, deberíamos retroceder hasta el primer Código Civil en el año 1852.

El primer Código Civil reguló el matrimonio en base al Código de las Siete Partidas, el cual fue redactado por Alfonso el Sabio en España durante el reinado de Alfonso X (1221-1284). En ese sentido, el artículo sobre el matrimonio, en el mencionado cuerpo normativo, estaba estipulado de tal

manera que se establecía que los elementos fundantes del matrimonio eran: la unión de hombre y mujer, la lealtad a la pareja, la intención de tener una vida en conjunto (Rodríguez Iturri, 1990).

El Código Civil siguiente, del año 1936, no contó con una definición de matrimonio; sin embargo, a partir de los artículos del Libro II, sobre el Derecho de Familia, y numerosa doctrina relacionada al mismo, podemos afirmar que el matrimonio contaba con las siguientes características: monogamia, heterosexualidad y estabilidad del vínculo; sin embargo, en este código se reguló el divorcio vincular, por lo cual se terminó apartando de la indisolubilidad (Ugarte Mostajo, 2014).

Por lo tanto, podemos observar que la heterosexualidad es una característica constante. En realidad, el debate mientras se promulgaba el Código Civil de 1936 estaba centrado en el tema del divorcio y, por lo tanto, se tomaba por sentado que la heterosexualidad era un elemento constitutivo del matrimonio. Es a partir de estos dos códigos civiles que se esgrime la definición de matrimonio que, posteriormente, encontramos en nuestro Código Civil actual.

En consecuencia, el componente heterosexual se ve como determinante para la noción de matrimonio desde el inicio, en el año 1852; sin embargo, tomar la orientación sexual de las personas como elementos constitutivos para el acceso a derechos, sin tener una motivación adecuada, puede considerarse como discriminatorio ya que, al momento de establecer este “requisito”, no se ha realizado una motivación adecuada que justifique diferenciar las relaciones afectivas heterosexuales de las homosexuales. Debido a ello, se estarían vulnerando el derecho a la igualdad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo cual será desarrollado más adelante.

Ahora que ya conocemos las definiciones de matrimonio tanto en la Constitución como en el Código Civil, en el siguiente subcapítulo vamos a analizar los proyectos de Ley, presentados por el Congreso de la República,

que tenían la intención de regular la unión civil y la unión matrimonial en el Perú.

5.3.- Análisis sobre proyectos de Ley relacionados a la unión matrimonial de personas del mismo sexo

En el año 2013, el excongresista Carlos Bruce presentó como propuesta legislativa la Ley que establece la Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Al respecto, como características de la Unión Civil se encontraban las siguientes: unión voluntaria por dos personas del mismo sexo, esta unión les garantizaba el goce de derechos y deberes para con el otro, se debía registrar en el Registro Personal de los Registros Civiles para ser reconocido, la denominación era de “compañeros civiles” (Bruce, 2013).

Con respecto a los derechos y deberes que implica la figura de la Unión Civil, el artículo 4 del mismo proyecto de ley establece entre ellos la formación de una sociedad de gananciales entre los compañeros civiles, en caso opten por ello, sino pueden registrarse por bienes separados; el tratamiento de los compañeros civiles como parientes de primer grado; y, el reconocimiento de beneficios de protección social que otorgue el Estado (Bruce, 2013).

Sin embargo, el 10 de marzo del año 2015, el proyecto de ley expuesto fue archivado por la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Siete congresistas de la comisión votaron en contra, cuatro a favor y dos abstenciones. Posteriormente, el 22 de octubre del 2021, la congresista Susel Paredes presentó el Proyecto de Ley 525/2021-CR: Ley de Matrimonio Igualitario.

Con relación a esta ley, el artículo 1 propone la modificación del artículo 234 del Código Civil, buscando que se elimine el requisito de que sean un varón y una mujer para el reconocimiento del matrimonio; de esa manera, las uniones homosexuales serían reconocidas como matrimonios sin necesidad de crear una categoría distinta y gozarían de los mismos derechos que las parejas

heterosexuales. A partir de la modificación del artículo 234 del Código Civil, el siguiente artículo del proyecto hace referencia a que todos los derechos y obligaciones que forman parte del matrimonio terminarán siendo reconocidos también a las parejas homosexuales. Al respecto el artículo 2 señala lo siguiente:

Aplicación de la ley

Todas las referencias a la institución del matrimonio civil que contiene el ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo y al constituido por personas de distinto sexo. (Paredes Piqué, 2021).

A partir de la exposición de los artículos de ambos proyectos podemos observar una diferencia crucial: la creación o no de una figura distinta para las parejas homosexuales. En principio, la idea de la unión civil busca el reconocimiento de derechos y obligaciones de las parejas homosexuales similares, pero no exactamente iguales a las del matrimonio. Sin embargo, vale la pena preguntarnos ¿Es necesario crear una figura distinta? ¿Cuál es el verdadero propósito de tener una ley distinta solo para las parejas homosexuales?

Cuestionarnos la creación de una figura aparte solo para las parejas homosexuales es importante. Más allá de la diferencia de orientación sexual, no encontramos motivación suficiente para hacer tal diferenciación. En la práctica se estaría segregando nuevamente a las parejas del mismo sexo y limitando el reconocimiento de sus derechos solo en base a una razón prohibida: la orientación sexual. Al respecto, la autora Fernández concluyó lo siguiente:

El daño que se produce a las personas a quienes el Estado no les reconoce en igualdad sus arreglos afectivos por no sujetarse al paradigma de la heterosexualidad, está dirigido a su dignidad, El mensaje simbólico es que tales personas y sus formas de vivir y sentir la sexualidad no son valoradas por

lo que tienen un status inferior. La unión civil a través de la cual se pretende conceder algunos efectos a las uniones entre personas del mismo sexo no repara ese daño a la dignidad, por el contrario, legitima a través del ordenamiento jurídico la mirada segregacionista de la diversidad sexual (Fernandez Revoredo, 2014).

Por tanto, concordamos con la posición detallada en el párrafo anterior, la idea de crear una figura jurídica distinta sólo busca perpetuar la imagen de que la heteronormatividad es lo “más valorado” dentro de nuestra sociedad, a tal punto que no se puede permitir que parejas homosexuales formen parte de sus instituciones. Debido a ello, consideramos que el proyecto de ley presentado por la congresista Susel Paredes era el más adecuado para la protección de los derechos a la igualdad y la dignidad de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, al igual que el proyecto del congresista Carlos Bruce, este fue rechazado en enero de 2023 por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Ahora que contamos con todo el contexto respecto a cómo se percibe el matrimonio igualitario en América Latina y en el Perú, en el siguiente capítulo comenzaremos con el análisis jurídico de la decisión del TC del expediente materia de análisis.

6. Análisis de los argumentos del Tribunal Constitucional

6.1.- Identificación de los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional para declarar improcedente la demanda de Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Lozada

En primer lugar, el análisis de la controversia comienza con una cita al Libro X de nuestro Código Civil, referido al Derecho Internacional Privado. Respecto a ello, los magistrados del TC argumentan que el mismo Código Civil coloca límites para reconocer derechos que fuesen adquiridos fuera del Perú. Estos límites serían: compatibilidad con el orden público internacional y las buenas costumbres. Además de ello, citan al Código Bustamante, que fue suscrito por

el Perú en el año 1928, en el cual se establece que los preceptos constitucionales forman parte del orden público internacional.

Al respecto, los magistrados, en su apartado número 4, señalan que, si bien es cierto el matrimonio materia de análisis fue celebrado válidamente en el Estado de Miami, en los Estados Unidos, este matrimonio cuenta con características que van directamente en contra de lo establecido en el Código Civil y en la Constitución. Por lo tanto, estos concluyen que, como la noción de matrimonio forma parte del orden público internacional, esta demanda termina encontrándose fuera del ámbito de reconocimiento del Derecho peruano.

Posterior a este argumento, los magistrados se amparan en la idea de matrimonio establecida en el Código Civil que, como hemos visto anteriormente, cuenta con dos elementos: una unión voluntaria, y que sea celebrado entre un varón y una mujer. A partir de ello, señalan que esta misma definición se encuentra en la Constitución, en el artículo 5, que define el concubinato con las mismas características señaladas en el Código Civil.

A partir de ello, los magistrados utilizan al concubinato para equipararlo con el matrimonio y concluir que, dentro de nuestra Carta Magna, la unión de dos mujeres no daría origen a un matrimonio y, por ende, a una sociedad de gananciales, como lo señalan en el artículo referido al concubinato.

Para reforzar aún más sus argumentos, recurren a la Declaración Universal de Derechos Humanos ya que, tal como ellos señalan, los derechos y libertades de la Constitución deben ser interpretadas de acuerdo a la misma. Por tanto, ya que en la Declaración se establece que “los hombres y las mujeres” tienen derecho a casarse y fundar una familia, es solo a estos que corresponde el derecho al matrimonio, puesto que no se señala a las personas en general, sin distinción de sexo, sino, por el contrario, es muy específico al señalar hombres y mujeres. Por tanto, una lectura en conjunto de la Constitución y la Declaración Universal devendría en que esta noción de matrimonio tiene el más alto rango constitucional y, por consiguiente, no podría reconocerse el matrimonio, a pesar de ser totalmente legal en Estados Unidos.

Posteriormente, los magistrados cuestionan que el no reconocimiento del matrimonio de las demandantes vulnere su derecho a la igualdad. De acuerdo con ello, recurren nuevamente al artículo 5 de la Constitución que, como se estableció anteriormente, contiene la noción de matrimonio. Señalan que tanto el derecho a la igualdad como el derecho al matrimonio deben ser leídos de manera conjunta y que, por delimitar el contenido, no implica que se esté generando algún tipo de diferenciación.

Continuando con su argumentación, los magistrados analizan la vinculatoriedad de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH. Para ello, primero hacen referencia a que el país solicitante, en este caso Costa Rica, buscaba consultar era un caso puntual sobre cambio de nombre de una persona, más no regular el matrimonio igualitario. Además, ponen énfasis en mencionar que, en uno de los votos singulares de la Opinión Consultiva, uno de los jueces fue explícito en señalar que estas no son vinculantes a los Estados miembros y que, por tanto, no corresponde la adopción de ninguna acción por parte de los mismos. Ello se corrobora ya que ninguno de los países miembros, excepto Ecuador, ha regulado el matrimonio igualitario en base a la Opinión Consultiva. Si bien es cierto, hay países miembros que sí han regulado el matrimonio igualitario, ellos lo hicieron por decisión de sus gobiernos y no por acatar la Opinión Consultiva.

Finalmente, los magistrados hacen referencia al proyecto de ley analizado anteriormente, el cual fue archivado en el año 2015. Al respecto, señalan que para implementar el matrimonio igualitario en nuestro país sería necesario realizar una reforma constitucional. Por lo tanto, si es que los magistrados decidieran declarar fundada la demanda, consideran que estarían usurpando las funciones del poder legislativo y no cumpliendo con lo que señala la Constitución.

Por tanto, la mayoría de los magistrados declaran improcedente la demanda ya que consideran que en nuestro país no existe el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo.

6.2.- En el contexto del caso, ¿los hechos y el petitorio de la demanda de Susel Ana María Paredes Piqué y Gracias María Francisca Aljovín de Lozada no estaban referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invocaron en su demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil?

6.2.1.- Los derechos constitucionales que invocaron las demandantes y su contenido constitucionalmente protegido

Para continuar con esta investigación, es necesario que analicemos qué derechos invocaron las demandantes al presentar su demanda de amparo y determinar cuál es su contenido constitucionalmente protegido. Para ello, pasaremos a enumerar todos los derechos que fueron alegados por las demandantes, desarrollar su contenido constitucionalmente protegido para, finalmente, determinar si estos han sido efectivamente vulnerados por los hechos del caso. Los derechos alegados son los siguientes:

- a. A la dignidad
- b. A la igualdad
- c. A la personalidad jurídica
- d. A la identidad
- e. A la integridad moral, psíquica y física
- f. A libre desarrollo de la personalidad

En primer lugar, con respecto al derecho a la dignidad, el TC ha sabido dotar de contenido al mismo y lo ha demostrado en distintas sentencias. Una de ellas es el Exp. N° 10087-2005-PA/TC en la cual, en su fundamento 5, señala lo siguiente:

En ese sentido, la dignidad de la persona humana constituye un valor y un principio constitucional portador de valores constitucionales que prohíbe, consiguientemente, que aquélla sea un mero objeto del poder del Estado o se le dé un tratamiento instrumental. Pero la dignidad también es un *dínamo* de los derechos fundamentales; por ello es parámetro fundamental de la actividad

del Estado y de la sociedad, así como la *fuentes* de los derechos fundamentales. (TC del Perú , 2007).

Para complementar la definición anterior, el TC también especifica que la protección al derecho a la dignidad no solo se satisface con la positivización de este en la Constitución, sino que es necesario que el Estado tenga un rol activo en su protección. En consecuencia, los individuos tenemos el derecho de exigir la intervención del Estado con el propósito que cumpla su rol de protección del derecho a la dignidad (TC del Perú, 2006).

Por tanto, como contenido constitucionalmente protegido del derecho a la dignidad podemos afirmar lo siguiente: busca proteger que la persona no tenga un mero uso instrumental y por tanto sirve como un límite para la actuación del Estado; además, en pro de proteger la dignidad es necesario que el Estado cumpla con ciertas obligaciones y garantice niveles de protección adecuados. La dignidad se encuentra estipulada en el primer artículo de la Constitución, en ese sentido, es el punto de referencia para los demás derechos fundamentales. Tal como veremos en el desarrollo del informe, los derechos efectivamente afectados que fueron alegados por las demandantes tienen conexión con el derecho a la dignidad.

El siguiente derecho a analizar es el derecho a la igualdad. Al respecto, el TC, en el Exp. 00009-2007-PI/TC en su fundamento 9, ha señalado lo siguiente:

(...) estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. (...) Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscriben todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable (TC del Perú, 2007).

A partir de la definición anterior, podemos afirmar que el derecho a la igualdad implica que no siempre se debe tratar exactamente igual a las personas; en cambio, que es necesario analizar las diferentes circunstancias y situaciones

en las cuales estas se encuentran para determinar cuál es el trato más adecuado, para así garantizar un verdadero acceso igualitario al derecho. En ese sentido, el derecho a la igualdad implica dos escenarios: que las personas sean tratadas por igual cuando se encuentren en la misma situación, y que el Estado no puede dar un trato diferenciado a una situación exactamente igual. Por lo tanto, al momento de analizar el derecho a la igualdad es necesario desarrollar una motivación suficiente y objetiva respecto a las diferencias que justificarían un trato desigual en situaciones que, aparentemente, son iguales. Debido a ello, argumentos que recurran a estereotipos o prejuicios para crear algún tipo de trato desigual, estarían vulnerando directamente el derecho a la igualdad de las personas.

Continuando con el análisis, tenemos el Derecho a la personalidad jurídica. En ese sentido, hemos recurrido a la siguiente cita:

Reconocer la capacidad que tiene toda persona de ser titular de derechos y deberes. Conllevar una obligación directa por para el Estado, esto es que se debe procurar los medios y condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido de manera libre y plena por sus titulares (Matsumoto Benitez, 2013).

Por tanto, al respecto podemos afirmar que el derecho a la personalidad jurídica implica la obligación del Estado de reconocer derechos y obligaciones a sus ciudadanos. Además, implica que el Estado garantice que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos. Es importante recalcar la importancia de este derecho ya que, sin el reconocimiento de este, se estaría limitando las posibilidades de desarrollo de las personas. Un ejemplo claro del ejercicio del derecho a la personalidad jurídica es la celebración de un contrato; de no reconocérsele los derechos y las obligaciones a las partes no sería posible la celebración de uno y, por lo tanto, se verían limitados de realizar sus transacciones. En el caso que nos compete, al no reconocer el matrimonio a las parejas homosexuales se limita el ejercicio de los derechos y obligaciones que este implica tales como la herencia, la obligación de prestar alimento, el deber de cohabitación, etc.

El siguiente derecho a analizar es el referido a la integridad moral, física y psíquica. Al respecto, recurrimos al Exp. N° 010-2002-AI/TC, en donde el TC desarrolla el contenido esencial del derecho a la integridad personal:

El respeto al contenido esencial del derecho a la integridad personal, tanto en lo que respecta al ámbito físico como en lo que atañe al ámbito espiritual y psíquico de la persona, transita entre aquellos atributos que constituyen la esencia mínima imperturbable en la esfera subjetiva del individuo. Inclusive en aquellos casos en que pueda resultar justificable el uso de medidas de fuerza, éstas deben tener lugar en circunstancias verdaderamente excepcionales, y nunca en grado tal que conlleven el propósito de humillar al individuo o resquebrajar su resistencia física o moral, dado que esta afectación puede desembocar incluso en la negación de su condición de persona (...) (TC del Perú, 2003).

Por tanto, de la anterior definición podemos confirmar que el derecho a la integridad personal busca proteger el desarrollo pleno de la vida de las personas sin buscar afectar su cuerpo, sus convicciones o su estilo de vida. Por tanto, no es suficiente que el Estado garantice la protección física, sino que es necesario la protección emocional y psicológica de la persona y, por ende, evitar abusos desproporcionales hacia la persona que pueden derivar en traumas emocionales. Finalmente, también se debe garantizar que las personas puedan desarrollar su vida plenamente mediante a través de la satisfacción de sus propias convicciones, en ello se basa la integridad moral (Guzmán, 2007).

Finalmente, procederemos a analizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, nuestro TC, en la Exp. N° 007-2006-PI/TC, desarrolla su contenido en el fundamento 47:

47. El libre desenvolvimiento de la personalidad constituye un derecho fundamental innominado o implícito que se deriva o funda en el principio fundamental de dignidad de la persona (art. 1 y 3, Constitución). En efecto, la valoración de la persona como centro del Estado y de la sociedad, como ser moral con capacidad de autodeterminación, implica que deba estarle también

garantizado la libre manifestación de tal capacidad a través de su libre actuación general en la sociedad (TC del Perú, 2007).

Por tanto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica que el Estado está en la obligación de garantizar que las personas puedan hacer lo que ellos deseen, claro está, siempre y cuando no vulneren los derechos de las demás personas. Este derecho implica una protección sumamente amplia por parte del Estado para garantizar la libre actuación de las personas; por lo tanto, es importante diferenciar este derecho frente a otros, como el derecho a la libertad de expresión, que también reconocen una protección especial por parte del Estado, pero de un ámbito específico. En cambio, el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege la autonomía de las personas en el ámbito más amplio posible. Por consiguiente, el libre desarrollo de la personalidad es un reconocimiento hacia las personas como tales y, por ello, se encuentran en la capacidad de determinar qué es lo que desean hacer en su plan de vida.

6.2.2.- ¿Es válido interpretar la Constitución a partir de las disposiciones de la ley? El concepto constitucional de matrimonio del artículo 4 de la Constitución y su desarrollo por el artículo 234 del Código Civil

Tal como vimos en el desarrollo de los argumentos del TC, los magistrados dotaron de contenido a la institución del matrimonio reconocido en el artículo 4 de la Constitución en base a los requisitos establecidos en el artículo 234 del Código Civil. El propósito de este subcapítulo es comprender si es que esa es la manera adecuada de dotar de contenido a la Constitución.

Para ello, debemos conocer qué es el principio de jerarquía normativa. Debemos entender, en primer lugar, que el Derecho está compuesto por distintas fuentes: constituciones, leyes, reglamentos, decretos, la costumbre, precedentes etc. Sin embargo, ello no significa que todas tengan la misma importancia dentro del ordenamiento. Al respecto, sabemos que, en base a la teoría de Hans Kelsen, nuestro sistema se encuentra ordenado en una jerarquía escalonada que se encuentra compuesta por tres clases principales

de normas: la Constitución, la legislación y los actos administrativos (Fumish, 1972).

La idea que se encuentra detrás del principio de jerarquía normativa es determinar qué fuente del Derecho prevalece sobre otras y determinar la validez de estas; es decir, las fuentes no serán válidas si contradicen una norma superior dentro del ordenamiento escalonado de fuentes jurídicas. Ahora, ¿por qué la Constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento? La respuesta se encuentra en el poder constituyente.

El poder constituyente proviene del pueblo, de la soberanía popular. Es a partir de la organización del pueblo, y su participación en una asamblea constituyente, o en un referéndum constitucional, que se fundamenta la supremacía de la Constitución. Ello se debe a que, mediante el voto, se garantiza la participación y opinión de todos los ciudadanos lo cual es la base de nuestro Estado Democrático y de Derecho. Es a partir del poder constituyente que surgen los poderes constituidos, es decir, el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. En consecuencia, la Constitución va por encima de las demás fuentes del Derecho ya que su origen es el poder constituyente; en cambio, las demás fuentes del derecho tienen su origen en los poderes constituidos. Para una explicación más técnica al respecto, recurrimos a la siguiente cita:

El poder constituyente (concepto propuesto por Emmanuel Joseph Sieyès, 1748 y 1836) es la voluntad política que determina la existencia de la unidad de su propia expresión, la forma que toma la autoridad política y la estructura jurídica (...). En consecuencia, él es el fundamento de toda autoridad gubernamental. El poder constituyente tiene la facultad de transformar todo el orden social y político, y esto, sin necesariamente cambiar su propia naturaleza (Bohórquez, 2006).

Por lo tanto, como hemos podido observar, la Constitución es la fuente originaria de todo nuestro sistema jurídico. En consecuencia, es la Constitución la que determina el contenido de las demás normas jurídicas. En caso de que las normas inferiores a este no se encuentren en concordancia con lo

establecido por la Constitución, esta misma cuenta con mecanismos para inaplicar el supuesto en un caso específico (control difuso) o para eliminar la norma de todo el ordenamiento (acción de inconstitucionalidad).

Es a partir de esta explicación que nos preguntamos si fue correcta la manera de interpretar la Constitución por parte de los magistrados del TC. Como respuesta preliminar podemos decir que no. Ya hemos visto anteriormente que la Constitución, en su artículo 4, no determina estrictamente los elementos que conforman el matrimonio, sino que se limita a promoverlo y otorgarle su protección. Es en el Código Civil en el cual se definen los dos elementos mencionados anteriormente, entre ellos, la unión entre varón y mujer.

Por lo tanto, en base a lo analizado previamente no podríamos decir que el Código Civil sea un límite al contenido de la Constitución puesto que se encuentra en una posición inferior dentro del orden de prelación del sistema de fuentes del Derecho. La interpretación de “abajo hacia arriba” estaría limitando la interpretación de la Constitución y, por consecuencia, se estaría reduciendo el alcance de los derechos estipulados en esta ya que se reduce a solamente “la unión de varones y mujeres” sin ningún fundamento objetivo más que el de los límites impuestos por el Código Civil.

6.2.3.- Análisis de la posición del Tribunal Constitucional respecto de las lesiones alegadas por las demandantes, Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Lozada, vinculadas con los derechos que invocaron

Para el desarrollo del siguiente subcapítulo, analizaremos tanto el voto de la mayoría de los magistrados como los fundamentos de voto de cada uno de los 6 miembros del TC.

Con respecto a la posición de la mayoría de los magistrados del TC, en el apartado 15 de la sentencia, se señala que, en realidad, el no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro ordenamiento no estaría vulnerando el derecho a la igualdad de las demandantes. Ello se debería a que el derecho a la igualdad, establecida en nuestra Constitución, no puede ser leída

de manera aislada, sino que debe ser interpretado en conjunto con lo establecido en el artículo 5 de la Carta Magna que define el concubinato y que tiene como una de sus características que sea la unión entre varón y mujer. Por lo tanto, los magistrados argumentan que dicho artículo dota de contenido al matrimonio y que, de reconocerse el matrimonio de las demandantes, se estaría yendo en contra de la definición y, por ende, se vaciaría el contenido de la institución (TC del Perú, 2022).

A partir de lo explicado anteriormente, los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales y Blume Fortini, alegan que en este caso no se estaría vulnerando el derecho a la igualdad debido a que el contenido de la institución del matrimonio ya se encuentra definido y que, por ende, es un contenido pétreo y que, de reconocer lo contrario, se vaciaría de contenido al matrimonio. Por lo tanto, tenemos un concepto totalmente cerrado de lo que puede ser considerado como matrimonio ya que, como señalaron los argumentos anteriores, tanto el ámbito internacional como nacional sólo le reconocen el derecho al matrimonio a los hombres y mujeres. Ello podemos verlo en el apartado 11 de la sentencia:

11. La Declaración Universal no dice, entonces, que el derecho a casarse corresponde a las personas, sin referencia a su sexo; dice, por el contrario, que corresponde a “los hombres y las mujeres”. Tal derecho corresponde, por tanto, a personas de sexo distinto (TC del Perú, 2022).

La mayoría de los magistrados votó considerando que no se está vulnerando el derecho a la igualdad de las demandantes, tomando en cuenta dos argumentos: el contenido del matrimonio ya está definido, y que el Derecho Internacional también reconoce esta definición de matrimonio como la única y, al ser la que se encuentra en el Código Civil, este forma parte del Orden Público Internacional. Sin embargo, no tomaron en cuenta en su análisis el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad. Tal como vimos anteriormente, el derecho a la igualdad implica tratar de la misma manera a las personas que se encuentran en situaciones iguales, o

sustancialmente iguales, y distinto a las personas que se encuentran en situaciones distintas.

De modo que, el análisis que debió realizar el TC tendría que haber estado enfocado en identificar las semejanzas, o diferencias, entre el reconocimiento de los matrimonios heterosexuales y qué podría ocasionar, en nuestro sistema jurídico, el reconocimiento de los matrimonios homosexuales. Enfocar el argumento en solo el “contenido” del matrimonio, asumiendo que la definición es un contenido pétreo que no puede ser influenciado por los cambios en la sociedad, estaría dejando de lado el verdadero contenido del derecho a la igualdad. Por lo tanto, consideramos que no es un argumento suficiente para descartar la vulneración del derecho a la igualdad y que, al contrario, no se ha analizado verdaderamente el fondo del derecho.

En segundo lugar, con relación al fundamento de voto del magistrado Ferrero Costa, este se encuentra sumamente relacionado con el análisis de la mayoría de los magistrados del Tribunal. Para comenzar, señala que el matrimonio es un término que solamente se puede designar a la unión heterosexual ya que estas existían antes de la creación de la institución del matrimonio. Lo que quiere decir es que la palabra matrimonio solo puede entenderse para relaciones heterosexuales ya que la creación del término parte exclusivamente de esta realidad. En adición a ello, el magistrado sí decide identificar ciertas diferencias entre el matrimonio heterosexual y el homosexual:

La más elemental diferencia es que, en el caso de las uniones heterosexuales, la complementariedad de los sexos permite que las relaciones sexuales entre hombre y mujer desemboquen en el nacimiento de nuevas personas (descendencia conyugal), lo que dota a estas uniones de un peculiar e intenso valor social, a diferencia de las uniones que estructuralmente (no coyuntural o patológicamente) no pueden dar lugar al nacimiento de nuevas personas. La relevancia social de estas últimas es mucho más limitada (TC del Perú, 2022).

Con respecto a los argumentos presentados por Ferrero Costa, nuevamente se presenta que el concepto de matrimonio se refiere únicamente a la unión heterosexual ya que, según se puede entender, las relaciones heterosexuales

existieron antes de la creación del término y, por lo tanto, este no puede ser modificado. Sin embargo, para “reforzar” su argumento presenta las “diferencias” entre ambos tipos de relaciones, principalmente respecto de la utilidad de las relaciones heterosexuales en la sociedad.

Con relación a ello, consideramos que este argumento instrumentaliza las relaciones heterosexuales con la intención de menospreciar las relaciones homosexuales. Juzgar el valor de las relaciones solo en base a lo mucho o poco que puede aportar a la sociedad vulnera directamente el derecho a la dignidad de las personas que forman parte de estas relaciones. Tal como vimos anteriormente, el derecho a la dignidad implica que las personas puedan hacerse responsables de sus propias acciones y que estas no puedan ser utilizadas como medios para finalidades propias del Estado. En este caso, el magistrado, literalmente, señala que la “relevancia social” de un tipo de relación frente a otra es evidentemente distinta, con la intención de señalar que una relación si “sirve” para la sociedad y otras no.

Por lo tanto, al realizar esta comparación, el magistrado no sólo no está realizando una comparación objetiva entre las relaciones heterosexuales y las homosexuales, sino que, al reducirlas exclusivamente a su utilidad para la procreación, estaría pensando en las personas como meros medios para llegar a un fin. Se deja de lado que el matrimonio es una institución que tiene como propósito que las personas pertenecientes a la relación puedan desarrollar sus planes de vida. Si el matrimonio tuviera como principal propósito la procreación, en nuestro Código Civil tendría que encontrarse la obligación de tener hijos; sin embargo, eso excluiría del matrimonio a las personas infértiles y no permitiría el uso de métodos anticonceptivos dentro del matrimonio. En ese sentido, consideramos que los argumentos presentados por el magistrado Ferrero Costa, están vulnerando los derechos a la igualdad y a la dignidad de las demandantes.

Con respecto a los magistrados Miranda Canales y Blume Fortini, en sus fundamentos de voto, no hacen mayor incidencia respecto a la violación de los derechos de las demandantes. Con respecto al magistrado Miranda Canales,

en su voto individual señala que la improcedencia de la demanda no solo está fundamentada en que el derecho al matrimonio homosexual no se encuentra en la Constitución, sino que también existiría una vía procedimental más idónea que sería el proceso contencioso administrativo. Por otro lado, el magistrado Blume Fortini señala que el Congreso de la República es el encargado de atender el pedido de protección jurídica que solicitan las demandantes y comenzar a analizar la posibilidad de una modificación en la Constitución o en el Código Civil.

Siguiendo con el análisis, la magistrada Ledesma Narváez es la primera en mostrar un voto totalmente discordante respecto a la mayoría de los magistrados. Su voto se divide en siete puntos distintos. Para el presente análisis recurriremos al último punto que es su apreciación del caso. En ese sentido, respecto de la consideración de la mayoría de los magistrados sobre la inexistencia del derecho al matrimonio homosexual en la Constitución, la magistrada señala que no hay razones suficientes para justificar la negativa al reconocimiento del matrimonio de las demandantes ya que este fue celebrado válidamente en el extranjero y porque la misma Corte IDH ha señalado que es necesaria la protección de estas uniones por parte de los Estados. En ese sentido, señala que, de continuarse con la postura expuesta por la mayoría de los magistrados, estaríamos creando dos tipos de ciudadanos: los de primera categoría, que tienen acceso a todos los derechos estipulados en nuestra Carta Magna; y, los de segunda categoría, los cuales no pueden ejercer todos estos derechos sin ninguna justificación válida para restringirlos (TC del Perú, 2022).

En concordancia con lo anterior, nos encontramos totalmente de acuerdo con lo expresado por la magistrada Ledesma. En primer lugar, como observamos anteriormente, los argumentos esbozados por los magistrados no mostraban un verdadero análisis del fondo de la materia respecto al contenido del derecho al matrimonio y, en cambio, se limitaron a “analizar” la definición de matrimonio sin tomar en cuenta qué es lo que verdaderamente implica, tomando a la palabra matrimonio como un mero sustantivo que significa la unión exclusiva de hombre y mujer.

En cambio, la magistrada Ledesma, sí hace un análisis más crítico y señala que, al limitarse el debate a un tema meramente formal, se deja de lado todo el análisis de fondo que requiere el matrimonio homosexual. Se deja de lado que son una población históricamente discriminada en base a sus preferencias sexuales y que, debido a ello, se ha restringido el acceso a una gran cantidad de derechos que están relacionados con el reconocimiento del matrimonio en nuestro país.

En ese sentido, estamos de acuerdo con la magistrada Ledesma cuando menciona que, de continuar con este tipo de argumentación, estaríamos hablando de una diferenciación entre ciudadanos de primera y segunda categoría ya que los magistrados no muestran argumentos objetivos para realizar la diferenciación entre parejas homosexuales y heterosexuales, y, de esa manera, solo estarían buscando restringir el acceso a derechos. En ese aspecto, la magistrada, con su voto en discordia, lo que busca es que se proteja el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las demandantes, y de todas las parejas homosexuales que buscan el reconocimiento de sus derechos.

Tal como vimos anteriormente, el contenido constitucionalmente protegido del derecho al libre desarrollo de la personalidad es la capacidad de autodeterminación de las personas que se vería reflejado con su actuación general en la sociedad. Garantizar este derecho es sumamente importante ya que deriva directamente del derecho a la dignidad de la persona y su capacidad de hacerse responsable por sus propios actos.

Así pues, si tomamos en cuenta que en realidad el matrimonio es más que una palabra para describir la relación entre hombres y mujeres y vemos que su verdadero significado es desarrollar un plan de vida con otra persona a la cual se le otorgan ciertos derechos y obligaciones, al estar negando el goce de este derecho, se estaría interfiriendo de forma arbitraria en la manera en la cual las parejas homosexuales buscan desarrollar sus vidas. Este argumento es la base para señalar que los magistrados colocan a las parejas homosexuales en la calidad de ciudadanos de “segunda categoría” ya que, como hemos podido

observar, los argumentos de los magistrados carecen de fondo, que no sea meros prejuicios de la sociedad, y se centran en temas meramente formales para interpretar de manera restrictiva el texto constitucional y los tratados internacionales.

Finalmente, con respecto al voto del magistrado Espinosa-Saldaña, este también vota de manera disidente frente a los votos de la mayoría de los magistrados. Al respecto, divide su análisis en varios puntos, entre ellos la vulneración del orden público internacional, la supuesta vía más idónea mediante el proceso contencioso administrativo, la vulneración de derechos fundamentales. En relación con la vulneración de derechos, su argumentación se centra, principalmente, en analizar si se vulnera el derecho a la igualdad de las demandantes y el derecho a libre desarrollo de la personalidad. Al respecto señala lo siguiente:

31. (...). Reconocer una cobertura recortada de derechos a algunos(as) sin un debido sustento, o como consecuencia de fórmulas “perfeccionistas” o “paternalistas” es en realidad establecer que existe una clara discriminación. Es, con dolor, asumir que hay personas “completas” o “de primera” y personas “incompletas” o de “segunda”. Y ello, repito, es absolutamente inaceptable, máxime si viene instaurado o asumido por entidades cuya verdadera finalidad debería ser la de satisfacer las necesidades humanas básicas de todos (as), permitiéndoles que el pleno ejercicio de sus derechos solamente admiten limitaciones razonablemente justificadas (TC del Perú, 2022).

Ahora bien, los argumentos citados anteriormente son similares a los presentados por la magistrada Ledesma, se señala que hay una clara vulneración de los derechos a la igualdad y, por ende, al derecho al libre desarrollo de la personalidad y la identidad. Tal como señala el magistrado, los argumentos presentados en el voto mayoritario tienen una idea paternalista de por medio, mediante la cual buscan perfeccionar, en base a sus propios ideales, el comportamiento de las personas. Este pensamiento perfeccionista se relaciona directamente con la idea utilitaria de las relaciones que comentamos anteriormente; considerar que el matrimonio tiene como principal propósito la procreación tiene de por medio la idea perfeccionista de que si o si

las parejas deben tener hijos para el bien de la comunidad y busca interferir en el ámbito privado de las relaciones. Por tanto, este tipo de argumentación, tal como mencionamos anteriormente, limita de manera arbitraria el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las parejas homosexuales.

De la mano con lo anterior, el magistrado menciona dos puntos sumamente importantes: en primer lugar, que el matrimonio implica el desarrollo de un plan de vida de dos personas; y, en segundo lugar, que el matrimonio implica el reconocimiento de derechos y obligaciones para las parejas homosexuales. A partir de ello, podríamos mencionar que, de la mano de los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, también se está buscando proteger el derecho a la personalidad jurídica. Como explicamos anteriormente, este derecho implica la capacidad de toda persona de ser titular de derechos y deberes, y, en conjunto con el reconocimiento, el Estado debe intervenir para asegurar los medios y condiciones para que estos derechos sean reconocidos.

Por lo tanto, y tal como señala el magistrado Espinosa-Saldaña, el Estado estaría incumpliendo su labor como garante de derechos al realizar una diferenciación sumamente arbitraria respecto a las parejas homosexuales y heterosexuales. En ese sentido, el magistrado señala que es obligación de los jueces interpretar los artículos de la Constitución de tal manera que se garantice la mayor protección de los derechos fundamentales. En cambio, en este caso hemos visto una interpretación sumamente restrictiva de la institución del matrimonio y, por tanto, se termina excluyendo de manera arbitraria a las parejas homosexuales y se vulneran directamente sus derechos. En consecuencia, los magistrados estarían incumpliendo su labor de protección y garantía de los derechos, en especial, de las personas que se encuentran en una condición históricamente discriminada.

En conclusión, tal como hemos venido observando en el transcurso del presente trabajo, la deficiencia de la argumentación de la mayoría de los magistrados del TC termina por vulnerar los derechos de las demandantes. Al respecto, consideramos que los principales derechos vulnerados en este caso

fueron: el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la personalidad jurídica.

A continuación, en los siguientes subcapítulos, analizaremos las maneras de interpretar la constitución en pro de garantizar un mayor alcance de protección de los derechos fundamentales.

6.3.- ¿Cómo se debe interpretar la Constitución? Entre una interpretación evolutiva o sociológica y una interpretación histórica o estática de las disposiciones constitucionales que reconocen derechos fundamentales

6.3.1.- Aproximaciones teóricas sobre las teorías evolutivas e históricas de la interpretación de la Constitución

Antes de comenzar a exponer sobre las teorías estáticas y dinámicas de la interpretación, primero debemos definir qué son los métodos de interpretación en el Derecho. Al respecto, podemos decir que los métodos de interpretación tienen como objetivo obtener el contenido de la norma. Se busca esclarecer el significado de la norma en base a las variables de interpretación que hayan sido utilizados (Rubio, 2014)

Por lo tanto, podemos decir que los métodos de interpretación del Derecho sirven para determinar cuál es la finalidad de una norma, qué es lo que busca regular. Estos métodos son utilizados por los jueces para dotar de contenido a las normas y señalar cuál es su alcance. Entre los métodos interpretativos podemos encontrar, por ejemplo, el método literal, el método de la *ratio legis* o el método sistemático.

Sin embargo, la manera de interpretar la Constitución puede llegar a ser algo distinta, y ello se debe a que no estamos tratando con normas jurídicas que se componen de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica; en cambio, nos enfrentamos a un conjunto de normas subjetivas que pueden ser interpretadas de distintas maneras dependiendo del método utilizado ya que los jueces cuentan siempre con cierto rango de discrecionalidad al momento de

realizar sus análisis. Esta discrecionalidad ocurre cuando el mismo Derecho deja un margen de libertad al juez para que este determine los estándares que utilizara al momento de justificar su decisión (Quispe, 2014).

A partir de estas definiciones sobre la interpretación, a continuación, procederemos a desarrollar el contenido teórico respecto a dos teorías: la teoría evolutiva o sociológica de la interpretación de la Constitución y la teoría histórica o estática de interpretación.

En primer lugar, con respecto a la interpretación sociológica o evolutiva, recurrimos a la siguiente definición:

(...) a diferencia de los demás mecanismos tradicionales de interpretación de la norma, el progresivo no parte necesariamente de una norma oscura ambigua, ... Su punto de partida es una norma clara en su sentido - literal, histórico, sistemático y lógico-, pero que, a causa de nuevas circunstancias (sociales económicas, culturales, ...) sobrevenidas, ha de ser aquélla actualizada en su aplicación a esa nueva realidad (Cerdeira, 2019).

Por lo tanto, a partir de la definición anterior, podemos decir que la interpretación evolutiva busca adaptar los textos constitucionales a las nuevas realidades que enfrenta nuestra sociedad, sin necesidad de modificar el texto de los artículos. Es a partir de esta interpretación con la cual se busca extender el contenido de los derechos para que estos puedan tener el mayor rango de protección posible. Es bien sabido que la realidad siempre llega a sobrepasar al Derecho y, por lo tanto, es necesario que este sepa adaptarse a los nuevos contextos sociales, sin necesidad de modificar constantemente el texto.

Por otro lado, la teoría histórica de interpretación de la Constitución implica entender el sentido de la norma basándose, exclusivamente, en el contexto en el que fue redactada y publicada. En ese sentido, se toma en cuenta el propósito que tenía el legislador en mente al redactar los artículos. Este tipo de interpretación reduce el alcance de las normas ya que no toma en consideración los cambios sociales. Al respecto recurrimos a la siguiente cita que compara ambas interpretaciones:

Por eso, no extraña que su contrapunto sea la interpretación histórica: mientras que conforme a ésta se pretende averiguar el sentido histórico de la norma, la realidad social existente en el momento en que dicha norma fue promulgada, en la sociológica, en cambio, se pretende determinar el sentido actual de su aplicación, adecuándola a la nueva realidad social (Cerdeira 2019:410).

Consideramos que, dentro del contexto del caso materia de análisis, es más beneficiosa la utilización de la interpretación evolutiva antes que la interpretación histórica. Como hemos podido observar, los magistrados del TC basan sus argumentos en el origen de la institución del matrimonio, las uniones de parejas heterosexuales; por ende, no es posible reconocer otro tipo de uniones ya que no calzarían con la definición originaria del mismo. Sin embargo, tal como lo señalaron la magistrada Ledesma y el magistrado Espinosa-Saldaña, al realizar una interpretación tan restrictiva, estamos ignorando los contextos sociales actuales lo cual excluye a población históricamente discriminada, en este caso la comunidad LGTBIQ, sin una motivación adecuada.

6.3.2.- Grado de vinculación para el Perú de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH

El Perú ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979. A partir de ese momento, se comprometió a respetar los alcances de la misma y que sus organismos respeten también su contenido. A pesar de ello, como hemos podido observar en la argumentación de la mayoría de los magistrados del TC, las Opiniones Consultivas no tienen carácter vinculante. Sin embargo, vale la pena preguntarnos, hasta qué punto es posible desvincularnos totalmente de lo que señala la Corte IDH.

Para ello debemos comenzar con entender qué son las Opiniones Consultivas. La Corte IDH cuenta con una función consultiva:

La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es eminentemente jurídica, y según el propio Tribunal en el ejercicio de la misma no está llamado a resolver cuestiones de hecho, sino a desentrañar el sentido,

propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos (Salvoli, 2004).

Por tanto, podemos decir que la función consultiva es utilizada para determinar el alcance jurídico de los artículos que componen a la Convención. Es decir, el propósito de esta función es de asesoría jurídica al órgano institucional que lo solicite; sin embargo, tal como lo señalamos anteriormente, este carece de fuerza vinculante, es decir, estas no van a establecer obligaciones jurídicas a los Estados, pero ello no significa que los pronunciamientos carezcan de valor jurídico (Zelada, 2020).

En la Opinión Consultiva 15-29, en el párrafo 26, la CIDH señala que:

(...) aún cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter de vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectos jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u órgano que solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el resultado del procedimiento (Corte IDH, 1997).

A partir de lo anterior podemos afirmar lo siguiente: la función consultiva de la Corte IDH se invoca cuando un Estado necesita algún tipo de aclaración con respecto al contenido, interpretación, alcance, etc de los artículos de la Convención; por tanto, al no ser un proceso contencioso, este tipo de pronunciamientos no cuentan con partes de un proceso, ni con hechos que deban ser analizados para dar un pronunciamiento. Es por ello que las opiniones consultivas no cuentan con un carácter vinculante; sin embargo, la misma Corte reconoce que ello no significa que puedan ser totalmente ignoradas por los Estados miembros.

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, podemos comenzar a responder nuestra pregunta principal respecto a la vinculatoriedad de nuestro país respecto a las Opiniones Consultivas. Debemos tomar en cuenta que la Corte Interamericana, haciendo un símil con nuestro TC, como el máximo intérprete de la Convención Interamericana. Por lo tanto, no hay mejor institución para determinar el contenido de los artículos de la Convención.

Por consiguiente, nosotros consideramos que, si bien es cierto no existe un carácter vinculante en las opiniones consultivas, es totalmente necesario tomar en cuenta lo descrito por la Corte. Si recurrimos a nuestra Constitución, la cuarta disposición final y transitoria establece el control de convencionalidad al regular la obligatoriedad de interpretar nuestra normativa interna conforme a lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados y acuerdos internacionales que hayan sido ratificados por nuestro país.

En consecuencia, las opiniones consultivas son parte constitutiva de los pronunciamientos de la Corte y esta, al ser el máximo intérprete, define los alcances de los derechos protegidos en la Convención. Por lo tanto, consideramos que para apartarse y desconocer totalmente una Opinión Consultiva se debe fundamentar de manera objetiva y razonable dicha decisión ya que, de no realizarlo, se podría alegar que no se está cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución.

Sin embargo, los magistrados del TC se limitaron a señalar el carácter no vinculante de las opiniones consultivas para desconocerla; no suficiente con ello, decidieron criticar la “alta autoridad moral” de los jueces y miembros de la Corte IDH señalando que no pueden imponer sus perspectivas para resolver problemáticas morales ya que, al ser muy complejas, no cuentan con una sola respuesta. Esta argumentación no nos parece suficiente para justificar el desconocimiento total de la Opinión Consultiva.

Desde nuestra perspectiva, las Opiniones Consultivas forman parte del *ius cogens* de la Corte IDH; es decir, son de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados que hayan ratificado el tratado. Por tanto, para apartarse de la interpretación de la Corte es necesario que se realice un análisis de fondo con respecto al tema controvertido y no solo alegar cuestiones de forma o criticar de forma superficial la interpretación de los magistrados de la Corte.

Por lo tanto, al momento de realizar la argumentación, los magistrados del TC debieron analizar las recomendaciones esgrimidas en la Opinión Consultiva 24/17, entre ellas podemos encontrar las siguientes:

1. El Estado debe reconocer la identidad de género de los ciudadanos. Tanto el nombre como el género que representa a la persona debe estar plasmado en los documentos correspondientes. Ello corresponde al derecho a la identidad jurídica.
2. El Estado está obligado a garantizar el acceso a todos los ciudadanos a todas las figuras jurídicas ya existentes. El propósito de ello es asegurar que se protejan todos los derechos de las parejas del mismo sexo.
3. La CIDH considera que no es razonable ni viable la creación de una figura distinta que sea aplicable solo a las parejas del mismo sexo. De hacerlo, se estaría vulnerando el principio de no discriminación ya que se perpetúa la idea de que la heteronormatividad es la única manera aceptable para llevar una relación en la sociedad.
4. Es necesario que los Estados implementen medidas legislativas y administrativas que tengan como objetivo garantizar el acceso igualitario a las instituciones. El propósito es evitar situaciones de discriminación, ya sean de iure o de facto, contra las personas que forman parte de la comunidad LGTBIQ.
5. Los Estados deben se realizar una interpretación que permita el máximo alcance de los derechos. No debe realizarse una interpretación restrictiva que limite, sin motivación suficiente, el concepto de familia con el propósito de excluir a las parejas homosexuales. (Corte IDH, 2017).

6.4.- Evaluación de los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional para justificar que, a partir de lo establecido en los artículos 2.2 (derechos al a igualdad y no discriminación) y 4 (promoción del matrimonio) de la Constitución, las demandantes, personas del mismo sexo, no tienen el derecho a que la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca su matrimonio contraído en el extranjero y conforme a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico

A partir de todo el contenido expuesto anteriormente, seguidamente se analiza la razón principal para declarar improcedente la demanda presentada por Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia Maria Francisca Aljovín de Losada: la

supuesta inexistencia del matrimonio homosexual en la Constitución. Ese argumento lo encontramos en el inciso 25 de la sentencia materia de análisis.

Tomando como referencia lo analizado en el transcurso del presente informe, podemos señalar que la declaración de improcedencia de la demanda se motiva en base a los siguientes argumentos:

1. Interpretar de manera restrictiva de los tratados internacionales alegando la vulneración del orden público internacional y alejándose de lo expuesto por la Corte IDH.
2. Interpretar de manera restrictiva de lo dispuesto con relación al matrimonio en la Constitución Política del Perú y en el Código Civil
3. Considerar que ampliar el concepto de matrimonio a las parejas homosexuales vaciaría de contenido al mismo.
4. No se debería “introducir por la ventana” el derecho al matrimonio igualitario mediante una sentencia del TC. En cambio, es responsabilidad del Congreso de la República plantear una reforma constitucional o modificar el Código Civil.

Para comenzar con el análisis, los magistrados realizan una interpretación netamente literal de lo expresado en los tratados internacionales. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el apartado número 13 de la sentencia en el cual citan el artículo 17, inciso 2, de la Convención IDH en el cual se reconoce el derecho “al hombre y a la mujer” de contraer matrimonio (TC del Perú, 2022). En ese sentido, los magistrados señalan que la Convención es explícita al momento de amparar al matrimonio como una institución que corresponde exclusivamente a las uniones heterosexuales. Tal como vimos anteriormente, al realizar una interpretación literal de este artículo, se estaría restringiendo, sin fundamento objetivo alguno, el derecho al matrimonio a las parejas homosexuales. Al realizar este tipo de interpretación se está desconociendo todo el trabajo argumentativo realizado anteriormente por la Corte IDH mediante la Opinión Consultiva 24/17.

En concordancia con lo argumentado anteriormente, si bien es cierto las Opiniones Consultivas no son vinculantes según lo dicho por la propia Corte IDH, también es cierto que esta señala que “tienen efectos jurídicos innegables” y, por lo tanto, no sólo el país que solicita esta opinión tiene interés al respecto del pronunciamiento. Al respecto, la Corte IDH señaló lo siguiente en la opinión consultiva en cuestión:

26. (...) . **Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva,** la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa, el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos” (Corte IDH, 2017).

En concordancia con la cita anterior, confirmamos nuestra postura respecto a que la Corte IDH es el ente más adecuado para dotar de contenido a los derechos estipulados en la Convención ya que, haciendo un paralelismo con el TC, son los encargados de proteger los derechos fundamentales. Por lo tanto, si bien es cierto las opiniones consultivas no tienen carácter vinculante, sí forman parte del *ius Cogens* que debe ser tomado en cuenta, necesariamente, por el Estado para realizar su control de convencionalidad.

En adición al argumento anterior, según la mayoría de los magistrados, una de las razones para apartarse de lo establecido en la Opinión Consultiva se encuentra en que vulnera el Orden Público Internacional. En primer lugar, debemos definir qué es el Orden Público Internacional: se entiende como un principio legal que faculta al Estado para decidir no aplicar una norma extranjera, debido a que esta vulneraría directamente un valor irrenunciable del país y, por tanto, se genera una incompatibilidad insubsanable (Zelada & Gurmendi, 2016).

En base a esta definición afirmamos que, la integración en nuestro sistema jurídico de las interpretaciones y recomendaciones de la Corte IDH respecto al matrimonio igualitario no vulneran el Orden Público Internacional del Estado peruano. Lo que ocurre con la argumentación de la mayoría de los magistrados es que considera que lo establecido en la Constitución y en el Código Civil no puede ser influenciado por fuentes externas a las del Estado, incluso no puede ser influenciado por los cambios sociales que son inherentes al paso del tiempo.

Según los argumentos expuestos, para la mayoría de los magistrados del TC, el hecho de incluir en la definición de matrimonio a las parejas homosexuales sería modificar por completo el contenido de la institución y, por consiguiente, vaciarla de este. Sin embargo, tal como hemos visto, el matrimonio no solo se puede reducir a su definición en los textos, sino que también implica todo un proyecto de vida de dos personas que buscan que se les reconozca los derechos y obligaciones que verdaderamente implican la institución del matrimonio.

Por lo tanto, los argumentos de la mayoría de los magistrados, al solo centrarse en la “tecnicidad” del término matrimonio, están dejando de lado la argumentación respecto de cuáles serían los valores irrenunciables del Estado peruano que no permitirían el reconocimiento del matrimonio homosexual. Además, tal como hemos explicado, durante la sentencia no se realiza una verdadera comparación entre las relaciones homosexuales y heterosexuales para argumentar respecto a las diferencias entre ambas, y así, esbozar argumentos respecto a por qué una relación si es protegida por el Estado y la otra no. El único argumento al respecto es el que encontramos en el fundamento de voto del magistrado Ferrero Costa que señala la “relevancia social” de las relaciones heterosexuales por encima de las homosexuales”. Sin embargo, ya vimos que este argumento vulnera directamente el derecho a la dignidad ya que ve a las personas como meros instrumentos para garantizar la procreación.

Como hemos podido observar, no hay argumentos suficientes para desestimar la pretensión de la demanda en cuestión. Lo realizado por la mayoría de los magistrados ha sido desconocer totalmente tratados internacionales y realizar una interpretación que busca restringir derechos, lo cual genera, tal como señalaron los magistrados Espinosa-Saldaña y Ledesma, que se creen dos “categorías” de personas: las que tienen acceso a todos los derechos estipulados en la Constitución y los que no tienen acceso sin justificación aparente.

Ahora bien, respecto al argumento sobre la imposibilidad de “introducir por la ventana” el matrimonio homosexual al sistema peruano, consideramos que este argumento no es suficiente para declarar la improcedencia de la demanda y, de esa manera, desconocer el derecho al matrimonio homosexual de la Constitución. Como pudimos ver del desarrollo jurisprudencial de Argentina y Colombia, fueron los jueces los que dotaron de contenido al derecho al matrimonio puesto que este ya se encontraba estipulado en sus respectivas constituciones.

Este tipo de accionar por parte de los jueces puede ser criticado desde una perspectiva negativa del activismo judicial. Para entender ello, debemos definir qué es activismo judicial:

(...) forma de comportamiento jurisdiccional arbitrario que consiste en tomar decisiones caracterizadas por dos rasgos: 1) son idóneas para realizar valores constitucionales sustantivos (paradigmáticamente, los derechos fundamentales), a costa de ii) interferir injustificadamente en una línea de actuación, actual o potencial, reservada de manera definitiva - es decir, no meramente prima facie- a la legislación o a la administración en virtud de valores constitucionales formales (como la seguridad jurídica, el principio democrático o la división de poderes” (Lozada, 2018).

A partir de la definición anterior podemos esbozar argumentos negativos y positivos del activismo judicial. En primer lugar, con respecto a los argumentos negativos, podemos señalar que el actuar del TC estaría vulnerando el principio de separación de poderes que se encuentra debidamente establecido en el artículo 43 de la constitución; según los defensores del constitucionalismo principalista, esta situación devendría en formas de autoritarismo o en arbitrariedad judicial (Sosa, 2019). Por otro lado, podemos ver que en las sentencias los magistrados no recurren a consultar a otros actores políticos para conocer más a profundidad la complejidad de las situaciones sociales que se presentan en los casos.

En segundo lugar, con respecto a los aspectos positivos, los Tribunales Constitucionales, actualmente, juegan un rol más participativo para criticar el accionar de los demás poderes del Estado. Podemos señalar que, en un país como el nuestro en donde los poderes Legislativo y Ejecutivo se encuentran cada vez más sumidos en crisis, el TC puede servir para mostrar una crítica frente a estas situaciones en donde las necesidades mínimas de los ciudadanos no se ven satisfechas. Por tanto, podríamos decir que, en algunos casos, los pronunciamientos del TC pueden servir como presión hacia los poderes del Estado y de esa manera cumplir con su rol de protección frente a los Derechos Fundamentales.

Ahora que tenemos las dos perspectivas, consideramos que en este caso predomina la visión positiva del activismo judicial. Debemos tomar en cuenta que ya anteriormente, en dos ocasiones, se han presentado proyectos de ley para poder regular tanto la unión civil como el matrimonio igualitario en el Perú y, en ambas ocasiones, estos han sido rechazados por el Congreso de la República. El hecho de que estos proyectos hayan sido rechazados no implica que no sea necesario regular el derecho al matrimonio homosexual.

Por lo tanto, el ver una situación de desprotección de los derechos por parte del Poder Legislativo, es obligación del Poder Judicial intervenir y salvaguardar la

satisfacción de estos derechos. Consideramos que, al votar por la improcedencia de la demanda y no entrar en el fondo de la controversia, la mayoría de los magistrados del TC estarían eludiendo su responsabilidad como máximos intérpretes de la Constitución de garantizar la protección de los derechos fundamentales y, de la mano con ello, garantizar que estos tengan el mayor alcance posible para proteger a los ciudadanos. Si bien es cierto, esto no exime al Congreso de la República de responsabilidad ya que ellos son los que deberían regular el matrimonio homosexual mediante la aprobación de una ley; sin embargo, consideramos que los jueces en la actualidad tienen un papel participativo sumamente importante en las políticas, y sus opiniones en casos específicos suelen ser tomados en cuenta al momento de argumentar sobre una ley.

En conclusión, afirmamos nuestra postura respecto a que los argumentos desarrollados por la mayoría de los magistrados del TC son insuficientes para determinar que no existe el derecho al matrimonio homosexual en el Perú y, por lo tanto, no debió declararse improcedente la demanda en cuestión. Es necesario que los magistrados realicen una interpretación evolutiva respecto del derecho al matrimonio que vaya de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales y a la par con los cambios que se dan en nuestra sociedad en el transcurso del tiempo. Ello en pro de una mayor protección de los derechos fundamentales y garantizar que no existan ciudadanos de “segunda categoría”.

7. Conclusiones

- Es necesario interpretar los artículos de la Constitución con una mirada más evolutiva. Es necesario que la interpretación de los artículos se realice observando también el contexto actual de la sociedad y no solo el propósito de dicho artículo en el momento que fue redactado.
- Es importante tomar en consideración las Opiniones Consultivas de la CIDH. Recalcamos que, al ser el máximo intérprete de la Convención, es necesario que recurramos a lo señalado por las mismas para una adecuada protección de los derechos. Además, es importante recordar que el Perú forma parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, es su obligación aplicar lo contenido en la misma.
- Debemos cuestionar el nivel de discrecionalidad de los jueces constitucionales al momento de motivar sus sentencias. En el transcurso del presente informe pudimos observar que los argumentos utilizados por los magistrados tenían como fundamento pensamientos conservadores que tenían como propósito mantener el instituto del matrimonio como este fue concebido al momento de su redacción en el Código Civil: solo entre hombre y mujer. Sin embargo, este tipo de argumentación deja de lado la evolución histórica de nuestra sociedad y termina excluyendo, de manera arbitraria, a las personas LTBIQ del ejercicio de ciertos derechos.
- Debemos reconocer la importancia de los pronunciamientos del TC respecto a temas que involucren el reconocimiento de derechos a poblaciones históricamente afectadas, tal como es la comunidad LGTBIQ. Consideramos que el Poder Judicial necesita tomar un rol activo en la defensa de los derechos y no escudarse en argumentos formalistas para evitar el reconocimiento de estos. Los magistrados tienen un rol importante en la conquista de mayores derechos y, debido a que es su campo de experiencia, sus opiniones son fundamentales al

momento de plantear un proyecto de ley para regular, en este caso, el matrimonio homosexual.

- Finalmente, recalcamos la importancia de reconocer que el matrimonio no es solo una institución que tiene como finalidad principal la procreación, ni se encuentra exclusivamente relacionada a la religión católica. El matrimonio tiene como finalidad desarrollar un plan de vida en conjunto y, para ello, es necesario que el Estado reconozca los derechos y obligaciones correspondientes a las parejas. De no reconocerlo, se está vulnerando arbitrariamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas LGTBIQ y, en esa misma línea, los derechos a la dignidad, a la igualdad y a la personalidad jurídica.



Bibliografía

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (12 de noviembre de 2015). *Violencia contra personas LGBTI*. San José : CIDH. Obtenido de <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/registro-violencia-lgbt.html>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática . (agosto de 2018). *INEI*. Obtenido de INEI difunde Base de Datos de los Censos Nacionales 2017 y el Perfil Sociodemográfico del Perú : <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/inei-difunde-base-de-datos-de-los-censos-nacionales-2017-y-el-perfil-sociodemografico-del-peru-10935/>
- ZENIT. (15 de enero de 2022). *ZENIT: El mundo visto desde Roma*. Obtenido de Análisis: la nueva composición religiosa de Latinoamérica al iniciar el 2022: <https://es.zenit.org/2022/01/15/analisis-la-nueva-composicion-religiosa-de-latinoamerica-al-iniciar-el-2022/>
- Flores Borda, G. (2022). “¿Jehová en campaña?” Algunas coincidencias en torno al uso de la religión evangélica durante las campañas políticas de los Estados Unidos y Latinoamérica. *Discursos del Sur*, 61-85.
- BBC Mundo. (25 de septiembre de 2016). *BBC News Mundo*. Obtenido de “No es natural”, “pone en riesgo a los niños”, “la familia debe ser como Jesús, María y José”: las razones por las que miles se oponen al matrimonio igualitario en México: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37467052>
- Cabrales Lucio, J. M. (2015). Transformación jurídica de la perspectiva nacional sobre las uniones civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo en Latinoamérica. *Derecho PUCP*, 139-167.

- Molina Ricuarte, C. J., & Carrillo Cruz, Y. A. (2018). El matrimonio de parejas del mismo sexo y la Corte Constitucional de Colombia. *Revista de Derecho*, XXXI, 79-103.
- Corte Constitucional de Colombia. (26 de julio de 2011). Sentencia C-577/11. Bogotá, Colombia.
- Cabrales Lucio, J. M. (2010). Argentina – Judges Contest Same Sex Marriage. Freyre Alejandro contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA), Administrative Court, Buenos Aires, exp 34292/0. *Public Law*, 413-414.
- Ugarte Mostajo, D. (2014). *La Garantía Institucional del Matrimonio en la Constitución de 1993*. Lima: Palestra.
- Fernandez Revoredo, M. (2014). *La igualdad y no discriminación y su aplicación en la regulación del matrimonio y las uniones de hecho en el Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Rodriguez Iturri, R. (1990). Familia, Derecho e Historia. En F. Trazegnies Granda, R. Rodríguez Iturri, C. Cárdenas Quirós, & J. A. Garibaldi F, *La Familia en el Derecho Peruano: Libro en homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez* (págs. 45-64). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Bruce, C. (12 de septiembre de 2013). Proyecto de Ley N° 2647/2013- CR- Proyecto de Ley que establece las Uniones Civiles entre personas del mismo sexo. Lima, Perú.
- Paredes Piqué, S. (22 de octubre de 2021). Proyecto de Ley N° 525/2021- CR- Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario. Lima, Perú.
- TC del Perú. (30 de noviembre de 2007). Exp. N° 09332-2006-PA/TC. Lima, Perú.
- TCI del Perú. (24 de noviembre de 2004). Exp. N° 2868-2004-AA/TC. Lima, Perú.

- TC del Perú . (18 de diciembre de 2007). Exp. N° 10087-2005-PA/TC. Lima , Perú.
- TC del Perú. (20 de abril de 2006). Exp. N° 02273-2005-PHC/TC. Lima, Perú.
- TC del Perú. (29 de agosto de 2007). Exp. N° 00009-2007-PI/TC. Lima, Perú.
- Matzumoto Benitez, N. (2013). *Comentario sobre otros derechos presentes en la CADH. Derecho a la personalidad jurídica (artículo 3); derecho al nombre (artículo 18); indemnización por error judicial (artículo 10)*. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
- TC del Perú . (3 de enero de 2003). Exp. N.º 010-2002-AI/TC. Lima, Perú.
- Guzmán, J. M. (2007). El derecho a la integridad personal . *Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, Santiago de Chile* (págs. 1-7). Santiago : Cintras .
- TC del Perú. (22 de junio de 2007). Exp. N° 007-2006-PI/TC. Lima, Perú.
- Fumish, D. (1972). La jerarquía del ordenamiento jurídico peruano. *Derecho PUCP* , 61-80.
- Bohórquez, J. P. (2006). El Poder Constituyente, Fundamento de la Democracia: Carl Schmitt. *Papel Político*, 525-555.
- TC del Perú. (19 de abril de 2022). Exp. N° 02653-2021-PA/TC. Lima, Perú.
- Rubio, M. (2014). *El sistema jurídico: Introducción al Derecho*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
- Quispe, C. L. (2014). Una aproximación a las teorías de la interpretación de la Constitución. *Derecho & Sociedad*, 121-143.

- Cerdeira, G. (2019). Matrimonio y Constitución: Su interpretación evolutiva, desde la igualdad y la libertad. *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 400-445.
- Salvoli, F. (2004). La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: marco legal y desarrollo jurisprudencial. *Homenaje y Reconocimiento a Antônio Cançado Trindade*, 417-472.
- Zelada, C. (2020). *¿Son vinculantes las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos? Una propuesta de reforma para un problema de antaño*. Lima: Promsex, Colombia Diversa, Cattrachas .
- Corte IDH. (14 de noviembre de 1997). Opinión Consultiva OC-15/97. . *Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. San José, Costa Rica .
- Corte IDH. (24 de noviembre de 2017). Opinión Consultiva OC- 24/17. *Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo*. San José, Costa Rica .
- Zelada, C., & Gurmendi, A. (2016). Entre el escudo y la espada: el matrimonio Igualitario visto desde el orden público Internacional y el derecho internacional De los derechos humanos. *Themis*, 257-274.
- Lozada, A. (2018). Activismo Judicial y Derechos Sociales: Un enfoque postpositivista. *Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 211-226.
- Sosa, J. M. (2019). Justicia constitucional dialógica: algunos mecanismos o estrategias que favorecen la legitimación democrática de los tribunales constitucionales. *Anuario de Investigación del CICAJ 2018-2019*, 439-456.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pleno. Sentencia 191/2022

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales, Blume Fortini, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia; con los fundamentos de voto de los magistrados Ferrero Costa, Miranda Canales y Blume Fortini y los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Susel Ana María Paredes Piqué y doña Gracia María Francisca Aljovín de Lozada contra la resolución de fojas 716, de 26 de mayo de 2021, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 20 de junio de 2017, las recurrentes interponen demanda de amparo (folio 195) contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con emplazamiento de su procurador público. Solicitan que se declare que la Resolución Administrativa 077—2017—GOR/JR10LIM/RENIEC (que declaró infundado su recurso de apelación y confirmó la Resolución Registral 303—2017—GOR/JR10LIM/ORLIMRENIEC, de 6 de febrero de 2017, emitida por la Oficina Registral Lima, que declaró improcedente su solicitud de inscripción de acta de matrimonio celebrado en el extranjero) afecta sus derechos a la dignidad, a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la personalidad jurídica, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar y a la protección de la familia y a la intimidad personal y familiar. Por tanto, solicitan que se ordene al demandado que vuelva a calificar el título que contiene la partida de su matrimonio.

Manifiestan que en un viaje a la ciudad de Miami contrajeron matrimonio civil el 4 de agosto de 2016, y que una vez que recibieron de los Estados Unidos su partida de matrimonio debidamente apostillada, presentaron ante el Reniec una solicitud adjuntando todos los documentos correspondientes para inscribir su matrimonio, la cual ha sido rechazada.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ

Y GRACIA MARÍA FRANCISCA

ALJOVÍN DE LOSADA

Auto admisorio

Mediante Resolución 1, de 11 de julio de 2017, el Decimoprimer Juzgado Constitucional, Subespecializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e Indecopi de la Corte Superior de Justicia de Lima (folio 229) admitió a trámite la demanda, corriendo traslado de esta al Reniec y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

Contestaciones de la demanda

El 4 de septiembre de 2017, la procuradora pública del Reniec contesta la demanda (folio 241) expresando lo siguiente: a) las recurrente no están solicitando el reconocimiento de un derecho adquirido o reconocido (y, por tanto, que deba reponerse), sino, por el contrario, pretenden que vía el amparo se les reconozca un derecho que supuestamente les corresponde; b) la Constitución no reconoce el derecho de acceder a la institución del matrimonio a las personas del mismo género; es más, se establece expresamente que la forma del matrimonio debe ser regulada por ley expresa, por lo que el artículo 234 del Código Civil dispone que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer; c) debió recurrirse al proceso contencioso—administrativo por constituir la vía idónea, al contar con etapa probatoria, donde se discuta la controversia planteada por las recurrentes; d) se pretende convalidar en el territorio nacional un matrimonio celebrado en el extranjero desconociendo la vigencia de la normativa legal peruana, con el argumento de que se les discrimina en sus derechos fundamentales; e) la argumentación de no discriminación no puede llevar al extremo de que un individuo pueda imponer sus ideas o preferencias personales sobre las normas de convivencia de su comunidad, que nacen de las regulaciones de orden legal que se emiten a través de sus organismos legalmente reconocidos para tales actos; f) debido a la ausencia de etapa probatoria en el proceso de amparo no se puede concluir si existió buena fe para la celebración del acto matrimonial y si existen causas suficientes para demandar su ineficacia, en vista de que, tratándose de personas domiciliadas en el país, según su propia confesión y que señalaron domicilio en el Perú y no en el extranjero, al momento de celebrar el acto y siendo conocedoras de la vigencia de la legislación nacional, hayan recurrido a otro Estado que permite este tipo de acciones a fin de evadir las prohibiciones que, de manera general, establece el marco normativo que regula sus actos; y, g) pretender el reconocimiento de un matrimonio no regulado en el país argumentando que fue válidamente celebrado en un país extranjero representa un trato inequitativo para todos los demás connacionales que no tienen los recursos financieros para eludir dichas limitaciones con la celebración de su matrimonio en el exterior, para posteriormente poder inscribirlos en el territorio nacional vía la acción de garantías constitucionales.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

El 14 de febrero de 2018, la Procuraduría Pública del Minjus dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, la misma que fue declarada infundada por Resolución 5, de 16 de octubre de 2018, emitida por el citado juzgado.

Resolución de primera instancia o grado

Mediante Resolución 8, de 22 de marzo de 2019, el mencionado juzgado (folio 529), declaró fundada la demanda, por considerar que la Opinión Consultiva OC—24/17, de 24 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Costa Rica, Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (en adelante OC—24/17), fundamenta su decisión partiendo de que la familia debe ser entendida de una forma amplia y de acuerdo con la evolución social, y que las familias compuestas por personas del mismo sexo deben acceder a la protección de sus derechos ante la ley y las instituciones deben reconocer estos derechos en igualdad de condiciones. Así, se tiene establecido que el reconocimiento del derecho de estas personas debe ser amplio, no solo en cuanto a sus aspectos patrimoniales, sino como una modalidad de familia, por lo que la OC—24/17 resulta aplicable y no es compatible con el Código Civil Peruano, que solo reconoce como matrimonio a aquel celebrado por varón y mujer; por tanto, esta es una norma que no se debe aplicar, en el extremo que fija como contrayentes, necesariamente, a personas de distinto sexo, y prevalecen las normas convencionales que de manera expresa «protege[n] el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo», así como la Constitución Política que promueve el matrimonio, sin que se observe en su texto restricción al respecto.

Resolución de segunda instancia o grado

A través de la Resolución 28, de 26 de mayo de 2021 (folio 716), la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la Resolución 5, que declaró infundada la excepción deducida, revocó la Resolución 8 y, reformándola, declaró improcedente la demanda, por considerar que la Constitución consagra el matrimonio heterosexual entre personas que deciden hacer vida en común voluntariamente. Esto cobra mayor sentido si se toma en cuenta que la actual Constitución fue promulgada el 29 de diciembre de 1993, es decir, con fecha posterior a la publicación del Decreto Legislativo 295 (Código Civil), ocurrida el 14 de noviembre de 1984 en el diario oficial El Peruano. Asimismo, la Sala argumenta que, para acreditar la vulneración del derecho a la igualdad, deberá realizarse necesariamente un examen de comparación entre dos situaciones sustancialmente iguales y demostrar la falta de razones objetivas y razonables que justifiquen el trato diferenciado, presupuestos que las demandantes no han logrado sostener. Y que lo expresado lleva a sostener válidamente el reconocimiento del matrimonio heterosexual. Agrega que este criterio interpretativo va aparejado con el concepto constitucional de matrimonio, contemplado



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

en los artículos 4 y 5 de la Constitución y en el artículo 234 del Código Civil peruano, que incorpora el requisito de la diferencia de sexo entre los contrayentes.

FUNDAMENTOS

Delimitación de la controversia

1. En el caso de autos se pretende que el Reniec inscriba el matrimonio celebrado entre las demandantes en la Corte del Circuito de Miami-Dade, quienes, habiendo agotado la vía administrativa, recurren a instancias judiciales.

Análisis de la controversia

2. El artículo 2050 del Libro X, Derecho Internacional Privado, del Código Civil, establece lo siguiente:

Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Perú, *en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres [énfasisañadido]*.

3. Por tanto, no todo derecho adquirido fuera del Perú tiene que ser reconocido como válido en el Perú. El Código Civil fija un límite: solo deben serlo aquellos que son compatibles con el orden público internacional y las buenas costumbres. Ahora bien, según el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado —conocido como Código Bustamante—, de 1928, suscrito por el Perú,

Los preceptos constitucionales son de orden público internacional.

4. Aunque el matrimonio de las demandantes fue celebrado válidamente en Miami, colisiona con la noción de matrimonio contenida no solo en el Código Civil, sino también en la Constitución Política del Perú. Al ser esta noción un precepto constitucional, conforma el orden público internacional. Así, la pretensión de la demanda cae fuera del ámbito de reconocimiento del Derecho peruano.

5. El artículo 234 del Código Civil define al matrimonio en los términos siguientes:

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por *un varón y una mujer* legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común [*énfasis* añadido].

6. Según esta definición, los elementos esenciales del matrimonio en el Perú son dos:



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEI. ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

1. Ser una *unión voluntaria* —por tanto, en el Perú no puede reconocerse un matrimonio concertado entre los padres de los novios, como ocurre, por ejemplo, en la India—; y,
 2. Ser celebrado por *un varón y una mujer* —por tanto, en el Perú no puede reconocerse la poligamia, como en los países musulmanes, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, como en Miami.
7. Esta noción de matrimonio está contenida también en la Constitución. El artículo 5 de la Constitución se refiere al concubinato en los términos siguientes:

La *unión* estable de *un varón y una mujer*, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la *sociedad de gananciales* en cuanto sea aplicable [*énfasis añadido*].

8. No cabe duda de que la Constitución se refiere aquí al matrimonio de hecho, ya que la norma contiene todos sus elementos esenciales. Para empezar, utiliza el término *unión*, que es el mismo que emplea el Código Civil para definir al matrimonio. Añade luego que se trata de la que se da entre *un varón y una mujer*, tal como el Código Civil. Finalmente, señala que esta unión da lugar a la *sociedad de gananciales*, que es el régimen de propiedad de los bienes en el matrimonio, según el mismo Código Civil. Entonces, de acuerdo con la Constitución, *no* da lugar a la sociedad de gananciales la unión de un varón y otro varón, ni la de una mujer y otra mujer; tampoco, la unión de un varón y cuatro mujeres, como bajo la *sharia*, o al revés. Para que la unión de una pluralidad de personas de lugar a la sociedad de gananciales, estas han de ser solo dos y de sexo opuesto; han de ser *un varón y una mujer*. Por ello, Enrique Chirinos Soto —uno de los principales autores de la Constitución— comenta este artículo diciendo:

El concubinato es matrimonio en todo, menos en el nombre.

9. Es absurdo pensar, pues, que la Constitución reconoce y protege al concubinato, y no al matrimonio. Sí lo hace, y muy enérgicamente. El artículo 4 de la Constitución dice que:

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

10. Una lectura no sesgada de la Constitución hace evidente que ella contiene y protege la misma noción de matrimonio que el Código Civil. Sin embargo, si persistiera la inquietud respecto a la noción constitucional de matrimonio, cabe recordar que la cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece que:

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

11. ¿Qué dicen entonces estos documentos? El inciso 1 del artículo 16 la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

La Declaración Universal no dice, entonces, que el derecho a casarse corresponde a las personas, sin referencia a su sexo; dice, por el contrario, que corresponde a "los hombres y las mujeres". Tal derecho corresponde, por tanto, a personas de sexo distinto.

12. Igualmente, el inciso 2 del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por el Perú, establece que:

Se reconoce el derecho *del hombre y de la mujer* a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.

Es decir, define al matrimonio como derecho de *un hombre y una mujer*; entiende el matrimonio como derecho de dos personas de sexo opuesto. No ampara, pues, la poligamia ni el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

13. Finalmente, el inciso 2 del artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por el Perú, dice:

Se reconoce el derecho *del hombre y la mujer* a contraer matrimonio [énfasis añadido].

La Convención Americana no ampara tampoco la poligamia ni el matrimonio entre personas del mismo sexo.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

14. Es indudable, entonces, que la Constitución —leída a la luz del inciso 1 del artículo 16 de la Declaración Universal; del inciso 2 del artículo 23 del Pacto Internacional; y, del inciso 2 del artículo 17 de la Convención Americana— contiene la misma noción de matrimonio del Código Civil y la eleva al más alto rango jurídico. Al tener rango constitucional, la noción de matrimonio —según el Código Bustamante— es parte integrante del orden público internacional. Por tanto, no puede reconocerse en el Perú un derecho adquirido en el extranjero que colisione con esta noción.

15. En la demanda se alega que no reconocer el "matrimonio igualitario" vulnera el derecho a la igualdad de las recurrentes. Sin embargo, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, que establece el derecho a la igualdad, debe ser leído conjuntamente con el artículo 5, que contiene la noción de matrimonio antes precisada. Definir una institución —o un concepto— implica delimitar su contenido. Pretender que la definición del matrimonio —o, para el caso, la de cualquier otra institución o concepto— no delimite su contenido implica vaciarla de este. El contenido de todo término está dado tanto por lo que queda dentro como por lo que queda fuera de su definición.

16. Por otra parte, las demandantes sostienen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al absolver una consulta formulada por Costa Rica, el 2017, ordenó establecer el "matrimonio igualitario" en todos los países americanos. Soslayan que tal opinión fue solicitada por Costa Rica para resolver un caso puntual, referido al cambio de nombre de una persona, que involucraba su identidad de género. Costa Rica no le pidió a la Corte Interamericana que legislara sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica, ni menos en todos los países del hemisferio —incluso en los que no han suscrito el Pacto de San José—. Así lo hizo notar el voto singular del juez Eduardo Vio Grossi, que acompaña dicha opinión consultiva. Este dice que:

la opinión consultiva no es vinculante para los Estados Parte de la Convención ni para los otros miembros de la Organización de los Estados Americanos, por lo que no procede que ordene la adopción de alguna conducta. (...) La competencia no contenciosa o consultiva de la Corte no consiste, entonces, en ordenar o disponer sino más bien convencer.

17. Esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, lanzada *urbi et orbi*, constituyó un exceso de los seis jueces que la suscribieron. Cinco años después de emitida, podemos constatar que ninguno de los treinticuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos —a los que estaba dirigido su "mandato"— le ha hecho caso, salvo Ecuador, que es la excepción que confirma la regla. Ciertamente, algunos otros países americanos han reconocido el



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

"matrimonio igualitario", pero lo han hecho por decisión de sus órganos de gobierno, no en acatamiento del "mandato" de la Corte Interamericana. El Perú no tiene, pues, por qué sentirse obligado por una opinión consultiva que jamás solicitó y que casi nadie le ha hecho caso.

18. Esta opinión consultiva solo confirmó que el sistema interamericano de derechos humanos adolece de defectos estructurales. Los jueces de la Corte Interamericana son elegidos por representantes de todos los países que han ratificado el Pacto de San José, así no se sometan a su competencia contenciosa; asimismo, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son elegidos por todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, así no hayan ratificado el Pacto de San José. Cuatro países no se someten a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, pero participan en la elección de sus jueces; asimismo, doce países no han ratificado el Pacto de San José, pero participan en la elección de los miembros de la Comisión Interamericana, encargada de acusar a los países ante la Corte Interamericana. A diferencia de ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está integrado por cuarenta y siete jueces, es decir, uno por cada país miembro del Consejo de Europa.

19. Al soslayar la relación de los jueces y de los miembros de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana con sus países de origen y enfatizar que son elegidos por su "alta autoridad moral", la Convención Americana abona el terreno para la ideologización del sistema interamericano de derechos humanos. Por definición, la moral es problemática y los dilemas que trata de resolver no admiten soluciones únicas o finales. Siempre caben nuevas perspectivas para analizar los dilemas morales. En una perspectiva pluralista y tolerante, no existen expertos morales.

20. El Diccionario de la Real Academia Española dice que ideología es el:

Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.

21. Sin embargo, la ideología puede ser entendida también como mistificación de la realidad. Mistificar es:

tr. Engañar, embaucar.

tr. Falsear, falsificar, deformar.

22. Nuestra Constitución propugna una sociedad abierta y democrática. Ningún Dueño de la Verdad ni Monopolista de la Virtud puede obligarnos a pensar de una



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

manera u otra. La sociedad peruana es una comunidad autónoma de hombres y mujeres libres, que estructuran su interacción por las normas que ellos mismos acuerdan a través de sus *representantes*. Tales normas pueden ser acertadas o desacertadas, conducentes o inconducentes, apropiadas o inapropiadas; sin embargo, en cualquier caso, deben ser respetadas por quienes vivimos aquí. Todo peruano tiene derecho a criticar las normas existentes y sugerir su reforma, pero debe hacerlo por los canales adecuados y de la forma pertinente.

23. Años atrás, el Congreso debatió un proyecto de ley para introducir la unión civil entre personas del mismo sexo, pero fue archivado el 2015 por decisión de la mayoría de los integrantes de la comisión dictaminadora. Si ahora se quiere ir aún más lejos e incorporar el "matrimonio igualitario" al derecho peruano, debe hacerse una reforma constitucional siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 206 de la propia Constitución. Esta propuesta debe ser votada en el Congreso de la República, integrado por 130 representantes directamente elegidos por el pueblo. Si la propuesta tiene más de 65 votos, debe hacerse luego un referéndum; si llega a tener 87 votos en el Congreso, puede obviarse el referéndum y sometérsela a una nueva votación en la legislatura siguiente. Si en esta segunda votación vuelva a obtener 87 votos o más —o si es aprobada en el referéndum—, el "matrimonio igualitario" debe ser reconocido y respetado por todos los peruanos.

24. Introducirlo por la ventana, a través de una resolución del Tribunal Constitucional, implicaría que los magistrados constitucionales usufructuemos y abusemos indebidamente del puesto que temporalmente ocupamos. Nosotros estamos aquí no para sustituir a los legisladores o constituyentes, sino solo para hacer cumplir la Constitución Política del Perú.

25. Por lo antes expresado, la demanda es improcedente, al no existir en el Perú el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 31307 (artículo 5, inciso 1 del anterior código, vigente cuando se presentó la demanda).

26. Sin perjuicio de lo establecido en los considerandos anteriores, corresponde acotar que dado que el trámite de inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero es un procedimiento administrativo que se realiza ante el Reniec, como efectivamente aconteció en el presente caso, se concluye que, respecto al Minjus, la demanda es improcedente, porque carece de legitimidad para obrar pasiva.

11/11/21

①



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

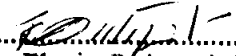
Publíquese y notifíquese.

SS.

**FERRERO COSTA
SARDÓN DE TABOADA
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI**

PONENTE SARDÓN DE TABOADA

Lo que certifico:


Flavio Réategui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con el debido respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto.

Si bien comparto la ponencia, quisiera reiterar mi posición sobre el asunto que esta contiene, ya expresada en el expediente 1739-2018-PA/TC.

Como todo en el campo jurídico, la realidad antecede al Derecho. Así, hay un fenómeno social y humano que consiste en la unión estable entre un hombre y una mujer, y que recibe el nombre de matrimonio.

El término matrimonio es la palabra que designa este tipo de unión heterosexual. Lo primero es, pues, «la existencia de uniones estables y comprometidas entre los hombres y las mujeres, y esas uniones son las que reciben el nombre de matrimonio, y las que el Derecho se encarga de regular. No es primero el término, la palabra, a la que después la sociedad o el Derecho dan el contenido que parece conveniente, sino que primero es la realidad designada (la unión estable y comprometida entre hombre y mujer), y después la palabra (matrimonio) que la designa y la identifica frente a otras realidades diferentes»¹.

Entonces, matrimonio es la palabra que empleamos para designar específicamente la unión estable entre un hombre y una mujer. Si la unión es entre dos hombres, o dos mujeres, ya no es matrimonio, sino un fenómeno humano y social diferente –respetable, por cierto–, por la misma razón que una compraventa sin precio ya no es compraventa sino donación. Y decir que una donación no es una compraventa no es nada peyorativo para la donación, sino simplemente delimitar realidades substancialmente distintas, acreedoras de un tratamiento jurídico diferenciado².

Plantear que una unión homosexual es matrimonio es como pretender que una unión homosexual sea heterosexual: una contradicción en sus propios términos. Y afirmar que son realidades distintas no es decir nada malo de las uniones entre personas del mismo sexo, sino simplemente diferenciarlas de otro tipo de uniones (la de las personas de diferente sexo) que son, efectivamente, distintas y las que producen el crecimiento de la población mundial, y el mantenimiento de ella.

La realidad consistente en la unión estable y comprometida entre hombre y mujer, a la que el Derecho llama matrimonio, no responde, pues, a un concepto religioso que una mayoría confesional quisiera imponer a los demás.

¹ MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos y DE PABLO CONTRERAS, Pedro, *Constitución, Derecho al matrimonio y uniones entre personas del mismo sexo*, Madrid 2007, p. 39.

² Cfr. *ibidem*, p. 41.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

La heterosexualidad del matrimonio es una constante a lo largo de toda la historia socio jurídica, como se evidencia desde el Derecho romano precristiano. Conocida es, al respecto, la definición que ofrece Modestino, contenida en el *Digesto* (23.2.1):

Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, et consortium omnis vitae (...) (el matrimonio es la unión de hombre y mujer en pleno consorcio de vida...³).

Por ello, con acierto, el juez John Roberts, actual Presidente de la Corte Suprema norteamericana, en su voto disidente en la sentencia del caso *Obergefell* del 2015, dijo que la «definición universal del matrimonio como la unión de un hombre y mujer no es una casualidad histórica. El matrimonio no surgió como resultado de un movimiento político, descubrimiento, enfermedad, guerra, doctrina religiosa o cualquier otra fuerza motriz en la historia universal, y ciertamente no como resultado de una decisión prehistórica de excluir a los homosexuales»⁴.

Toca ahora preguntarnos, **¿por qué son diferentes la realidad del matrimonio heterosexual y la de la unión homosexual?** La más elemental diferencia es que, en el caso de las uniones heterosexuales, la complementariedad de los sexos permite que las relaciones sexuales entre hombre y mujer desemboquen en el nacimiento de nuevas personas (la descendencia conyugal), lo que dota a estas uniones de un peculiar e intenso valor social, a diferencia de las uniones que estructuralmente (no coyuntural o patológicamente) no pueden dar lugar al nacimiento de nuevas personas. La relevancia social de estas últimas es, por ello, mucho más limitada.

En otras palabras, los nuevos ciudadanos, que aseguran la continuidad social, proceden de uniones entre personas de distinto sexo, no de uniones homosexuales. La trascendencia social de uno y otro fenómeno es, como resulta evidente, muy distinta, y el interés de la sociedad en uno u otro tipo de uniones es también diferente.

Todo esto explica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17.2, reconozcan al matrimonio como la unión de **unhombre y unamujer**.

En efecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice (artículo 16.1):

³ Traducción de D'ORS, Álvaro *et al.*, *El Digesto de Justiniano*, I. II, Pamplona 1972.

⁴ «This universal definition of marriage as the union of a man and a woman is no historical coincidence. Marriage did not come about as a result of a political movement, discovery, disease, war, religious doctrine, or any other moving force of world history-- and certainly not as a result of a prehistoric decision to exclude gays and lesbians» (*Obergefell et al. v. Hodges*, 576 U.S. ___ [2015]. La traducción es nuestra).



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ

Y GRACIA MARÍA FRANCISCA

ALJOVÍN DE LOSADA

«Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...)».

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe (artículo 23.2):

«Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello».

Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17.2, señala:

«Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia (...)».

Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el caso *Chapin y Charpentier* contra Francia, de 2016. En consideración a un texto similar al que venimos de citar, contenido en el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos⁵, el TEDH ha dicho que el matrimonio es «la unión de un hombre y una mujer» y que ampliarlo a personas del mismo sexo no es una obligación que impone a los Estados el citado Convenio Europeo⁶.

A ello hay que añadir que la Constitución, según su Cuarta Disposición Final y Transitoria, debe ser interpretada de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú, que establecen que el matrimonio es heterosexual, según hemos visto.

De lo señalado anteriormente podemos concluir que la Constitución, en su artículo 4, consagra el matrimonio heterosexual, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 16.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17.2).

Siendo esto así, debe tenerse en cuenta la Convención de Derecho Internacional Privado (conocida como *Código Bustamante*), de la cual el Perú es parte. Ésta, en su artículo 4, estipula lo siguiente:

⁵*Convenio Europeo de Derechos Humanos*, artículo 12: «**Derecho a contraer matrimonio.**- A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho».

⁶*Affaire Chapin et Charpentier c. France*, 9 de septiembre de 2016, párr. 37.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ

Y GRACIA MARÍA FRANCISCA

ALJOVÍN DE LOSADA

«Los preceptos constitucionales son de orden público internacional».

Por tanto, ha resuelto acertadamente el RENIEC cuando ha denegado la inscripción del matrimonio de las demandantes por considerar que, conforme al artículo 2050 del Código Civil, dicho matrimonio entre personas del mismo sexo es incompatible con el orden público internacional. En efecto, el Código Bustamante señala que «los preceptos constitucionales son de orden público internacional» y para nuestra Constitución el matrimonio es heterosexual, según hemos explicado.

Las demandantes acusan al RENIEC de discriminación. Como sabemos, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional señala que «es presupuesto inexorable para ingresar a evaluar una eventual afectación del principio-derecho de igualdad, previsto en el artículo 2.2 de la Constitución, que se proponga un término de comparación (*tertium comparationis*) válido»⁷, conforme al cual las dos situaciones que se comparan deben «compartir una esencial identidad»⁸.

Pues bien, las demandantes no aportan un término de comparación válido, ya que comparan dos situaciones distintas: su matrimonio (entre personas del mismo sexo) con los matrimonios heterosexuales, como son todos los inscritos en el registro civil del Perú.

Otra situación se daría si ya existiera inscrito en el registro civil peruano un matrimonio celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo y, pese a ello, se negara la inscripción del matrimonio de las demandantes. Aquí sí podría presentarse una discriminación, pero no es el caso.

Por cierto, esta sería la consecuencia de accederse al pedido de las demandantes: en adelante, tendría que ser inscrito en el RENIEC todo matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero, pues lo contrario sería discriminatorio. De esta forma, en la práctica, de accederse a lo pretendido en la demanda, se estaría implantando en el Perú el matrimonio homosexual, pese a la Constitución.

Por lo demás, el RENIEC ha apoyado su decisión en una justificación razonable, como es que el matrimonio de las demandantes no es compatible con la Constitución y el orden público internacional conforme al Código Civil, por los motivos que ya hemos apuntado.

Por lo expuesto, en aplicación del artículo 7, inciso 1, del nuevo Código Procesal Constitucional, la demanda es improcedente, pues no está referida al contenido

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 0014-2007-PI/TC, fundamento 12.

⁸ *Ídem*.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

constitucionalmente protegido un derecho constitucional (artículos 5 [inciso 1] y 38 del Código Procesal Constitucional vigente cuando se planteó la demanda). Como hemos sustentado, la Constitución (artículo 4) consagra el matrimonio entre personas de diferente sexo, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 16.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17.2).

Sin perjuicio de todo lo anterior, pienso que el Congreso de la República podría debatir una ley para personas que por diversas circunstancias vivan juntas, en asuntos legales propios de esa convivencia, como los bienes adquiridos dentro de ésta, contratos de seguros u otros similares, que no puedan ser cubiertos por la legislación ya existente.

Dicha ley debería ser lo más inclusiva posible y no restringida a personas del mismo sexo ni prohibida para parientes (por ejemplo, dos hermanas o dos hermanos que viven juntos y se apoyan mutuamente). Cualquier interesado debería tener acceso a los beneficios de esa ley.

Pero aquella es tarea que, según las reglas democráticas y del Estado de derecho a las que nos debemos, compete al Parlamento, donde están representados todos los ciudadanos y las tendencias políticas presentes en la sociedad.

Por estas consideraciones, mi voto es por declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

S.

FERRERO COSTA

Lo que certifico:

Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES

Con el mayor respeto por mis colegas, considero que la demanda debe ser declarada **IMPROCEDENTE** únicamente por los fundamentos que a continuación expongo:

Las demandantes solicitan que se declare que la Resolución Administrativa 077—2017—GOR/JR10LIM/RENIEC (que declaró infundado su recurso de apelación y confirmó la Resolución Registral 303—2017—GOR/JR10LIM/ORLIMRENIEC, de 6 de febrero de 2017, emitida por la Oficina Registral Lima, que declaró improcedente su solicitud de inscripción de acta de matrimonio celebrado en el extranjero) afecta sus derechos a la dignidad, a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la personalidad jurídica, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar y a la protección de la familia y a la intimidad personal y familiar. Por tanto, solicitan que se ordene al demandado que vuelva a calificar el título que contiene la partida de su matrimonio.

Al respecto, el artículo 7, inciso 2 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que “No proceden los procesos constitucionales cuando: (...) 2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus”.

Como puede advertirse de la pretensión, se está cuestionando una resolución administrativa emitida por RENIEC, que bien puede ventilarse en el proceso contencioso administrativo, como tantas veces lo ha hecho este Tribunal Constitucional. En consecuencia, al existir una vía igualmente satisfactoria la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del artículo 7, inciso 2 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Asimismo, este criterio ya lo he adoptado en el caso Ugarteche y con algunos matices en el caso Martinot.

Por estas consideraciones, mi voto es por declarar **IMPROCEDENTE** la demanda de amparo.

S.

MIRANDA CANALES

Lo que certifico:

Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ

Y GRACIA MARÍA FRANCISCA

ALJOVÍN DE LOSADA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI

Si bien concuerdo con la sentencia emitida en estos autos, considero necesario precisar que es importante que el Congreso de la República atienda el pedido de protección jurídica que solicitan las parejas del mismo sexo sea a través de la modificación de la Constitución según su procedimiento, o, en todo caso, a nivel del Código Civil, vía una regulación especial que bien podría denominarse unión civil u otra similar.

S.

BLUME FORTINI

Lo que certifico:

Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA
MARÍA FRANCISCA ALJOVÍN DE LOSADA


VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

El Tribunal Constitucional peruano, o por lo menos la mayoría actual, no es, ni debe ser, un Tribunal de la Santa Inquisición, aunque, a veces, en casos como el presente, lo parece.

*Dicha mayoría de magistrados ha establecido la siguiente regla: **separados pero iguales**. Esto es, cada uno es igual pero en su "estamento" y según su "naturaleza", y no puede exigir los mismos derechos de aquellos que integran el "estamento modélico" de persona, familia o matrimonio.*

¡Qué difícil es para algunos mirarnos como iguales! Qué difícil es aceptar que los tiempos han cambiado y que todos los peruanos y peruanas, tenemos derechos.

¿por qué buscar, a cualquier costo, que otros, que no forman parte de su "estamento", no tengan derechos?

- 
1. Considero que la presente demanda debe ser declarada **FUNDADA** porque en este caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad y a no ser discriminado previsto en el artículo 2.2 de la Constitución, no sólo en el caso de Susel Ana María Paderes Piqué y de Gracia María Francisca Aljovín de Losada, sino de una innumerable cantidad de personas a quienes una vez más se les prohíbe el derecho a contraer matrimonio civil.
 2. Si revisamos los argumentos que sustentan la posición de la mayoría del Tribunal Constitucional (magistrados: Blume, Ferrero, Sardón y Miranda), es evidente la falta de imparcialidad de dicha mayoría, al haber tergiversado sobre lo que dice la Constitución o determinados Tratados de Derechos Humanos, tal como lo voy a demostrar ampliamente en este voto.

Antes de ingresar al desarrollo de la argumentación jurídica de mi posición debo dejar constancia que me parece increíble que la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional, como expresión de su parcialidad, critican a quien consideran como "dueño de la verdad" o "monopolista de la virtud" (fundamento 21), refiriéndose obviamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (fundamento 20), cuando en realidad son ellos los que están actuando como dueños de la verdad, monopolistas de la virtud o si se quiere, como representantes de cierto imperativismo moral. Son ellos (magistrados: Blume, Ferrero, Sardón y Miranda), los que están buscando que prevalezca un modelo de persona, un modelo de familia y un matrimonio tradicional, negando que estos conceptos hayan cambiado en la actualidad y negando sobre todo, la igualdad en el ejercicio de los derechos.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA


SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA
MARÍA FRANCISCA ALJOVÍN DE LOSADA

Que quede claro: ni la Constitución peruana, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen, en ningún extremo, lo que ellos afirman, y menos aún nuestra Constitución “contiene la misma noción de matrimonio del Código Civil” peruano (fundamento 17), que establece que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer”.

Estas expresiones no están ni en la Constitución ni en ninguno de los mencionados Tratados de Derechos Humanos. Invoco, a quien lea este voto, que revise el texto de la Constitución y de su propia y personal lectura, verifiquen lo que dicen que dice la Constitución.

Lean el artículo 4 de la Constitución, cuando se refiere al matrimonio. En ninguna parte dice que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer”, todo lo contrario, la Constitución hace referencia a que debe promoverse el matrimonio y deja al legislador a que regule el contenido de esta institución.

Reitero, el constituyente ha dejado al legislador, que regule el contenido del matrimonio, tarea, que el legislador desde el año 1993 hasta la fecha, viene omitiendo cumplir con dicho mandato constitucional; por tanto, no se puede afirmar situaciones que no están en el texto expreso de la Constitución, como si lo estuvieran, para justificar conclusiones que se apartan de la verdad. Es grave y notoria su parcialización, con la que miran y definen este caso.

- 
3. Estoy convencida que en algunos años, cuando se revise la historia de los derechos fundamentales en el Perú, este caso, al igual que el caso de Oscar Ugarteche Galarza y Fidel Aroche Reyes, figurarán como un modelo de retroceso, de conservadurismo, de la discriminación por razón de orientación sexual y de la intolerancia que existe en parte de nuestra sociedad, en el Estado peruano, y lamentablemente en una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional.

Avizoro que estas sentencias serán estudiadas, a manera de “paleontología” jurídica de un pensamiento anacrónico a los derechos de los peruanos y peruanos de nuestro país.

Con esta segunda sentencia, dicha mayoría, conformada por los magistrados: Blume, Ferrero, Sardón y Miranda, sólo continúan dividiendo a las personas en nuestro país: unas, que la podríamos llamar, de primera categoría y en otras de segunda categoría. Para dichos magistrados, las personas de primera categoría son las heterosexuales, quienes poseen todos los derechos que la Constitución reconoce y tienen la plena protección del Estado. En cambio, las personas de segunda categoría, en la que incluyen a aquellas parejas del mismo sexo, entre otras, son quienes no poseen los mismos derechos y tampoco tienen la plena protección del Estado.

4. De este modo, la mayoría del Tribunal Constitucional ha actuado como si fuese un Tribunal de la Santa Inquisición, buscando reprimir y castigar a quienes no se ajustan al estándar de persona, de familia o de matrimonio tradicional que ellos defienden.



Ciertamente hoy no se puede ordenar la tortura, la flagelación, la muerte en la hoguera u otros castigos físicos, pero ¿acaso no es un castigo el sufrir a diario la discriminación de la sociedad y del Estado?, ¿acaso no es un castigo el ser estigmatizado como alguien diferente de las personas “normales”?, ¿acaso no es un castigo el ser marginalizado en los estratos menos protegidos y más vulnerables de la sociedad?

Todos estos son castigos que la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional no sólo no ha buscado detener, sino por el contrario ha buscado perpetuarlos, estableciendo argumentos falaces para impedir que por cualquier medio se reconozcan cambios en el *statu quo* imperante.

En mi opinión, esto refleja un claro incumplimiento de su función de jueces y de garantes de los principios constitucionales, que tanto se proclama desde el pulpito del Tribunal Constitucional.

5. En este punto resulta pertinente citar a Luis García Montero¹ quien analizando el contexto español, sostiene que la “labor a favor de las élites” de la Santa Inquisición “impidió la integración de sectores muy amplios de la población”.

Y, refiriéndose dicho autor, a artículos “que analizan las debilidades y maniobras de los argumentos utilizados en sus sentencias por los vocales dominantes del Tribunal Constitucional”, señala que “los efectos a largo plazo serán irremediables: una nueva desconfianza en el Estado español (en Europa y dentro de España) y el descrédito de la Justicia compartida entre la gente. La legalidad es un valor fundamental para una democracia. Y no se tratará de que el pueblo llegue a distinguir entre buenos y malos jueces, sino de ***un proceso dañino que santifique la ley del más fuerte y favorezca, como único comportamiento posible, la ruptura de los marcos de convivencia***”.

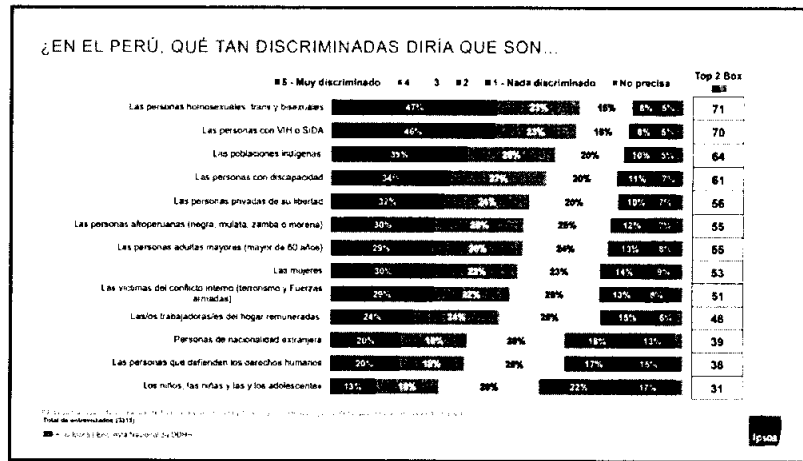
6. ¡Qué difícil es para algunos mirarnos como iguales! Qué difícil es para algunos aceptar que los tiempos han cambiado y que todos los peruanos y peruanas tenemos derechos. ¿A qué le tienen miedo?, ¿al cambio?, ¿a la diferencia?, ¿a la diversidad?, ¿al pluralismo?, o, en todo caso, ¿qué daño les hace a ellos que otras personas pretendan el reconocimiento de sus derechos?, ¿por qué buscar, a cualquier costo, que otros, que no forman parte de su “estamento”, no tengan derechos?
7. Cuánta falta hace entender que la Constitución tiene como objetivo principal que más allá de las riquezas, idioma, raza, condición social, poder político, confesión religiosa u orientación sexual, todos los hombres y mujeres en el Perú sean libres e iguales en el ejercicio de sus derechos.

¹ GARCÍA MONTERO, Luis. “Tribunal Constitucional. ¿Un nuevo Tribunal de la Inquisición? *Diario digital Infolibre*. Se puede revisar en esta dirección: https://www.infolibre.es/opinion/columnas/verso-libre/tribunal-constitucional-nuevo-tribunal-inquisicion_1_1208099.html



8. Cuánta falta hace tener en cuenta las expresiones de Dworkin, quien hace más de 45 años defendía la idea de que “la institución de los derechos es (...) crucial, porque representa la promesa que la mayoría hace a las minorías de que la dignidad y la igualdad de éstas serán respetadas. Cuanto más violentas sean las divisiones entre los grupos, más sincero debe ser ese gesto para que el derecho funcione”.²
9. Resulta increíble que en pleno siglo XXI, la historia de las discriminaciones continúe en el Perú, sobre todo contra los grupos vulnerables: pueblos indígenas u originarios, mujeres, niños, personas afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, parejas del mismo sexo y personas del colectivo LGTBIQ+, entre otros. Tal como se aprecia en la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada por Ipsos³, a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más del 70% de la población en el Perú considera que la población LGTBI es discriminada y también reconoce que es el grupo más discriminado de poblaciones vulnerables.

[Handwritten signature]

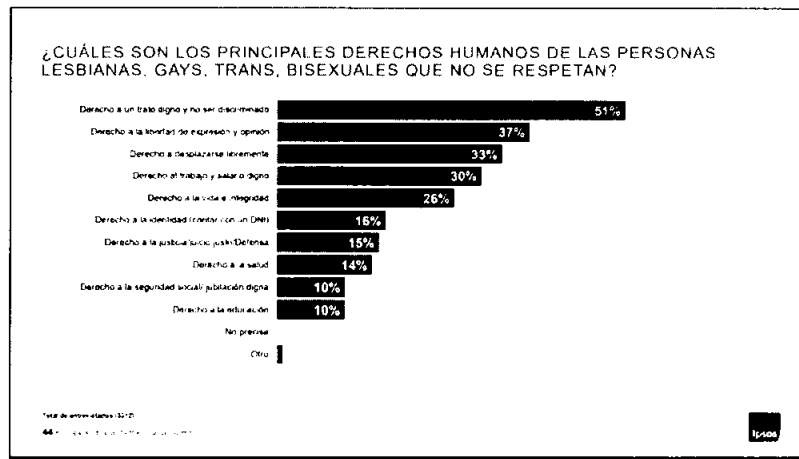


i.

10. Pero no sólo hay que visibilizar la discriminación contra esta población, sino además que concurrentemente a la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación también se vulneran otros derechos fundamentales de esta misma población:

² DWORKIN, Ronald. *Los derechos en serio*. Barcelona, Ariel, 2002, p.303.

³ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1611180/3.-Informe-completo-de-la-II-Encuesta-Nacional-de-Derechos-Humanos.pdf>



i.

11. De seguro que esto cambiará, tal como está sucediendo en todo el mundo y en la mayoría de países de sudamérica.

Como lo demostraré más adelante, desde el año 2001 hasta la fecha, ya son 30 países los que han implementado el derecho a que la institución del matrimonio también pueda extenderse a favor de las parejas del mismo sexo.

Antes de noviembre de 2017, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicara la OC-24/17, los países americanos de Canadá (2005), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), México (2015) y Colombia (2016) ya contaban con el matrimonio igualitario.

Luego de dicha fecha, lo hicieron Ecuador (2019), Costa Rica (2020) y Chile (2021).

12. Llegará el tiempo en que se superen tales discriminaciones históricas en el Perú, pero mientras sucede ello, mientras sigamos esperando ese momento, las parejas del mismo sexo o las de la población LGTBIQ+ seguirán siendo esencialmente invisibles para la Constitución, para el derecho peruano y sobre todo para la mayoría del Tribunal Constitucional. Todo esto les seguirá ocasionando directos y palpables perjuicios.

13. También abrigo la esperanza que llegará el tiempo en que el Tribunal Constitucional, este integrado por personas que utilicen adecuadamente la interpretación evolutiva de la Constitución; esto es, que el texto constitucional, en especial las disposiciones sobre derechos fundamentales, no deban ser entendidas en el contexto en que fueron aprobados, sino que deberán ser entendidas como libertades que se transforman con el tiempo y conforme a las necesidades existentes en cada momento histórico.

14. Finalmente, tal como se verá en el desarrollo amplio del presente voto singular, he buscado amparar la posición de proteger el derecho del demandante Andree Alonso Martinot Serván, a la igualdad y a no ser discriminado, amparándome en la aplicación prevalente de tal derecho fundamental y basándome en una interpretación evolutiva



de las disposiciones constitucionales y convencionales. Así también he buscado consignar las principales referencias jurisprudenciales y normativas que existen en diversas partes del mundo sobre el matrimonio igualitario, para mostrarnos el inevitable cambio que se viene.

15. La jurisdicción constitucional no se agota en sede nacional. De seguro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre este caso u otros similares y amparará el derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo. Allí la mayoría actual del Tribunal Constitucional o la que venga no podrán impedirlo. Allí cambiará la historia de los derechos de las parejas del mismo sexo (no por la obra de los jueces de nuestro país) y las posturas intolerantes no podrán impedirlo.

16. En lo que sigue, para desarrollar los argumentos hasta aquí expuestos, me referiré a los siguientes puntos: *i)* la interpretación evolutiva de los textos constitucionales en las sociedades contemporáneas; *ii)* la apertura de los textos constitucionales al Derecho Internacional; *iii)* el matrimonio igualitario en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; *iv)* el matrimonio igualitario en el Derecho Constitucional Comparado; *v)* la necesidad de interpretar el Código Civil a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales; *vi)* la exclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo es una nueva forma de la doctrina “separados, pero iguales”; *vii)* análisis del presente caso.

i) La interpretación evolutiva de los textos constitucionales en las sociedades contemporáneas y una especial referencia al caso peruano

17. Estimo necesario efectuar algunas consideraciones a propósito de la interpretación evolutiva de los textos constitucionales, ya que, de la revisión de la sentencia suscrita por los magistrados Blume, Ferrero, Sardón y Miranda, advierto que se hacen interpretaciones aisladas, descontextualizadas y que resultan contrarias a estándares internacionales sobre Derechos Humanos.

18. Para la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional, en el Perú los elementos esenciales del matrimonio son dos:

- a) Ser una *unión voluntaria* -por tanto, en el Perú no puede reconocerse un matrimonio concertado entre los padres de los novios, como ocurre, por ejemplo, en la India-; y,
- b) Ser celebrado por *un varón y una mujer* -por tanto, en el Perú no puede reconocerse la poligamia, como en los países musulmanes, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, como en Ciudad de México-.

19. Así, considera la mayoría conformada por los magistrados Blume, Ferrero, Sardón y Miranda, que, según nuestra Constitución, el matrimonio es, de forma exclusiva, la unión entre *un varón y una mujer*, por lo que dicho vínculo solo sería válido en la medida en que involucre a dos personas de distinto sexo.



20. De este modo, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional asume que el concepto de “familia” es estático, y no sujeto a la evolución propia de las sociedades modernas.

De hecho, la posición mayoritaria ni siquiera discute la posibilidad de brindar algún mecanismo legal para que se puedan reconocer los derechos y deberes que se forjan a propósito de la relación que desarrollan dos personas del mismo sexo.

Simplemente considera que son situaciones que no corresponde visibilizar, y que no corresponderían de ser resueltas a través del derecho. Sin embargo debe recordarse, como lo señaló la Corte Constitucional de Ecuador al reconocer el matrimonio igualitario, que

“[e]xisten personas del mismo sexo que demandan el reconocimiento del derecho al matrimonio, por considerarlo importante en sus planes de vida y que invocan derechos como la dignidad, la igualdad y las libertades. Esta exigencia, que no existía o que no fueron consideradas al momento de plasmar los textos jurídicos, requiere poner en contexto actual la norma constitucional y las normas legales, y adaptar su contenido e interpretación a los requerimientos actuales”⁴.

21. De este modo, como lo ha recordado el propio Tribunal Constitucional, no resultaría viable petrificar el significado o lo que comprende el término “familia”. Así, desde una perspectiva constitucional,

debe indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han denominado familias reconstituidas⁵.

22. En efecto, estos “nuevos contextos sociales” a los que se ha referido el Tribunal Constitucional se asocian con nuevas formas de entender asuntos que, hace unas décadas atrás, generaban distinto reproche social. El matrimonio entre personas del mismo sexo ingresa en este grupo de conceptos.

Por lo general, al asumirse que el matrimonio era una institución destinada a la procreación, y que poseía un inevitable nexo religioso, ello era razón más que suficiente para no permitir que sus efectos se extiendan para las parejas del mismo

⁴Corte Constitucional de Ecuador. Caso N° 11-18-CN, fundamento 165.

⁵ STC 09332-2006-AA, fundamento 7.



sexo. Sin embargo, debe recordarse que, aunque resulta evidente que el creyente o el ateo pueden desplegar su proyecto de vida de acuerdo con sus creencias personales, ello solo puede realizarse con el notorio límite de que ello no suponga imponer a los demás su forma de entender el mundo⁶.

23. Del mismo modo, entender el matrimonio de esta manera sería inconstitucional porque se petrifica un modelo único de familia. Como bien ha sostenido la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos,

la naturaleza de la injusticia es que no siempre la vemos en nuestros tiempos. Las generaciones que escribieron y ratificaron la Carta de Derechos y la Decimocuarta enmienda no pretendieron conocer el alcance de la libertad en todas sus dimensiones, por lo que confiaron a las futuras generaciones la protección del derecho de todas las personas a disfrutar de la libertad a medida que aprendemos su significado. Cuando una nueva visión revela discordancia entre las protecciones centrales de la Constitución y una restricción legal recibida, se debe abordar una alegación a la libertad⁷.

24. Esta nueva forma de entender el matrimonio también debe realizarse de conformidad con las modernas articulaciones en lo que respecta a los nexos entre la religión oficial de un país y las propias estructuras estatales. Por ejemplo, en Canadá, la Corte Suprema Federal ha señalado que, antes incluso de la adopción de la *Civil Marriage Act* de 2005, con anterioridad este país se articulaba como una sociedad de valores sociales compartidos en la que se pensaba que el matrimonio y la religión eran inseparables. Sin embargo, recuerda que ese ya no es el caso, al tratarse ella de una sociedad pluralista en la que el matrimonio es una institución civil.

De este modo, los *frozen concepts*⁸ son contrarios a los principios fundamentales de la interpretación constitucional canadiense, los cuales consideran que la Carta fundamental es un árbol vivo, el cual se expande a través de una interpretación progresiva, lo que le permite adaptarse a las realidades de la vida moderna⁹.

25. Ciertamente, la sola de adopción de normas jurídicas resulta insuficiente frente a discriminaciones de carácter histórico. Aunque existan estudios que demuestran que, en líneas generales, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo termina por mejorar la forma en que el resto de la sociedad comprende la homosexualidad, lo cierto es que este proceso requiere de transformaciones que demandan de un importante esfuerzo colectivo.

⁶Taylor, Charles y Maclure, Jocelyn (2011). *Laicidad y libertad de conciencia*. Madrid: Alianza Editorial, p. 29.

⁷Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. *Caso Obergefell vs. Hodges*. La cita se encuentra en: Delgado, David (2017). *Obergefell contra Hodges: La sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo*. UNED. *Revista de Derecho Político*, N° 99, p. 344

⁸Literalmente se podría asumir que se asumen como “conceptos congelados”. Sin embargo, la traducción más cercana a nuestro lenguaje sería la de conceptos estáticos.

⁹Corte Suprema de Canadá. 2004 SCC 79, fundamento 22



En todo caso, como lo ha hecho recordar la Corte Constitucional de Sudáfrica al reconocer el matrimonio igualitario, [l]a ley no puede automáticamente y por sí misma eliminar los estereotipos y los prejuicios. Sin embargo, sirve como una gran maestra, establece normas públicas que se asimilan a la vida diaria y protege a las personas vulnerables de la marginación y el abuso que son injustos. Es necesario recordar que no solo los tribunales son responsables de reivindicar los derechos consagrados en la Carta de Derechos¹⁰.

26. Lo determinante en la discusión sobre la viabilidad constitucional del matrimonio igualitario radica en lo que esta clase de uniones busca proteger, y si es que su incorporación genera algún perjuicio de relevancia para terceros que pueda justificar su exclusión.

Al respecto, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional suscrita por los magistrados Blume, Ferrero, Sardón y Miranda, efectúan una comparación entre el no reconocimiento de la poligamia -propio de diversos países musulmanes- con el del matrimonio entre personas del mismo sexo. Considero que ello es un notorio ejemplo de la falacia de “pendiente resbaladiza”.

Se pretende asumir consecuencias negativas de una institución que no guarda ninguna semejanza cercana con la poligamia. Como bien anota Nora Markard, tanto la poligamia y el incesto se distinguen claramente del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ello obedece a que aquellas prohibiciones no se imponen a un grupo vulnerable -como sí ocurre en el caso de la comunidad LGTBI-, o sobre el cual exista una estructura social de discriminación, por lo que la pendiente no es tan resbaladiza como se quiere hacer creer¹¹.

27. Del mismo modo, la posición asumida en la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, con esa clase de comparaciones, pretende deslegitimar el reconocimiento de un derecho como si se tratara de una simple aspiración o capricho. Sin embargo, es evidente que se trata de una institución cuyos efectos jurídicos tienen una importante incidencia en la vida de las personas, y que bien puede involucrar a las parejas del mismo sexo.

Como bien ha referido la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, la exclusión respecto de la institución del matrimonio

“es claramente discriminatoria porque las relaciones que entablan las parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una *situación equivalente* a las

¹⁰ Corte Constitucional de Sudáfrica. *Minister of Home Affairs and Another v. Fourie and Another*, CCT 60/04, p. 138

¹¹ Markard, Nora (2016). Dropping the Other Shoe: Obergefell and the Inevitability of the Constitutional Right to Equal Marriage. *German Law Journal*, Vol. 17. Núm. 3, p. 540



parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio”¹².

28. Por otro lado, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional suscrita por los magistrados Blume, Ferrero, Sardón y Miranda, consideran que el reconocimiento del matrimonio igualitario en nuestro ordenamiento supondría, en esencia, colocar nuestras preferencias personales por encima de la Constitución. Acceder a una institución civil no puede reducirse a ello. Involucra derechos y responsabilidades que permite que las personas sean consideradas y vistas como semejantes por el resto de integrantes de la sociedad.

Ningún argumento histórico debería bastar para esta clase de exclusiones, las cuales incentivan la formación de ciudadanos de segunda categoría. En efecto, se olvida en la sentencia que la propia norma fundamental admite que sus contenidos se pueden innovar con el paso del tiempo.

El artículo 3 es una muestra evidente que nuestros constituyentes sabían que su obra era inacabada. Del mismo modo, la remisión que se efectúa en la Cuarta Disposición Final y Transitoria a los tratados internacionales también demuestra la lógica de apertura que ha inspirado el diseño de nuestra Constitución.

No se ha pretendido que sea un ordenamiento cerrado y desconectado de lo que ocurre en el ámbito internacional y comparado. En efecto, como ha sostenido la Corte Constitucional de Colombia,

la Constitución no es un orden cerrado y estático y menos puede serlo en una materia que, como ampliamente se ha expuesto, está sometida a una constante evolución que no puede ser ignorada por el ordenamiento, de lo cual fue consciente el propio constituyente al prever que, además del matrimonio, la familia puede constituirse por la voluntad responsable de conformarla que, según se ha señalado, sirve de fundamento a un amplio conjunto de modalidades familiares y no solo a la surgida de la unión de hecho de parejas heterosexuales¹³.

29. Por otro lado, también la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional yerra al sostener que lo que respalda la decisión de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo es una suerte de “moral superior”. Lo que genera mi convicción de que nuestra Constitución debe proteger las uniones entre parejas del mismo sexo radica en que nuestro ordenamiento debe brindar una respuesta satisfactoria en relación con una situación en la que se ha preferido guardar silencio. Por ejemplo, en España, la Ley 13/2005, que incorpora el derecho al matrimonio igualitario, precisa que

“[e]l establecimiento de un marco de realización personal que permita que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo

¹² Corte Suprema de Justicia de la Nación de México. Amparo en Revisión 581/2012, considerando octavo

¹³ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-577/11



puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad se ha convertido en exigencia de los ciudadanos de nuestro tiempo, una exigencia a la que esta ley trata de dar respuesta”¹⁴.

30. Como he señalado, la falta de respuesta directa a este asunto no solo genera que las parejas del mismo sexo sean esencialmente invisibles para el derecho peruano, sino que ello les ocasiona directos y palpables perjuicios. Al respecto, la Corte Suprema de Costa Rica ha sostenido que

a pesar de lo dicho en el considerando III de esta sentencia en cuanto a la naturaleza y evolución histórica del matrimonio (que permite llegar a la conclusión contraria a las pretensiones del accionante), esta Sala descarta que haya impedimento de alguna naturaleza para la existencia de uniones homosexuales. Más bien, hay una constatación empírica para indicar que han incrementado. Con ello, se presenta un problema que no radica en la norma aquí impugnada sino, más bien, en la ausencia de una regulación normativa apropiada, para regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones, sobre todo si reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario¹⁵.

31. Este nuevo entendimiento del matrimonio no perjudica a terceros, ni supone ninguna alteración del orden público o de las denominadas buenas costumbres.

Las personas que consideran que esta institución tiene un matiz religioso y que, por ello, solo procedería para parejas heterosexuales siguen gozando del reconocimiento de este derecho y pueden aun materializar sus proyectos de vida de conformidad con su propia cosmovisión del mundo. Del mismo modo, aquellas personas que estiman que el modelo adecuado de la familia se vincula con la procreación, podrán desarrollar dicho plan de vida sin injerencias estatales indebidas. En España, el Tribunal Constitucional sostuvo, a propósito de la aprobación de la ley que permite estas uniones, que

la institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución, tenemos en la sociedad española actual del matrimonio, como comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común, prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante las formalidades establecidas en el ordenamiento¹⁶.

32. En efecto, el derecho no puede desconocer la existencia de estos vínculos afectivos, más aun cuando de ellos se pueden desprender consecuencias legales. Sobre ello, ha mencionado el Tribunal Supremo del Brasil, en su pronunciamiento que legaliza el

¹⁴Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio

¹⁵ Corte Suprema de Costa Rica. Expediente 15-013971-0007-CO, Res. N° 2018012782, pág. 21.

¹⁶Tribunal Constitucional de España. Sentencia 198/2012, fundamento jurídico 9



matrimonio entre personas del mismo sexo, que el siglo XXI ya viene marcado por la preponderancia de la afectividad sobre el componente biológico, por lo que este último surge como una realidad meramente mecánica o automática¹⁷.

33. Ahora bien, otro argumento que justifica el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo que se han realizado en el extranjero se asocia con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17.

34. Es por ello que, en el siguiente apartado, me referiré a la tendencia existente en las constituciones nacionales de interactuar con los tratados y, en general, con las fuentes del Derecho Internacional, cuestión que se ha intensificado, particularmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial.

ii) La apertura de los textos constitucionales al Derecho Internacional

35. En segundo lugar, deseo referirme al deber de interpretar los textos constitucionales de conformidad con los estándares internacionales que debería observar el Estado peruano si es que no desea que, con posterioridad, se declare su responsabilidad internacional.

En la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional se parte de la premisa que el Estado peruano es un ordenamiento cerrado y autosuficiente, aspecto que, sin lugar a dudas, no se condice con la apertura internacionalista que se ha destacado en el ordenamiento peruano desde la Constitución de 1979.

36. En efecto, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, para sustentar su posición, se remite a lo dispuesto en el Libro X, de Derecho Internacional Privado, contenido en el Código Civil. Así, de conformidad con el artículo 2050, se establece que

[t]odo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Perú, *en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres* [énfasis añadido].

37. Por ello, la sentencia suscrita por la mayoría estima que no todo derecho adquirido fuera del Perú tiene que ser reconocido como válido en el Perú, ya que el principal límite para ello se refleja en el respeto al orden público internacional y las buenas costumbres nacionales. Tal y como expuse en mi voto conjunto con el magistrado Ramos Núñez en el caso Oscar Ugarteche, esta noción de “orden público”, y que dará luego paso a la de “orden público internacional”,

¹⁷ Tribunal Supremo de Brasil. Acción Directa de Inconstitucionalidad 4277. Voto del Ministro Ayres Britto, párr. 34



tiene como importante referente al Código Civil de Napoleón de 1804, documento que desarrolló una importante influencia en distintos países de América Latina. En dicho texto, se entendió que las convenciones o acuerdos privados no podían transgredir las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres. Esto supuso, pues, un límite al principio de autonomía de la voluntad de las personas. La evolución y la consiguiente extensión del adjetivo “internacional” se desenvuelven, así, en el marco del desarrollo de las relaciones exteriores propias de la Paz de Westfalia (1648), la cual supuso el reconocimiento de igualdad soberana entre los Estados, y que, naturalmente, ellos eran los únicos que podían producir obligaciones desde el derecho internacional. Era la época en que el derecho internacional era producido y elaborado, de forma exclusiva, por las autoridades estatales, las cuales se constituían como los amos y señores de los tratados¹⁸.

38. De esta manera, esta noción de “orden público internacional” a la que alude la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional tenía sentido en el contexto de Estados que no tenían un especial interés por la apertura hacia lo internacional. Sin embargo, en la lógica del constitucionalismo peruano contemporáneo, esta clase de argumentos ya no serían viables.

Desde la Constitución de 1979, nuestro ordenamiento ha brindado importantes señales de apertura y de interacción con diversas fuentes del Derecho Internacional. Por ello, no es posible asumir, como lo hace la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, que el único derecho válido y vigente en el Perú es el producido exclusivamente por las autoridades estatales. En efecto, es también obligatoria la observancia de los tratados que ha suscrito nuestro Estado, lo cual se desprende del principio *pacta sunt servanda*.

A ello debe agregarse que, por propia disposición del legislador democrático, las decisiones de los tribunales internacionales cuya competencia ha sido reconocida por el Estado peruano también fungen de parámetro de interpretación de los derechos fundamentales.

39. Por otro lado, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional también pretende demostrar cierta tendencia internacionalista al citar -aunque de forma tergiversada- el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado -conocido como Código Bustamante-, de 1928, suscrito por el Perú, según el cual los “preceptos constitucionales son de orden público internacional”.

40. Una primera observación inmediata que debe realizarse a este argumento radica en la notoria antigüedad de dicho tratado, el cual, evidentemente, debe ser entendido de forma conjunta con el resto de obligaciones asumidas por el Estado peruano.

¹⁸ Voto conjunto de los magistrados Ramos Núñez y Ledesma Narváez en el expediente 01739-2018-PA, fundamento 63



La posición de la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, suscrita por los magistrados Blume, Ferrero, Sardón y Miranda, se defiende con un acuerdo internacional que se remonta hacia casi aproximadamente un siglo.

No se pretende, con esto, descalificar a un instrumento internacional solamente por este factor, pero sí es importante advertir que, para la época en que se elaboró dicho acuerdo, no existían los modernos avances que existen en la actualidad en el ámbito del Derecho Internacional, ni mucho menos existía el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Indudablemente, la evolución de aquella disciplina ha modificado el entendimiento exclusivamente estatal del derecho. Se ha señalado, por ello, que

“aunque tradicionalmente se suele oponer a esta afirmación el que los procesos constituyentes (o de reforma de la constitución) son muestra excelsa del poder soberano de los Estados, *legibus solutus*, es claro que en el contexto actual del pensamiento jurídico tal afirmación resulta, cuanto menos, imprecisa”¹⁹.

41. Por otro lado, un segundo cuestionamiento tiene que ver con el hecho que la propia noción de orden público internacional se ha modificado con el tiempo, tal y como precisé con anterioridad.

La idea de invocar las normas internas para no reconocer la validez de actos jurídicos celebrados en el extranjero guardaba sentido en ordenamientos jurídicos cerrados, en los que no existía ningún nivel de interacción con fuentes del Derecho Internacional. Sin embargo, en nuestro modelo se dispone que el entendimiento del derecho interno debe efectuarse de conformidad con los tratados internacionales suscritos y en virtud de los criterios desarrollados por los tribunales internacionales constituidos según acuerdos ratificados por el Estado peruano.

Como ha sostenido Ignacio Gutiérrez, una constitución

“solo es democrática si está abierta al cambio; y, en el contexto de la globalización, sólo en la medida en que esté abierta la reconsideración de sus propios criterios de inclusión y de jerarquía: a reconocer la participación de los demás en decisiones que les afectan y a someterse a procesos de decisión más amplios en las cuestiones que la superan. Sólo es democrática la Constitución abierta al Derecho internacional”²⁰.

42. Un buen ejemplo de esta apertura se refleja en el fallo de la Corte Constitucional de Taiwán que reconoció la validez constitucional de los matrimonios entre parejas del

¹⁹ Santofimio, Jaime (2017). El concepto de convencionalidad. Bogotá: Fondo Editorial de la Universidad Externado de Colombia, p. 323

²⁰ Gutiérrez, Ignacio (2020). Estado de Derecho y democracia más allá del Estado. En: Arroyo, Luis; Delgado, Isaac y Meix, Pablo (directores). Derecho Público Global. Fundamentos, actores y procesos. Madrid: Iustel, p. 31



mismo sexo. En este pronunciamiento se efectúan diversas referencias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos para sustentar la posición del tribunal. Por ello, se señala que

[e]l fallo está fundamentado en el derecho internacional y las normas de derechos humanos. El fallo se basa en la doctrina de la no discriminación, un principio fundamental del derecho internacional consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y prácticamente en todos los principales tratados de derechos humanos tanto a nivel internacional como regional. Los órganos de tratados de las Naciones Unidas y los tribunales regionales han declarado repetidamente que la orientación sexual es un motivo prohibido de discriminación según el derecho internacional²¹.

43. De esta manera, y en virtud de los avances que se advierten en la comunidad internacional, me referiré al desarrollo que se le ha brindado al derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que ello me permitirá rebatir la forma engañosa en la que la sentencia de la mayoría del Tribunal Constitucional aborda la interpretación del derecho a contraer matrimonio en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

iii) El matrimonio igualitario en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

44. La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional sostiene que la Convención Americana no señala que el matrimonio sea un derecho de las parejas del mismo sexo, sino que se configura como un derecho del hombre y la mujer, es decir, de dos personas de sexo opuesto. De esta manera, y citando el contenido literal del artículo 17.2 de la Convención, señala que

“[e]s indudable [...] que la Constitución -leída a la luz del inciso 2 del artículo 17 de la Convención Americana- contiene la misma noción de matrimonio del Código Civil y la eleva al más alto rango jurídico. Al tener rango constitucional, la noción de matrimonio -según el Código Bustamante- es parte integrante del orden público internacional. Por tanto, no puede reconocerse en el Perú un derecho adquirido en el extranjero que colisione con esta noción”.

45. De esta manera, la sentencia suscrita por la mayoría solamente acude a una lectura literal y petrificada de la Constitución y de la Convención Americana para sostener que solo debe entenderse el matrimonio entre personas de distinto sexo.

Esta conclusión tiene tres serios inconvenientes: *i)* lo que se juzga en este caso es la decisión de un tercer Estado de permitir esta unión matrimonial; *ii)* no advierte que, de conformidad con los organismos internacionales, la interpretación de los derechos

²¹ Corte Constitucional de Taiwán. Interpretación N° 748, del 2017



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA

MARÍA FRANCISCA ALJOVIN DE LOSADA

fundamentales es de carácter evolutivo y no es originalista; *iii*) no advierte que cuando las normas constitucionales e internacionales pueden ser concurrentes en un caso, se debe aplicar aquella que más favorezca los derechos de la persona.

i) En este caso, se está examinado la decisión de un tercer Estado de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo

46. En relación con el primer punto, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional solo se dedica a sostener que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, no existiría el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

No se detiene, por ello, a examinar si es que esto también supone que no se reconozca ninguna clase de unión de este tipo que, válidamente, pueda haber sido efectuada de conformidad con el derecho interno de otros Estados.

Si es que lo que sostiene la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional suscrita por los magistrados Blume, Ferrero, Sardón y Miranda, fuera cierto, entonces el matrimonio entre personas del mismo sexo ingresaría al terreno de lo “constitucionalmente prohibido”, ya que no solo es que no se pueda implementar esa unión a través de una reforma legal -al menos para la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional-, sino que cualquier intento de reconocer una unión de estas características en el Perú sería inválido.

47. Sobre este punto, es importante mencionar que la Constitución peruana reconoce un importante nivel de apertura para el reconocimiento de otras formas de comprender los derechos. Si a ello se agrega que la incorporación del matrimonio entre personas del mismo sexo -como lo ha hecho el Estado de Nueva York- resulta compatible con lo señalado en un pronunciamiento del órgano competente para interpretar la Convención Americana, esta regulación goza, con mayor razón, de un importante margen de autoridad que debería ser respetado por los demás Estados de la región, compartan o no esta posición.

En realidad, la ideologización a la que alude la sentencia -y que, supuestamente, estaría detrás de aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo- viene de ella misma, ya que antepone sus creencias personales de lo que es o significa el matrimonio a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 24/17.

48. Me interesa, por ello, referirme al caso de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano encargado de interpretar el derecho comunitario. Por lo general, se suelen citar los estándares de este organismo supranacional para respaldar la tesis de que los Estados tienen plena libertad de configurar el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de su jurisdicción. Ahora bien, esa referencia es incompleta, ya que este órgano supranacional ha sostenido que



en el estado actual del Derecho de la Unión, el estado civil de las personas, en el que se incluyen las normas relativas al matrimonio y a la filiación, es una materia comprendida dentro de la competencia de los Estados miembros, competencia que el Derecho de la Unión no restringe. Los Estados miembros disponen de ese modo de la libertad de contemplar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en su Derecho nacional, así como la parentalidad de estas. No obstante, cada Estado miembro debe respetar el Derecho de la Unión al ejercitar dicha competencia y, en particular, las disposiciones del Tratado UE relativas a la libertad reconocida a todo ciudadano de la Unión de circular y residir en el territorio de los Estados miembros, **reconociendo para ello el estado civil de las personas establecido en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este**²² (énfasis agregado).

49. De ello se desprende que, incluso en el escenario de la Unión Europea -que se caracteriza por no obligar a que se reconozca el matrimonio igualitario-, sí se reconoce que, si un tercer Estado ha optado por incorporar esta clase de vínculo, este debería ser respetado en el territorio de otro país que también integra dicha entidad supranacional.

Esto implica que, en ese modelo, es viable que los Estados decidan si reconocen o no el matrimonio igualitario en su derecho interno. Sin embargo, lo que no están facultados de hacer es desconocer una unión matrimonial que se hubiera celebrado según el derecho de otro Estado miembro de la Unión Europea.

Tampoco debe olvidarse que, de conformidad con los estándares regionales europeos, puede que no se haya hecho referencia a un deber de incorporar el matrimonio como única institución a la que puedan acceder parejas del mismo sexo; sin embargo, sí ha precisado que los ordenamientos nacionales deben dar alguna clase de respuesta ante esta clase de casos. No incorporar alguna solución sería una conducta evidentemente discriminatoria.

50. Puede advertirse que esta clase de argumentos no han sido analizados en la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional. No se brindan mayores razones por las que no se deba respetar la decisión de un Estado de incorporar en su regulación local el derecho al matrimonio entre las personas del mismo sexo.

Esto es, aún más delicado, si es que recordamos que, en la actualidad, el Estado peruano se inserta en una comunidad internacional cada vez más abierta, tolerante y dispuesta al diálogo.

De hecho, se ha hecho referencia a que, en la actualidad, nos encontraríamos frente al desarrollo de una suerte de “globalización de las constituciones nacionales”, y ello en la medida en que, cada vez con mayor medida, los tribunales internos toman en cuenta los desarrollos existentes en el ámbito internacional, sea a escala regional o mundial²³.

²² Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de la Gran Sala de 14 de diciembre de 2021, párr. 52.

²³ Krisch, Nico (2012). Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of Postnational Law. Oxford: Oxford University Press, p. 8



La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, al simplemente ignorar lo sostenido por la Corte Interamericana, pretende instaurar un ordenamiento cerrado, en el que lo único relevante es la posición del Estado peruano. Esta clase de posiciones ya han sido superadas hace décadas.

51. Ahora bien, de forma similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suele ser citado como la experiencia de un organismo internacional que no ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo propiamente como un “derecho”, ya que, al aplicar la doctrina del margen de apreciación nacional, estima que esta clase de regulaciones depende de los propios Estados. Sin embargo, es importante destacar que este tribunal también precisó que, dada la rápida evolución de las actitudes sociales en Europa en relación con las parejas del mismo sexo que se habían advertido en la última década, era artificial que se mantuviera la opinión de que tales parejas no podrían disfrutar una “vida familiar”.

Por lo tanto, llegó a estimar que la vida que desarrollaban dos personas del mismo sexo ingresaba dentro de ese ámbito, a lo que agregó que las parejas del mismo sexo eran tan capaces como cualquier otra de entablar relaciones estables. La necesidad de proteger este tipo de uniones se advierte en el hecho que el Tribunal Europeo, si bien no sostiene que expresamente deba regularse el matrimonio en esta clase de casos, sí estima que debe brindarse alguna clase de medio alternativo para proteger las uniones entre parejas del mismo sexo²⁴.

52. En el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos no existe, a la fecha, un pronunciamiento concluyente en relación con el reconocimiento del derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo. Sin embargo, sí pueden destacarse diversos casos en los que se ha enfatizado la necesidad de no discriminar en función de la orientación sexual.

De hecho, en relación con el caso peruano, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido que nuestro Estado

“debe declarar clara y oficialmente que no tolerará ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad, ni la discriminación o la violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género. También debe modificar su legislación para prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”²⁵.

53. En este sentido, existe una importante tendencia en el ámbito internacional de reconocer las uniones entre parejas del mismo sexo, por lo que la decisión de un Estado de proceder a legalizar este vínculo no debería ser desconocida por el Perú.

²⁴Ver, al respecto: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Schalk and Kopf vs. Austria. Sentencia de 24 de junio de 2010

²⁵Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Perú, aprobadas por el Comité en su 107º periodo de sesiones (11 a 28 de marzo de 2013), fundamento 8.



Efectuar analogías, como lo hace la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, en relación con la poligamia es solo una forma de intentar trivializar un legítimo derecho que, cada vez en mayor medida, se está regulando en los Estados. De similar forma, también pretende tergiversar la interpretación de la Convención Americana en relación con el artículo 17.2.

54. Es por ello que, como segundo punto, deseo referirme a que las tesis originalistas que empla la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional para desentrañar el significado de nuestra norma fundamental no solo son obsoletos, sino que también perpetúan la discriminación en contra de las personas por su orientación sexual.

ii) *La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional no advierte que, de conformidad con los organismos internacionales, la interpretación de los derechos fundamentales es de carácter evolutivo y no es originalista*

55. Ahora bien, interpretar los textos constitucionales no es, ciertamente, una labor de sencilla realización. Por lo general existen discrepancias en relación con la forma en que los tribunales de justicia proceden a delimitar o a precisar los alcances de un precepto constitucional. Sin embargo, aunque estos desacuerdos no sean inevitables, sí pueden partir de ciertas premisas que coadyuven a la efectiva tutela de los derechos de la persona. Por ejemplo, en un conocido texto, Laurence Tribe y Michael Dorf se refieren a la forma de cómo *no debe* ser interpretada una constitución.

Estos autores parten por descartar, en el ámbito de los derechos, el uso de tesis originalistas, esto es, de aquellas posturas que consideran la posición asumida por los redactores del texto como absoluta.

Sostienen, por ello, que “incluso suponiendo que los Primeros Autores pensarán que la Constitución debiera ser la piedra de toque de la interpretación constitucional, no puede entenderse que la Constitución deba ser interpretada de forma tal que sólo se refiera a los temas que existieron doscientos años atrás”²⁶.

56. Esta interpretación es especialmente sensible cuando lo que se discuten son derechos de las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar la Convención, ha señalado “que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”²⁷.

Esta tendencia de entender los instrumentos de protección de conformidad con el contexto histórico también ha sido resaltada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este órgano regional ha destacado que el Convenio Europeo es un instrumento vivo que debe ser entendido en virtud de las condiciones actuales.

²⁶ Tribe, Laurence y Dorf, Michael (2010). Interpretando la Constitución. Lima: Palestra Editores, pp. 44 y 45

²⁷ Corte IDH. Opinión Consultiva 16/99 de 1 de octubre de 1999, fundamento 114.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA


SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA

MARÍA FRANCISCA ALJOVIN DE LOSADA

Este criterio no es reciente en la jurisprudencia de este tribunal internacional, ya que se remonta al año 1978, en virtud de lo resuelto en el *caso Tyrer vs. Reino Unido*, y se ha consolidado en diversos casos posteriores.

De esta manera, los principales tribunales regionales de interpretación de los derechos coinciden en señalar que los textos de derechos humanos no deben ser entendidos en el contexto en que fueron aprobados, sino que se trata de libertades que se transforman con el tiempo y conforme a las necesidades existentes en cada momento histórico.

57. De similar forma, en el voto que emití en la STC 06040-2015-PA, recordé que, en el ámbito del derecho constitucional comparado, también se ha reconocido la doctrina de la interpretación evolutiva. Así,



la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido que la interpretación evolutiva implica que "en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible a la luz de la Constitución [...] un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada norma" [Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-577/11, párr. 4.4.3.2]. Del mismo modo, en su histórica sentencia *Brown vs. Board of Education*, la Corte Suprema de Estados Unidos, al examinar la cuestión relacionada con la segregación racial, afirmó que "para acercarse a este problema, no podemos retroceder el reloj hasta 1868, fecha en la que la enmienda fue adoptada, o incluso a 1896, momento en el que fue escrita *Plessy vs. Ferguson*. Debemos analizar la educación pública a la luz de su desarrollo y su lugar en la vida americana" [Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. *Brown Board vs. Education*. 347 U.S. 492 (1953)]. Por su parte, el Tribunal Constitucional de España ha señalado que la lectura evolutiva de la Constitución implica que "la cultura jurídica no se construye sólo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración la observación de la realidad social jurídicamente relevante" [Tribunal Constitucional de España. STC 198/2012, FJ 9]. Finalmente, la Corte Suprema de Canadá ha sido enfática en reconocer que "el razonamiento según la idea de conceptos estáticos (*frozen concepts*) va en contra de uno de los principios más fundamentales de la interpretación constitucional canadiense: que la Constitución es un árbol vivo que, por vía de la interpretación progresiva, se acomoda y se ocupa de las realidades de la vida moderna" [Corte Suprema de Canadá (2004) 3 S.C.R. 698].

58. De esta modo, la interpretación evolutiva es un método que encuentra amplio respaldo en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Constitucional Comparado. Su uso en escenarios como este resulta indispensable, y ello en la medida en que permite resolver dilemas que no se encontraban en la mente de los constituyentes.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA

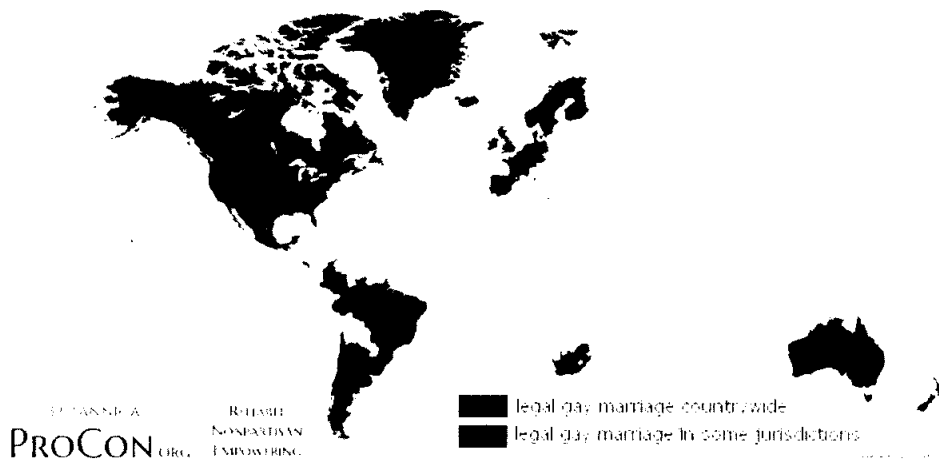
MARÍA FRANCISCA ALJOVÍN DE LOSADA

La sentencia suscrita por los magistrados Blume, Sardón, Ferrero y Miranda, en mayoría del Tribunal Constitucional trata de perpetuar un concepto de matrimonio y no examina el argumento relativo a que se trata de confrontar un problema histórico de exclusión de conformidad con los estándares existentes en el ámbito del Derecho Internacional.

Esta notoria tendencia, cada vez más notoria en América y en Europa, se puede ver reflejada en el siguiente cuadro, el cual fue elaborado por la organización benéfica Procon:

Gay Marriage around the World

Countries with Legal Gay Marriage



59. Desde el año 2001 hasta la fecha, ya son 30 países los que han implementado el derecho a que la institución del matrimonio también pueda extenderse a favor de las parejas del mismo sexo. El cuadro también refleja que esta tendencia es particularmente fuerte en los países de Europa y América.

60. Como ya se ha examinado, es posible concluir que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos comparten la tesis relativa a que las uniones entre parejas del mismo sexo merecen ser reconocidas por parte de los Estados.

La diferencia entre ambos tribunales regionales radica en que, mientras para el primero esta unión puede que sea amparada por figuras o instituciones distintas a la del matrimonio, la segunda considera que la única forma de no vulnerar el principio de igualdad sería otorgando a todas las parejas la posibilidad de acceder a dicha



institución, ya que optar por otra solución sería emplear una forma contemporánea de la conocida doctrina “separados, pero iguales”.

61. Sobre ello, considero que no permitir el acceso a una institución únicamente considerando la orientación sexual es un notorio caso de discriminación. Sobre ello, la Corte Constitucional de Austria ha señalado que “[e]l efecto discriminatorio resultante se refleja en que debido a los diferentes términos utilizados para designar el estado civil de una persona ('casado' vs. 'conviviente'), las personas que viven en una relación con una pareja del mismo sexo tienen que revelar su orientación sexual incluso en situaciones en las que no tiene ni debe tener ninguna importancia y, especialmente en el contexto histórico de este problema, corren el riesgo de ser discriminadas²⁸.

62. Es importante recordar que el reconocimiento que, eventualmente, puedan hacer organismos internacionales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo tendrá un importante efecto al interior de los Estados, y ello no necesariamente porque conduzca a su inmediata implementación en virtud de un mandato judicial, sino porque visibiliza la problemática e incentiva el debate sobre esta posibilidad en el plano interno.

En esta clase de casos, los cambios normativos suelen tener importantes repercusiones a nivel social, ya que la ley en muchas oportunidades puede ser determinante para eliminar estigmas o prejuicios que puedan existir al interior de la sociedad. De hecho, existen diversos estudios que demuestran que, en aquellos países en los que se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, aumentaron los niveles de tolerancia en relación con las personas que integran estos colectivos.

De similar forma, disminuyó la desaprobación de lo que implica la homosexualidad y se empezaron a notar cambios sobre la percepción de lo que ella supone²⁹.

iii) *La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional no advierte que, cuando las normas constitucionales e internacionales pueden ser concurrentes en su aplicación en un caso, se debe aplicar aquella que más favorezca los derechos de la persona*

63. Finalmente, deseo referirme al hecho de que, aun asumiendo que podría existir una aparente contradicción entre las cláusulas constitucionales e internacionales, se debería seleccionar la norma que más favorezca el ejercicio de los derechos de la persona, en virtud del principio interpretativo *pro personae*.

²⁸ Corte Constitucional de Austria. Sentencia de 4 de diciembre de 2017

²⁹ Ketola, Kimmo y Helander, Eila (2020) Same-sex Marriage and the Lutheran Church in Finland: How rapid changes in norms and values challenges the church and its decision-making. Z Religion Ges Polit, Núm. 4, p. 319



En efecto, si es que asumiéramos, como lo hace la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, que nuestra Constitución no incorpora o deja abierta la posibilidad para que se regule el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces se podría destacar la existencia de una aparente contradicción entre nuestra norma fundamental y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional que, según ha entendido la Corte Interamericana, protege el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

En efecto, el proyecto suscrito por la mayoría simplemente ha decidido ignorar lo dispuesto en el artículo VIII del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual establece lo siguiente:

Artículo VIII. Interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.

64. Así, según el denominado “Nuevo Código”, los tribunales internos, cuando advierten una contradicción entre la Constitución y los tratados suscritos por el Estado peruano, no otorgan automáticamente prevalencia a uno de estos documentos.

En esta clase de casos, la autoridad jurisdiccional debe aplicar la disposición que reconozca en términos más amplios los derechos de la persona. Se trata de un criterio de resolución de tensiones entre cláusulas internas e internacionales que, de hecho, también se encuentra reconocido en la propia Convención Americana.


Según el artículo 29.b de este tratado, ningún derecho debe ser interpretado en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados [...]”. Se desprende, por ello, que para la propia Convención debe prevalecer el ordenamiento estatal si es que reconoce en términos más generosos el contenido de uno de los derechos contenidos en el referido tratado internacional.

65. La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional también ignora esto. Simplemente procede a desconocer las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, como si se tratara de un ordenamiento ajeno al nuestro.



De esta manera, si se asumiera que nuestra Constitución no reconociera, desde ningún punto de vista, el derecho al matrimonio igualitario, no se podría desconocer que la Convención Americana sí lo hace. Por ello, existiría, en la lógica de la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, una aparente contradicción entre disposiciones.

De conformidad con el artículo VIII, debería examinarse cuál de estas dos posiciones favorece en mejor medida los derechos de la persona. Y esto no en virtud ya de lo que establece el propio Derecho Internacional, sino por mandato expreso del legislador democrático. Sin embargo, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, claramente con el propósito de evitar alguna clase de debate en el que se resalte su posición ajena a esta clase de uniones, no aborda tampoco este punto.



66. De similar forma, se aparta de una importante tendencia que, tanto en Europa como en América, reconoce el matrimonio igualitario. Deseo referirme a este último punto con un particular énfasis, ya que ello me permitirá demostrar que el Perú no solo está vulnerando recurrentemente los derechos de las personas que integran relaciones homoafectivas, sino que también ignora el desarrollo que, en otros países, está adquiriendo esta institución.

iv) **El matrimonio igualitario en el Derecho Constitucional Comparado**

67. La figura del matrimonio igualitario se remonta al año 2001, época en la cual los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en regular esta figura jurídica. Este no fue, sin embargo, un camino sencillo y ajeno a los obstáculos. Su aprobación obedeció a distintos debates e informes elaborados por académicos.

Entre estos documentos, es importante citar el histórico informe del Comité Kortmann, elaborado en octubre de 1997, el cual recomendaba la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, al mismo tiempo que desestima los argumentos en su contra. En particular, precisó que la cuestión de un posible efecto negativo sobre el matrimonio heterosexual aplica para una parte cada vez menor de la sociedad, la cual, en todo caso, podía seguir identificándose con un matrimonio desde la perspectiva de la Iglesia. Sin embargo, el gobierno se opuso a la introducción de esta figura.

Con posterioridad, específicamente en el año 2000, se presentó en el Parlamento el proyecto de ley que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, el cual fue aprobado en septiembre por la Cámara de Representantes y en diciembre por el Senado. De esta manera, el 1 de abril de 2001, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en permitir a parejas del mismo sexo casarse, otorgándoles acceso a una institución que tradicionalmente estaba disponible solo a parejas de diferente sexo³⁰.

³⁰ Información extraída de: Trandafir, Micea (2014). The effect of same-sex marriage laws on different-sex marriage: Evidence from the Netherlands. Demography. Duke University Press, Vol. 51, Núm. 1



68. La segunda experiencia en la que se reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo se presentó en Bélgica, concretamente en el año 2003. En aquel momento, existía un intenso debate en ese país a propósito de la fórmula para tutelar los derechos de las parejas del mismo sexo. Se había planteado, como alternativa, la posibilidad de una unión no matrimonial. Sin embargo, la ley de 13 de febrero de 2003 apertura la institución del matrimonio para parejas del mismo sexo, y no hace ninguna distinción entre “matrimonios homosexuales” y “matrimonios heterosexuales”. Se consideró que crear una figura distinta, aunque ella otorgara los mismos derechos que el matrimonio, hubiera sido una forma contemporánea de la doctrina “separados pero iguales”, que permitió que se discriminara en función de la raza en los Estados Unidos³¹.

Otro país escandinavo que ha reconocido el matrimonio igualitario es Islandia, país que incorporó este derecho en el año 2010. De hecho, es uno de los casos que ha suscitado mayor atención, ya que la primera ministra islandesa de aquella época, Johanna Sigurdardottir, había declarado públicamente su orientación sexual, lo cual ha permitido una mayor visibilización de estas uniones.

69. En el caso de Noruega, en el año 2009 se expidió la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. De forma novedosa, se expidieron diversas regulaciones que no solo permitieron la adopción a favor de estas parejas, sino que, por ejemplo, también reconocieron el derecho a las parejas lesbianas de ser asesoradas para los procedimientos de inseminación artificial patrocinados por el Estado, y otorgó la co-maternidad a la cónyuge de la madre biológica.

También se incorporaron preceptos sobre las relaciones entre las creencias religiosas con el Estado, y a los ministros y sacerdotes se les otorgó el derecho, mas no la obligación, de realizar ceremonias de boda para parejas del mismo sexo.

Ahora bien, el caso de Suecia, también de 2009, es importante de considerar, ya que, al igual que en Noruega, existieron diversas discusiones con las iglesias respectivas sobre la posibilidad que se celebren ceremonias en las que se realicen matrimonios entre estas parejas. Sin embargo, la ventaja en relación con el contexto noruega era que, en este país, las relaciones entre la Iglesia y el Estado no eran tan profundas, por lo que no fue excesivamente problemático su incorporación.

70. Un caso llamativo fue el de Portugal. En este país, mediante Decreto N° 9/XI de la Asamblea General, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el Presidente de la República solicitó, de conformidad con la Ley de Organización, Funcionamiento y Procedimiento del Tribunal Constitucional, que este órgano determine, en una inspección preventiva, la compatibilidad del matrimonio igualitario con la Constitución. Por ello, la Corte Constitucional, a través del Proceso

³¹Swennen, Frederick (2011). National Report: Belgium. Journal of Gender, Social Policy & the Law, Vol. 19, Núm. 1, p. 66



nº 192/2010, resolvió que tal regulación no resultaba incompatible con la Constitución de ese país, lo cual terminó por validar legalmente esta clase de uniones.

71. En Argentina, la Ley 26618 modificó diversos preceptos del Código Civil con la finalidad de incorporar el matrimonio igualitario. De esta manera, a través de la enmienda del artículo 172 de dicho cuerpo normativo, se resaltó que es indispensable “para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

De forma previa a la expedición de esta ley, el Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo N° 15 (Expediente 34292-0), de la Ciudad de Buenos Aires, había sostenido que el referido artículo 172 era inconstitucional en la medida en que no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

72. Una mención aparte merece el caso danés. Si bien no fue el primer país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario, sí lo fue en cuanto al reconocimiento de los derechos de parejas cuyos integrantes eran del mismo sexo. Así, en 1989, a través de la *Danish Registered Partnership Act* (de 1 de junio de 1989), se implementó la *registreret partnerskab*, una suerte de registro de uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

El ejemplo danés fue relevante, ya que inició diversas discusiones en varios países europeos sobre la viabilidad en cuanto a la implementación de esta clase de figuras. Esta ley otorgaba a las parejas del mismo sexo varios derechos de los que ya gozaban las parejas heterosexuales, con excepción de la posibilidad de adoptar niños y el hecho que estas uniones no eran reconocidas por la Iglesia Luterana estatal³². Para el año 2012, ya se reconoció en este país el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

73. En el caso mexicano, en el amparo en revisión 581/2012 se reconoció que resulta discriminatorio el impedir que las parejas del mismo sexo accedan a la institución del matrimonio. De similar manera, la Tesis Jurisprudencial 43/2015 (10.a) precisó que la ley de cualquier entidad federativa “que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Hasta este año, 26 de las 32 entidades federativas han incorporado esta institución.

74. En Francia, en febrero del año 2013 la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que reconocía el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el cual fue confirmado por el Senado, aunque con modificaciones, en abril de ese mismo año. Diversos

³²cfr. Wilson, Adrienne (1991). Same-sex Marriage: A Review. William Mitchell Law Review, Vol 17. Núm. 2, p. 540



legisladores estimaron que esta normatividad era contraria a la Constitución de 1958, por lo que elevaron un recurso que fue examinado por el Consejo Constitucional.

Este órgano resolvió el caso, y sostuvo que, abriendo el acceso de la institución del matrimonio a las parejas compuestas por personas del mismo sexo, el legislador ha estimado que la diferencia entre las parejas formadas por un hombre y una mujer y las parejas de personas del mismo sexo no justifica más que estas últimas no puedan acceder al estatuto y a la protección jurídica vinculados con el matrimonio; por lo que no correspondía al Consejo constitucional sustituir con su apreciación a la realizada por el legislador³³.

75. En el año 2013, Uruguay también se unió al grupo de países que han reconocido las uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo. Así, a través de la Ley 19075, de Matrimonio Igualitario, se reconoció en el artículo 83 del Código Civil que el “matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo”.

En ese mismo año, en Nueva Zelanda se aprueba la *Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act*, la cual incorpora las modificaciones legislativas pertinentes para hacer operativo el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el año siguiente, Luxemburgo se uniría al grupo de países que aprobaron leyes sobre esta clase de uniones.

En 18 de junio de 2014 se votó en la Cámara de Diputados esta propuesta. La votación final se produjo el 18 de junio de este mismo año, la cual, además de reconocer el matrimonio igualitario, incorpora otras reformas en relación con la edad legal para contraer matrimonio y, además, suprimió la obligatoriedad de los denominados exámenes prenupciales.

76. Otro de los casos paradigmáticos en este recuento es el de Irlanda. Este país se convirtió en el primero en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario a través del referéndum, lo cual ocurrió en el año 2015.

El 17 de febrero de 2016, Finlandia se uniría al grupo de países que incorporaron en su legislación el matrimonio entre personas del mismo sexo, y abolió la anterior ley que permitía uniones no matrimoniales en esta clase de escenarios. Este fue, por lo general, un caso muy recurrente en varios países: primero se reconocía una figura similar a la del matrimonio, y, con posterioridad, se aprobaba una ley que, de forma específica, concedía el derecho al matrimonio a las parejas que son del mismo sexo.

En el año 2017, Malta -un país predominantemente católico en el que el divorcio fue ilegal hasta el año 2011- también se incorporó a este grupo de países. En dicho ordenamiento se preveía la posibilidad de la unión civil entre personas del mismo sexo desde el año 2014. También en el año 2017, en Alemania se agregó un nuevo párrafo al Código Civil del año 2002, y se dispuso que el matrimonio “es contraído

³³ Consejo Constitucional de Francia. Sentencia n° 2013-669-DC, de 17 de mayo de 2013, fundamento 22



por dos personas de diferente o del mismo sexo, para toda la vida”. Se habilitó la posibilidad que aquellas parejas que se encontraban en una figura análoga a lo que sería la unión civil podían convertir su sociedad en un matrimonio.

En Australia, se actualizó la *Marriage Act* de 1961 con el propósito de precisarse que esta institución es la unión de dos personas, con la exclusión de todas las demás, constituida voluntariamente y que es de por vida. No fue una reforma expedida en un contexto aislado, ya que, a nivel federal, desde el año 2008 se habían impulsado un grupo de normas que pretendían brindar igualdad de derechos y responsabilidades a las parejas del mismo sexo en áreas como la seguridad social, el empleo, los impuestos y la jubilación.

77. En el caso del Reino Unido, en el año 2013 el Parlamento aprobó la *Marriage Act (same sex couples)*, la cual introdujo el matrimonio entre personas del mismo sexo para Inglaterra y Gales. Se permitió, como en el caso de Alemania, que las parejas puedan convertir su unión civil en matrimonio, y a las personas transexuales a cambiar su género sin tener que terminar su matrimonio existente.

En Escocia también se legalizó esta clase de uniones. Con la implementación del matrimonio en Irlanda del Norte en el año 2020, los países que integran el Reino Unido reconocieron de forma plena esta institución.

En el caso de este último, existieron diversas resistencias para su implementación. El *Law Reform Advisory Committee* de Irlanda del Norte sostuvo que la legislación existente hasta ese entonces era obsoleta y probablemente discriminatoria. En respuesta a una pregunta de la Asamblea dirigida al Poder Ejecutivo, este confirmó que, para el año 2012, no existían planes para la introducción del matrimonio igualitario. No fue, pues, una experiencia sencilla³⁴.

78. En lo que ha transcurrido del año 2022, dos países han reconocido el matrimonio igualitario.

En el caso de Chile, la Ley 21400 modificó diversos cuerpos normativos con la finalidad de regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre otras cosas, se dispuso que las “leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones marido y mujer, marido o mujer, se entenderán aplicables a todos los cónyuges, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género”.

En Suiza, se celebró un referendun con la finalidad de discutir la incorporación del matrimonio igualitario en ese país. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, aproximadamente el 64% de los votantes aprobaron la propuesta.

³⁴ La información sobre la situación del Reino Unido se puede consultar a detalle en: Fairbairn, Catherine; Lyall, Heather y Campbell, Jane (2014) .Marriage of same-sex couples across the UK. Research Paper 54/14. Londres: House of Commons



Es importante agregar que, en el año 2005, aproximadamente el 58% de los votantes también se habían mostrado a favor de incorporar la institución de la unión civil para las parejas del mismo sexo, lo cual demuestra la tradición, bastante consolidada en Suiza, de someter a consulta asuntos que suelen ser sensibles en diversas sociedades.

79. De todo ello es posible advertir no solo que, cada vez en mayor medida, diversos países han incorporado el matrimonio igualitario. También se debe destacar que no todos ellos siguieron un camino similar. En algunos de ellos, que eran más abiertos a la deliberación de esta clase de asuntos, la aprobación definitiva se dio por el parlamento respectivo.

En otras experiencias, ante la inacción legislativa, se tuvo que acudir a los tribunales de justicia.

Finalmente, con los casos de Irlanda y Suiza, se demuestra que también es posible discutir esta clase de asuntos a través de la convocatoria a referéndum. Este último método, al menos en nuestro ordenamiento, sería ciertamente más problemático, ya que cuestiones vinculadas con la posible restricción de derechos fundamentales no pueden ser sometidas a consulta popular.

80. En todo caso, deseaba destacar que no existe una fórmula única de reconocimiento del matrimonio igualitario. En el siguiente apartado, destacaré las razones por las cuales, en el ordenamiento peruano, ello debería ser realizado por el Tribunal Constitucional.

v) La necesidad de interpretar el Código Civil a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales

81. Expuesto todo el contexto precedente, deseo referirme a las disposiciones del Código Civil que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero, y si es que estas son o no compatibles con la Constitución.

82. En la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, la mayoría del Tribunal señala que, en relación con la opinión consultiva que reconoce el derecho al matrimonio entre las parejas del mismo sexo, “Costa Rica no le pidió a la Corte Interamericana que legislara sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica ni menos en todos los países del hemisferio, incluso en los que no han suscrito el Pacto de San Jose”. Para sustentar esta afirmación, se refieren al voto singular del juez Eduardo Vio Grossi, que acompaña dicha opinión consultiva, y según el cual

la opinión consultiva no es vinculante para los Estados Parte de la Convención ni para los otros miembros de la Organización de los Estados Americanos, por lo que no procede que ordene la adopción de alguna conducta. (...) La competencia no contenciosa o consultiva de la Corte no consiste, entonces, en ordenar o disponer sino más bien convencer.



83. Así, pese a que la mayoría de magistrados considera en la sentencia suscrita que el sistema interamericano estaría “ideologizado”, lo cierto es que el uso de esta clase de argumentos solo demuestra que quienes tratan de reflejar sus preferencias personales en las decisiones judiciales son, precisamente, los que han aceptado el texto de la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, ya que se refieren a las opiniones de los jueces de la Corte Interamericana solo cuando esta es compatible con su forma de entender las uniones entre parejas del mismo sexo. En efecto, la decisión aprobada por la mayoría de los integrantes del tribunal regional, y que reconoce que es un deber de los Estados el incorporar el matrimonio entre personas del mismo sexo, es inobservada por argumentos meramente formalistas en la sentencia suscrita por la mayoría.

84. En efecto, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional sostiene que la opinión consultiva

constituyó un exceso evidente de los seis jueces que la suscribieron. Cuatro años después de emitida, podemos constatar que ninguno de los treinticuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos -a los que estaba dirigido su supuesto mandato- le ha hecho caso, salvo Ecuador, que es la excepción que confirma la regla. Ciertamente, algunos otros países americanos han reconocido el “matrimonio igualitario”, pero lo han hecho por decisión de sus órganos de gobierno, no en acatamiento del supuesto mandato de la Corte Interamericana. El Perú no tiene, pues, por qué sentirse obligado por una opinión consultiva que jamás solicitó.

85. De esta manera, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional minimiza los importantes avances en la región americana señalando que estos no fueron producto del pronunciamiento de la Corte Interamericana, sino que fue una iniciativa de los propios Estados en sus respectivos ordenamientos.

Ahora bien, es importante recordar que, según se advirtió en el repaso histórico sobre la regulación del matrimonio igualitario, para la fecha en que la Corte Interamericana publica su sentencia (esto es, para el mes de noviembre del año 2017), los países americanos de Canadá (2005), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), México (2015) y Colombia (2016) ya contaban con el matrimonio igualitario. Sobre estos países, indudablemente, la Corte no tiene nada que agregar, ya que, en principio, estas regulaciones resultarían compatibles con la Convención.

86. Ahora bien, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional señala, de forma errada, que solo en Ecuador se ha implementado el matrimonio igualitario en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se evade, de esta manera, los casos de Costa Rica y de Chile.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA
MARÍA FRANCISCA ALJOVÍN DE LOSADA

En el caso del primer país, como ya se ha señalado, la Corte Suprema ha reconocido este derecho y se ha referido, en su pronunciamiento, a la opinión consultiva de la Corte.

En el caso chileno, si bien la modificación se ha hecho a través de una ley, lo cierto es que, como se conoce, los diversos cambios que empezaron a implementarse en este país en temas de orientación sexual tienen como antecedente la sentencia de *Atala Riffo y otras vs. Chile*, pronunciamiento histórico en el que el tribunal interamericano reconoce que el principio de no discriminación también debe extenderse para los casos de la orientación sexual. Por lo demás, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional hace depender la solidez de los argumentos de la Corte Interamericana que sustentan el matrimonio entre parejas del mismo sexo de lo que hayan implementado los Estados en los respectivos ordenamientos internos a propósito del pronunciamiento, pero una vez más evade los notorios avances existentes en la región sobre este punto.

87. En todo caso, como sostuve en mi voto conjunto con el magistrado Ramos Núñez en la STC 01739-2018-PA,

las opiniones consultivas constituyen pronunciamientos de necesaria revisión por los operadores de justicia, ya que permiten a los distintos actores nacionales la adopción de todas aquellas medidas que estimen pertinentes para evitar un posible caso en el que se genere la responsabilidad internacional del Estado. Por otro lado, como se expuso supra, en la medida en que las autoridades nacionales deben adoptar todas aquellas medidas orientadas a garantizar, en lo posible, el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, es indispensable que los criterios expuestos en las opiniones consultivas no sean simples aspiraciones programáticas, sino que sean parámetros que sean tomados en serio por parte de los operadores jurisdiccionales³⁵.

88. Por otro lado, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional se refiere a aspectos que no guardan ninguna relación con el debate sobre el matrimonio igualitario, y que, nuevamente, solo reflejan los prejuicios y preferencias personales de los magistrados (Blume, Sardón, Ferrero y Miranda) que han suscrito la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional.

La oposición, de esta manera, más que al criterio de la Corte parece direccionarse a la institución en sí misma. Así, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional trata de plasmar las disconformidades personales de los magistrados antes que una interpretación de la Constitución que sea abierta al ordenamiento internacional. Por ello, en la sentencia se señala que

[a] soslayar la relación de los jueces y de los miembros de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana con sus países de origen y enfatizar que son elegidos con base en su "alta autoridad moral", la Convención Americana abona el terreno para la

³⁵ Voto conjunto de los magistrados Ramos Núñez y Ledesma Narváez en el expediente 01739-2018-PA, fundamento 119.



ideologización del sistema interamericano de derechos humanos. Por definición, la moral es problemática y los dilemas que trata de resolver no admiten soluciones únicas o finales. Siempre caben nuevas perspectivas para analizar los dilemas morales. En una perspectiva pluralista y tolerante, no existen *expertos morales*.

89. La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional señala, así, que como la moral es problemática y acarrea diversos dilemas, no es posible adoptar una decisión sobre la viabilidad constitucional del matrimonio igualitario. Al respecto, debo manifestar mi preocupación y lamento de que jueces de una corte como el Tribunal Constitucional profieran expresiones de este tipo, las cuales solo pretenden descalificar a las personas que no piensan como ellos. Además, es extremadamente grave que, bajo argumentos de una supuesta “superioridad moral”, se pretenda alejar a los organismos internacionales de posibles vulneraciones de derechos humanos.

Como bien ha referido el Comité de Derechos Humanos en el caso *Toonen vs. Australia*, paradigmático por reconocer que la discriminación no se puede realizar en función de la orientación sexual,

“[e]l Comité no puede aceptar que, a los fines del artículo 17 del Pacto, las cuestiones de moral constituyan exclusivamente un asunto de preocupación para el país en cuestión, ya que ello permitiría que se eliminase de la lista de asuntos que ha de examinar el Comité un número potencialmente grande de leyes que representan una injerencia en la vida privada”³⁶.

90. En consecuencia, el filtro que ha establecido la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional suscrita por la mayoría de magistrados es que solamente se tutelarán aquellas posiciones jurídicas que no perturben el orden de creencias morales de los magistrados. Ellos, de esta manera, justamente se arrojan gozar de una “moralidad superior”, ya que deciden qué aspectos deben ser reconocidos por el ordenamiento y cuáles no, independientemente de lo que se haya señalado en el ámbito internacional y comparado.

91. Ahora bien, precisado lo anterior, surge la interrogante respecto de la forma en que deben ser interpretadas las cláusulas del Código Civil que, según la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, no permitirían el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en el ordenamiento peruano. En el proyecto suscrito por la mayoría, se señala que, de conformidad con el artículo 2050 del Libro X, Derecho Internacional Privado, del Código Civil,

Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Perú, *en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres* [énfasis añadido].

³⁶Comité de Derechos Humanos. *Toonen vs. Australia*. Comunicación No. 488/1992, fundamento 8.6



92. La interpretación planteada por la mayoría del Tribunal estima que, en virtud de dicha disposición legal, no debe permitirse el reconocimiento, en el territorio peruano, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque estos hayan sido válidamente realizados en el extranjero. Ya he enfatizado en este voto que el hecho de ignorar los constantes avances en relación con la regulación de los derechos de las parejas del mismo sexo solo es una estrategia para seguir postergando esta clase de reclamos. Sin embargo, a ello debo añadir que, si se acepta la tesis planteada por la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, simplemente se decidiría no resolver el problema planteado ante este Tribunal y taparse los ojos frente a un problema que involucra la vida personal de dos seres humanos. En este punto, estimo necesario referirme a lo que ha señalado la Corte Suprema de Estados Unidos, entidad que, al analizar esta clase de reclamos, sostuvo que

el Estado hace del matrimonio algo más valioso por el significado que le otorga, por lo que la exclusión de sus estatus tiene el efecto de mostrar que los gays y lesbianas son desiguales en importantes aspectos. Degrada a gays y lesbianas para el Estado por dejarles fuera de una institución central de la sociedad de la nación³⁷.

93. En efecto, que el Estado peruano decida ignorar esta clase de solicitudes solo ocasionaría que, para la ciudadanía en general, existan ciudadanos y ciudadanas de segunda clase, cuyas legítimas aspiraciones y proyectos de vida no deberían ser atendidos. Puedo afirmar que, incluso, no me estoy refiriendo de forma específica a si el legislador peruano deba regular esta clase de matrimonios o no. Solo deseo precisar que, cuando esta unión ya ha sido aceptada en otro ordenamiento, y ella es compatible con los estándares existentes en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es sumamente grave que un Estado decida ignorar este hecho y, de esta manera, proceda a relegar a este grupo de personas a una condición inferior. Como bien ha sostenido la Corte Constitucional de Colombia,

el principio democrático no puede avalar “un consenso mayoritario que relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría” y que el principio de igualdad se opona, de manera radical, a que a través de la ley, por razones de orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparte los gustos, hábitos y prácticas sexuales de la mayoría”. Fuera de la aproximación a la homosexualidad desde la perspectiva de la persona individual y desde el punto de vista del grupo minoritario tradicionalmente desprotegido, últimamente se ha afianzado en la jurisprudencia la consideración de la pareja integrada por personas del mismo sexo. “puesto que hoy, junto a la pareja heterosexual, existen -y constituyen opciones válidas a la luz del ordenamiento superior- parejas homosexuales”, cuya efectiva existencia supone, como en el caso de la pareja heterosexual, “una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de permanencia³⁸”.

³⁷ Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. Caso Obergefell vs. Hodges. La cita se encuentra en: Delgado, David (2017). Obergefell contra Hodges: La sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. UNED. Revista de Derecho Político, N° 99, p. 346

³⁸ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-577/11



94. No advierto, en todo caso, la existencia de alguna finalidad constitucional detrás de la restricción consistente no ya en la introducción directa en nuestro ordenamiento de la posibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, sino en relación con la imposibilidad de que un matrimonio válidamente celebrado en el extranjero sea reconocido solo porque dos personas del mismo sexo participaron en él. En todo caso, los argumentos que suelen emplearse en contra de las uniones entre parejas del mismo sexo carecen de asidero en el seno de un Estado Constitucional. Tal y como ha referido la Corte Constitucional de Ecuador en el pronunciamiento que reconoció el matrimonio igualitario,

[a]lgunas personas consideran que hay que prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo porque son anomalías, riesgos sociales, disfuncionalidades, trastornos psico-patológicos. Por éstas, el matrimonio de parejas del mismo sexo desestructurarían el núcleo familiar y, por tanto, conviene la exclusión. A juicio de la Corte Constitucional estos fines no podrían ser aceptables por dos razones. Primero, estas concepciones han sido superadas por la ciencia. En 1991, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su clasificación de enfermedades.²¹ Segundo, estas formas de concebir a las identidades diversas desconocen el derecho de las personas a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la igualdad y no discriminación³⁹.

95. Por otro lado, no se advierte que esta restricción esté orientada a la protección de derechos de terceros, los cuales no se ven perjudicados con la posibilidad que se permita el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo que se hayan celebrado en el extranjero. Tampoco incide en las creencias religiosas de las personas o en su forma de entender el mundo.

No existe, por ello, alguna finalidad constitucional que justifique la interpretación efectuada por la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional. Como bien ha señalado la Corte Constitucional de Portugal:

parece claro que la concesión del derecho al matrimonio a personas del mismo sexo no afecta la libertad de las personas de distinto sexo para contraer matrimonio, ni altera los deberes y derechos que de él se derivan y la representación o imagen que ellos o la comunidad pueden atribuir a su estado civil. A menos, por supuesto, que la pérdida del valor simbólico del matrimonio en general se atribuya a la circunstancia de que ahora este estatus podría compartirse con parejas de orientación homosexual. Una concepción que estaría basada en una razón constitucionalmente ilegítima⁴⁰.

96. En el caso peruano, no existe ninguna figura legal que ampare los derechos de las parejas del mismo sexo. Las propuestas que se iniciaron para que ello ocurra han culminado en archivamientos.

³⁹Corte Constitucional de Ecuador. Caso N° 11-18-CN, fundamento 91

⁴⁰Corte Constitucional de Portugal. Processo n.º 192/2010, fundamento 24



Desde el año 1993, se han presentado proyectos que no han prosperado, y cada uno de ellos con propuestas diferentes. Así, Julio Castro Gómez, representante de la Izquierda Democrática, planteó en ese año que se reconozca a las parejas del mismo sexo derechos similares a los que surgían del matrimonio. Del mismo modo, en el año 2003 la congresista Martha Moyano presentó el proyecto de ley 09371/2003-CR, que establecía uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Se requería, para ello, que la pareja hubiese convivido al menos durante un año y tener un domicilio legal en el Perú. Sin embargo, se establecía como importante restricción la imposibilidad de adoptar niños.

Finalmente, para el año 2017 se planteó la posibilidad del reconocimiento del matrimonio igualitario a través del proyecto de ley N° 961/2016-CR, a través del cual se proponía reconocer al matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella”. De similar forma, este proyecto tampoco se aprobó por parte del Pleno del Congreso.

97. Se demuestra, en consecuencia, que pese a que han existido diversas oportunidades en las que se planteó la posibilidad de reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, ninguna de las alternativas planteadas ha sido aceptada. Ni el matrimonio ni la unión civil han sido consideradas propuestas viables para nuestros legisladores.

Esto ha ocurrido desde el primer proyecto presentado en el año 1993. Por ello, es posible afirmar que, pese a que han transcurrido casi 30 años desde esa fecha, no se ha aprobado ningún solo proyecto que pretenda reconocer algún derecho a las parejas del mismo sexo.

98. Al respecto, existen dos importantes foros a través de los cuales se puede obtener el reconocimiento de ciertos derechos: el político (a través, por ejemplo, de leyes expedidas por los órganos legislativos) y el judicial (mediante el reconocimiento en un fallo de una alta corte nacional).

En una interesante investigación del año 2020, se indicaba que, de 29 países del mundo que habían introducido el matrimonio igualitario, 22 lo habían hecho mediante legislación, 4 países mediante decisiones judiciales y 2 por una mezcla entre decisiones judiciales y legislación (Taiwán y Australia).

Se reflejaba en este trabajo que, por lo general, los Estados se enfrentarán al problema relativo al procedimiento de toma de decisiones para este asunto, por lo que deben decidir si esta clase de situaciones se resolverán en el foro judicial, el legislativo, o, inclusive, el popular. Como se señaló, el ejemplo irlandés puede ser tomado en cuenta como un modelo viable, el cual ciertamente, dependerá de la madurez cívica de cada país⁴¹.

⁴¹ Doyle, Oran (2020). Minority Rights and Democratic consensus: The Irish Same-Sex Marriage. National Taiwan University Law Review, Vol. 15, Núm. 1, p. 45



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA
MARÍA FRANCISCA ALJOVÍN DE LOSADA

99. En el Perú, es posible estimar que la vía política no se encuentra en condiciones de reconocer este derecho. Todas las propuestas planteadas han sido archivadas y no ha existido, a la fecha, un debate serio en el Congreso de la República sobre la posibilidad de su incorporación. Del mismo modo, ha transcurrido un tiempo más que razonable para que el órgano legislativo adopte alguna decisión sobre la situación de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, ninguna alternativa ha sido entendida como válida, y ello, después del tiempo transcurrido, habilita a los tribunales de justicia a intervenir con el propósito de evitar que estos escenarios de discriminación se perpetúen en el tiempo.

100. Soy consciente que, en un Estado Constitucional, el primer llamado a configurar el contenido de los derechos fundamentales es el legislador democrático. Sin embargo, también advierto que no en todos los escenarios los órganos políticos estarán dispuestos a tutelar derechos de los grupos minoritarios, ya que el accionar de aquellos suele obedecer a lógicas de carácter mayoritario.

Es en esta clase de casos de desprotección en los que deben intervenir los tribunales de justicia. Un órgano como el Tribunal Constitucional no puede permanecer indiferente frente a las recurrentes vulneraciones de derechos derivadas del no reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo.

Esto, según entiendo, legitima al Tribunal Constitucional a reconocer las uniones celebradas en el extranjero, y a exhortar a que esta institución también sea habilitada en el orden interno peruano.

En efecto, tal y como he demostrado en mi voto conjunto con el magistrado Ramos Núñez en el caso Oscar Ugarteche Galarza,

a diferencia de lo que ocurría en los siglos XVIII o XIX, en los que el derecho internacional era una problemática esencialmente a ser abordada por los Estados, en la actualidad es claramente evidente que los tribunales suelen conocer de casos en los que deben aplicarse directamente tratados, convenios, u otras fuentes del derecho internacional. Así, en la actualidad es posible notar que, en una considerable cantidad de Estados, los tribunales de justicia se han convertido en instituciones considerablemente relevantes para la protección y promoción del derecho internacional, ya que suelen desenvolverse en “zonas mixtas” en las que, por ejemplo, los tratados interactúan con el ordenamiento estatal⁴².

101. Finalmente, la sentencia en mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional (Blume, Sardón, Ferrero y Miranda) señalan que, como nadie es dueño de la verdad, en consecuencia no es posible “imponer” la creencia de que el matrimonio igualitario es un derecho constitucional. De forma específica, señala que

[n]uestra Constitución propugna una sociedad abierta y democrática. Ningún Dueño de la Verdad ni Monopolista de la Virtud puede obligarnos a pensar de una manera o

⁴² Voto conjunto de los magistrados Ramos Núñez y Ledesma Narváez en el expediente 01739-2018-PA, fundamento 70



de otra. La sociedad peruana es una comunidad autónoma de hombres y mujeres libres, que estructuran su interacción por las normas que ellos mismos acuerdan a través de sus *representantes*. Tales normas pueden ser acertadas o desacertadas, conducentes o inconducentes, apropiadas o inapropiadas; sin embargo, en cualquier caso, deben ser respetadas por quienes vivimos aquí. Todo peruano tiene derecho a criticar las normas existentes y sugerir su reforma, pero debe hacerlo por los canales adecuados y de la forma pertinente.

102. La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional olvida, como ya lo hemos señalado en este voto, que el Derecho Internacional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. No es simplemente un conjunto de deberes que el Estado solo decida observar cuando los comparte.

Referirse a la sociedad peruana como una “comunidad autónoma” es desconocer décadas -sino es que acaso siglos- de evolución de la sociedad internacional y de la forma en que esta interactúa con los Estados y los supervisa con la finalidad de evitar escenarios de violaciones de derechos humanos.

Indudablemente, nadie es dueño de la verdad, y es por ello que existen tribunales de cierre en cuanto a la interpretación de los derechos. Si no existieran estos organismos, cada autoridad estatal, e incluso cada persona, intentaría imponer su visión del mundo al resto.

En todo caso, los tribunales internos bien pueden discrepar de la Corte, pero ello con la finalidad de optimizar los niveles de protección de las libertades básicas, no para disminuirlos.

La sentencia suscrita en mayoría por los magistrados del Tribunal Constitucional (Blume, Sardón, Ferrero y Miranda) insiste en una tesis interpretativa que impide que seres humanos accedan a una institución civil.

Esta no es una simple decisión “desacertada” (cito los términos de la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional). Es una vulneración de derechos que debe ser reparada.


103. Formuladas estas consideraciones a propósito del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero, deseo referirme a los hechos concretos de este caso.

vi) La exclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo es una nueva forma de la doctrina “separados, pero iguales”

104. Como se ha señalado, la exclusión del matrimonio entre parejas del mismo sexo atenta contra los estándares internacionales mínimos en materia de derechos humanos y supone una visión restrictiva en el marco de un derecho comparado que, cada vez en mayor medida, se preocupa en relación con los derechos de la comunidad LGTBI.



105. Deseo enfatizar, además de ello, que esta clase de trato supone una forma moderna de la conocida doctrina de “separados, pero iguales”, la cual permitió durante una considerable cantidad de tiempo la discriminación en función de la raza en los Estados Unidos y que fue abordada a propósito de la segregación en las escuelas públicas. Me interesa, en este punto, recordar lo resuelto por la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en el caso *Plessy vs. Ferguson*, oportunidad en la que debía decidirse si un estatuto estatal era o no contrario a la Décimo Cuarta Enmienda, ya que prescribía la segregación obligatoria entre blancos y negros en los trenes dedicados al comercio entre Estados. Al resolver el caso, el tribunal precisó que siempre que se proporcionaran “facilidades iguales” a las personas negras, se permitía a los Estados a excluirlos de los vagones de un ferrocarril destinado para blancos. Desde aquella oportunidad, se hizo referencia a la doctrina “separados, pero iguales”, la cual fue aplicada no solo en problemas en transporte interestatal, sino también en transacciones inmobiliarias, acceso al matrimonio o recreación pública⁴³.



106. Ciertamente, *Plessy vs Ferguson* no es la primera ni la última oportunidad en la que se reconocerá esta doctrina. Sin embargo, lo más devastador de este pronunciamiento fue la reafirmación de la creencia de la mayoría de la población respecto de una supuesta inferioridad inherente de la población afroamericana. Se ha recordado que, en el Norte de los Estados Unidos, muchas escuelas e instituciones que contaban con medidas afirmativas a favor de esa población terminaron por eliminarlas en virtud del criterio asumido por la Corte Suprema Federal, de ahí que se haya sostenido que el impacto de esta decisión no se limitó a los tranvías, sino que se trató, probablemente, de uno de los episodios más sombríos en la época de la lucha en contra de la discriminación racial⁴⁴.

107. Ahora bien, como se conoce, el criterio desarrollado por dicho tribunal fue revertido en el histórico fallo *Brown vs. Board of Education*. En aquella oportunidad, se sostuvo que, en el campo de la educación pública, la doctrina “separados, pero iguales” no tenía cabida, ya que las instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales. Concluyó, en ese sentido, que existía una vulneración de la Décimocuarta Enmienda en la medida en que se había advertido una segregación en el acceso a la educación. Si *Plessy* fue determinante porque consolidó institucionalmente la discriminación racial, *Brown* abre las puertas a una lectura evolutiva de la Constitución de los Estados Unidos. En su histórico pronunciamiento, al cual ya me he referido, sostuvo que

Debemos mirar el efecto de la segregación en sí misma en la educación pública. Al abordar este problema, no podemos hacer retroceder el reloj a 1868, cuando se adoptó la Enmienda, o incluso a 1896, cuando se escribió *Plessy v. Ferguson*. Debemos considerar la educación pública a la luz de su pleno desarrollo y su lugar actual en la vida estadounidense en toda la Nación. Sólo así se podrá determinar si la segregación

⁴³Berkman, Bernard (1953). Education and the Separate but Equal doctrine. En: Case Western Reserve Law Review, Vol. 4. Núm. 2, p. 133.

⁴⁴Motley, Baker (1992). The historical setting of *Brown* and its impact on the Supreme Court's Decisions. En: Fordham Law Review, Núm. 9, p. 15.



en las escuelas públicas priva a los demandantes de la igual protección de las leyes. Hoy en día, la educación es quizás la función más importante de los gobiernos estatales y locales. Las leyes de asistencia escolar obligatoria y los grandes gastos en educación demuestran nuestro reconocimiento de la importancia de la educación para nuestra sociedad democrática⁴⁵.

108. Así, la sentencia *Brown* decidió no retroceder el reloj, y combatir un problema vigente de la sociedad norteamericana. Las lecturas originalistas y literales de la Constitución -como la que propone ahora el ponente- impiden que se puedan erradicar conductas que suponen actos discriminatorios y que se encuentran consolidados hace una importante cantidad de tiempo. Si este siempre fuera el entendimiento del principio de igualdad y no discriminación, nunca se hubieran adoptado medidas para combatir en contra de la exclusión que padecen las mujeres, las personas con discapacidad o los integrantes de pueblos originarios.

109. Así, en el derecho comparado también se advierten experiencias en las que la participación de los tribunales de justicia fue determinante ante un contexto social y político en el que se encuentra normalizada la discriminación. Y ello no ocurre solo en los países del mundo occidental o del denominado bloque "Norte-global". En países como la India, por ejemplo, la Corte Suprema realiza importantes esfuerzos para erradicar la discriminación en contra de las mujeres. Recientemente, en el caso *Shayara Bano y otros vs. Unión de la India y otros*, este órgano jurisdiccional dispuso la eliminación de la práctica conocida como *talaq-e-bidat*, la cual permitía a los musulmanes a divorciarse de sus respectivas parejas de forma irrevocable al solo proferir la palabra "talaq" (divorcio, en su idioma) tres veces y de forma consecutiva⁴⁶. De similar forma, ha expedido pronunciamientos en los que permite que las mujeres accedan a altos cargos dentro de las Fuerzas Armadas, y ha cuestionado tradiciones en las que se establecía que las mujeres en periodos de menstruación no podían ingresar a ciertos templos.

110. Los tribunales también han permitido el resguardo de aquellas medidas afirmativas que han pretendido la aceleración de la igualdad en aquellas sociedades que, amparándose en las tradiciones del pasado, justificaban la existencia de prácticas discriminatorias fundamentadas en aspectos raciales. Por ejemplo, en Brasil, el Plan Nacional de Acción Afirmativa -que reservaba cuotas para mujeres y afrodescendientes- fue cuestionado como inconstitucional ante el Tribunal Supremo del Brasil. Sin embargo, dicho órgano, en el año 2012, emitió un pronunciamiento en el que confirmó la validez constitucional de esta clase de medidas.

111. La historia nos suele demostrar, de esta manera, que es posible identificar colectivos más expuestos a casos de discriminación. No sorprende, por ello, que la Corte Suprema de Estados Unidos se haya referido al concepto de "categorías sospechosas"

⁴⁵Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954).

⁴⁶Corte Suprema de la India. *Caso Shayara Bano y otros vs. Unión de la India y otros*. Petición Nro. 118 del año 2016.



para precisamente hacer referencia a aquellos supuestos usuales de discriminación. La terminología y la lógica empleada por este tribunal se ha expandido a diversos países del mundo, y es usual que, cuando se enjuicia la validez de alguna ley o práctica discriminatoria en relación con una “categoría sospechosa”, se proceda a presumir su inconstitucionalidad.

112. Los principales motivos que han justificado la presencia de tratos discriminatorios se encuentran, aun, bastante presentes en nuestras sociedades. Sin embargo, la evolución de las sociedades también permite identificar nuevos supuestos en los que es posible detectar que los ordenamientos incentivan o toleran la discriminación en relación con ciertos colectivos. Se puede decir que, mientras los criterios que emplean los tribunales para identificar prácticas discriminatorias son, en muchos casos, similares, las razones que justifican esa discriminación suelen mutar con el tiempo, o al menos suelen visibilizarse.
113. En la actualidad, el debate que nos convoca está relacionado con el acceso a la institución del matrimonio para toda persona, independientemente de su orientación sexual. Como he expresado en este voto, no advierto razones que justifiquen una exclusión como la que existe en el ordenamiento peruano. Esto no hace sino demostrar que la discriminación y la postergación de colectivos es una constante en la historia de la humanidad, y requiere, por ello, que los tribunales ostenten un rol activo ante la desidia de la sociedad y el Estado. En este caso, es objeto de discusión la exclusión del reconocimiento de un matrimonio entre personas del mismo sexo que se ha celebrado en el extranjero. El argumento central de la ponencia radica en que nuestra Constitución se referiría de forma exclusiva a la idea del matrimonio como una unión solo entre un hombre y una mujer.
114. El matrimonio, en las sociedades actuales, puede darse en contextos dispares. Por lo general, es una unión fruto de un fuerte lazo sentimental entre dos personas que desean desarrollar un proyecto de vida conjunto. También suelen plantearse la posibilidad de formar una familia con hijos. Esta sigue siendo, indudablemente, la tendencia mayoritaria en las sociedades actuales. Sin embargo, la ley no exige (ni podría hacerlo) que los vínculos emocionales o sentimentales queden debidamente acreditados en el momento de la realización del matrimonio. Existen, así, casos en los que esta unión se realiza con la finalidad de obtener alguna ventaja. A esta clase de vínculos se les suele denominar como “matrimonios por conveniencia”, y ha generado que, en diversas partes del mundo, se expidan leyes especiales para tratar de impedirlo. Esto demuestra que, mientras en el caso de las parejas heterosexuales los ordenamientos han sido bastante permisivos respecto de presumir la validez de los vínculos matrimoniales, en el caso de las parejas homosexuales simplemente opera, de plano, una exclusión, independientemente que el vínculo sentimental se encuentre plenamente acreditado.
115. Con ello no desco, desde luego, que esta clase de uniones se legalicen. Solo desco resaltar la flexibilidad y las innumerables facilidades que se brindan a uniones



matrimoniales entre parejas de diferente sexo, pese a que se pueda acreditar que no existe un sólido vínculo matrimonial entre los contrayentes.

116. Evidentemente, la situación es aún más delicada cuando se advierten los derechos y beneficios que se derivan de la institución del matrimonio, y a los cuales, evidentemente, no pueden acceder las parejas del mismo sexo pese a que puedan contar con una unión sentimental estable y consolidada por los años. Piénsese, por ejemplo, en el caso de las sucesiones. Para que, en el caso de parejas del mismo sexo, se reconozca algún vínculo legal, sería necesario hacer ese reconocimiento en un testamento. No ocurre lo mismo en los casos en los que la pareja cuenta con un reconocimiento oficial por parte de las autoridades estatales. De similar modo, se advierte el caso del acceso a derechos como la pensión de viudez, la cual puede ser adquirida en virtud de la unión que cuenta con un reconocimiento por parte del Estado. Incluso es posible mencionar que, por ejemplo, la celebración de un matrimonio brinda, en el trabajo, licencia con goce de haber, lo cual permite que los primeros días en los que se realiza esta unión exista un acercamiento o diálogo importante para la pareja. En el caso de las uniones entre personas del mismo sexo, ninguno de estos derechos o beneficios existe, ya que ese vínculo no genera ninguna consecuencia en el ordenamiento peruano.
117. Finalmente, resulta evidente que la exclusión para el acceso al matrimonio entre parejas del mismo sexo solo contribuye a fomentar y normalizar diversos prejuicios y estigmas en contra de la comunidad LGTBI. El ordenamiento incentiva la perversa idea de que se trata de grupos de personas cuyas uniones sentimentales no merecen un amparo legal, y ello, evidentemente, genera que la sociedad perciba cierta dosis de ilegalidad en sus uniones sentimentales. El reconocimiento a nivel normativo de esta clase de vínculos es un paso inicial -aunque no suficiente- para la erradicación de estereotipos en contra de las personas que integran esta comunidad.
118. De este modo, las uniones entre parejas del mismo sexo no pueden acceder a estos derechos y beneficios que se derivan del matrimonio. Tampoco pueden obtener la protección que dispensa una institución como el concubinato, para el caso de uniones que no deseen formalizar su vínculo a través del matrimonio. Se trata, simplemente, de una pareja inexistente para el derecho peruano. La mayoría de iniciativas planteadas en nuestro ordenamiento -todas ellas archivadas- plantean crear instituciones diferentes para regular un mismo supuesto: la unión estable entre dos personas con un proyecto en vida común.
119. En ese contexto de desprotección se pretende sostener que estas parejas gozan de los mismos derechos y libertades que el resto de la sociedad, lo cual, como he demostrado, es completamente falso. Sus vínculos sentimentales son invisibles para el derecho peruano. Advierto, por ello, que la situación de la comunidad LGTBI en nuestro país es un ejemplo actual de la doctrina de “separados, pero iguales”.



vii) Análisis del presente caso

120. Con fecha 20 de junio de 2017, las recurrentes interponen demanda de amparo (folio 195) contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con emplazamiento de su procurador público. Solicitan que se declare que la Resolución Administrativa 077—2017—GOR/JR10LIM/RENIEC (que declaró infundado su recurso de apelación y confirmó la Resolución Registral 303—2017—GOR/JR10LIM/ORLIMRENIEC, de 6 de febrero de 2017, emitida por la Oficina Registral Lima, que declaró improcedente su solicitud de inscripción de acta de matrimonio celebrado en el extranjero) afecta sus derechos a la dignidad, a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la personalidad jurídica, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar y a la protección de la familia y a la intimidad personal y familiar. Por tanto, solicitan que se ordene al demandado que vuelva a calificar el título que contiene la partida de su matrimonio.
121. Manifiestan que en un viaje a la ciudad de Miami contrajeron matrimonio civil el 4 de agosto de 2016, y que una vez que recibieron de los Estados Unidos su partida de matrimonio debidamente apostillada, presentaron ante el Reniec una solicitud adjuntando todos los documentos correspondientes para inscribir su matrimonio, la cual ha sido rechazada.
122. En este caso, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda al no existir en el Perú el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 31307 (artículo 5, inciso 1 del anterior código, vigente cuando se presentó la demanda).
123. Estimo que la improcedencia que se habilita en el artículo 7.1 no debe ser tomada a la ligera, como lo hace la ponencia. En efecto, la aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional requiere un previo proceso de configuración, ya que se trata de una causal de improcedencia que, al rechazar la demanda sin opción de analizar el fondo de la controversia, debe ser interpretada de forma restrictiva. Así, en virtud de esta disposición no es posible excluir, *ab initio*, importantes discusiones sobre si ciertas materias ingresan o no dentro del ámbito de algún derecho que se encuentre reconocido por nuestra norma fundamental.
124. Por lo general, en los casos en los que se ha aplicado esta causal de improcedencia ya existía un importante consenso sobre el hecho que lo reclamado no aludía a algún asunto constitucionalmente relevante. Sin embargo, por lo general esas conclusiones eran obtenidas luego de explorar un conjunto importante de casos, por lo que la jurisprudencia constitucional permitía ser una importante fuente de referencia para conocer si es que el acto reclamado estaba vinculado con el contenido constitucional de algún derecho.
125. Esto suele obedecer a que, en la justicia constitucional, se suele interactuar con cláusulas que, por su misma naturaleza, suelen ser indeterminadas, lo que puede



apreciarse a través de la vaguedad y ambigüedad de sus respectivas regulaciones. La primera condición alude a una situación en la que “existen objetos en relación con los cuales es dudoso si la palabra en cuestión es aplicable o no”⁴⁷. La ambigüedad, a su vez, “puede depender del significado de los vocablos y de los sintagmas (ambigüedad semántica), de la sintaxis de los enunciados (ambigüedad sintáctica), o del contexto en que usan los enunciados (ambigüedad pragmática)”⁴⁸.

126. De hecho, a esta clásica indeterminación de las cláusulas constitucionales debemos añadir la cada vez más notoria conexión entre el derecho de origen nacional y el que proviene de fuentes de derecho internacional, lo cual nos presenta nuevos dilemas relacionados con la influencia de esta clase de normas en la actividad judicial peruana. Entendemos que la interpretación que, del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, ha formulado la mayoría de nuestros colegas simplemente ha decidido ignorar esta interacción que, por lo demás, debe realizarse en virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Cuestiones como la prohibición de discriminación por orientación sexual se han debatido en órganos como la Corte Interamericana de Derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como por diversos comités de vigilancia del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, y todos ellos han coincidido en señalar que los Estados deben adoptar todas las medidas para erradicarla.

127. En lo relativo a la situación específica del matrimonio entre personas del mismo sexo, como ya se ha indicado, los dos principales tribunales regionales de derechos humanos (esto es, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo) han coincidido en señalar que es necesario brindar a estas uniones alguna fórmula de protección legal. De este modo, el hecho que mis colegas hayan decidido aplicar esta causal de improcedencia para el reclamo formulado en este caso supone simplemente dejar de lado una apertura al derecho internacional que se ha enfatizado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y, en el caso peruano, particularmente desde la Constitución de 1979.

128. En este orden de ideas, estimo que la causal del artículo 5.1 del Código no debe ser aplicación cuando existen desarrollos que provienen de fuentes del derecho internacional, lo cual es posible desprender tanto del artículo 55 como de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993. Al ser aquella una causal de improcedencia, debe estar reservada para casos en los que, de manera evidente, no exista algún reclamo con respaldo constitucional.

129. Por todo lo expuesto, considero que es impertinente la aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional en este caso, por lo que corresponde analizar el fondo de la controversia. En ese sentido, procederemos a delimitar el asunto litigioso.

⁴⁷ Ferreres, Víctor (2012). Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 24.

⁴⁸ Guastini, Riccardo (1997). Problemas de interpretación. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 7, p. 123.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ Y GRACIA

MARÍA FRANCISCA ALJOVÍN DE LOSADA

130. Por otro lado, en cuanto al análisis de fondo, ya he demostrado en este voto que no existe sustento constitucional alguno para impedir en reconocimiento, en nuestro ordenamiento, de una unión matrimonial entre personas del mismo sexo que fue celebrada válidamente en los Estados Unidos, y más aún cuando esta posición es compatible con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
131. De similar modo, he precisado que, si seguimos la posición asumida por la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, estaríamos generando que en territorio peruano habiten ciudadanos de segunda categoría que no podrían celebrar diversos actos jurídicos.
132. Indiqué, sobre esto, que no existe ninguna finalidad constitucional válida que sustente esta posición, ya que los cuestionamientos en contra de las parejas del mismo sexo suelen originarse por prejuicios que ya han sido superados hace una considerable cantidad de tiempo. Así, no reconocer esta clase de uniones solo incentiva la instauración de un modelo de Estado cerrado -superado hace décadas y que, por lo demás, no se condice con los postulados constitucionales-, ajeno a cualquier desarrollo que pueda efectuarse en la arena internacional.

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque corresponde:

1. Declarar **FUNDADA** la demanda por haberse acreditado la vulneración del principio-derecho a la igualdad y no discriminación, del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el de identidad, y del principio-derecho de dignidad humana.
2. **ORDENAR** al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que proceda a la inscripción de la unión matrimonial entre Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Losada, la cual fue celebrada en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.
3. **SOLICITAR** a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el escenario que reciban alguna comunicación relativa a la negativa de la inscripción del matrimonio entre Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Losada, pueda brindarle un trámite célere, ya que, en la actualidad, esta decisión, avalada por el Estado peruano, afecta sus derechos a la identidad y libre desarrollo de la personalidad.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

2/6/22

Firmo la presente resolución, sin recurrir a la firma digital, como se había dispuesto por Acuerdo de Pleno del 13 de mayo de 2022, toda vez que ese mismo día el magistrado Ferrero tomó juramento a los nuevos integrantes del tribunal, lo que imposibilitó continuar con la firma digital.

Lo que certifico:

Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Con el debido respeto que me merece la opinión de los magistrados Miranda, Blume, Sardón y Ferrero en el presente caso, me permito presentar el siguiente voto singular, en el cual se considera **FUNDADA** la demanda de autos. A continuación, paso a manifestar mi posición:

I.- Los antecedentes del caso:

1. Con fecha 20 de junio de 2017, doña Susel Ana María Paredes Piqué y doña Gracia María Francisca Aljovín de Lozada interponen demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Solicitan que se declare que la Resolución Administrativa 077—2017—GOR/JR10LIM/RENIEC (que declaró infundado su recurso de apelación y confirmó la Resolución Registral 303—2017—GOR/JR10LIM/ORLIMRENIEC, de 6 de febrero de 2017, emitida por la Oficina Registral Lima, la cual declaró improcedente su solicitud de inscripción de acta de matrimonio celebrado en el extranjero) viola sus derechos a la dignidad, a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la personalidad jurídica, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar y a la protección de la familia y a la intimidad personal y familiar. Por tanto, solicitan que se ordene al demandado que vuelva a calificar el título que contiene la partida de su matrimonio.
2. En la contestación de la demanda, presentada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se manifestó lo siguiente: a) las recurrentes no están solicitando el reconocimiento de un derecho adquirido o reconocido (y, por tanto, que deba reponerse), sino, por el contrario, pretenden que vía el amparo se les reconozca un derecho que supuestamente les corresponde; b) la Constitución no reconoce el derecho de acceder a la institución del matrimonio a las personas del mismo género; es más, se establece expresamente que la forma del matrimonio debe ser regulada por ley expresa, por lo que el artículo 234 del Código Civil dispone que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer; c) debió recurrirse al proceso contencioso—administrativo por constituir la vía idónea, al contar con etapa probatoria, donde se discuta la controversia planteada por las recurrentes; d) se pretende convalidar en el territorio nacional un matrimonio celebrado en el extranjero desconociendo la vigencia de la normativa legal peruana, con el argumento de que se les discrimina en sus derechos fundamentales; e) la argumentación de no discriminación no puede llevar al extremo de que un individuo pueda imponer sus ideas o preferencias personales sobre las normas de convivencia de su comunidad, que nacen de las regulaciones de orden legal que se emiten a través de sus organismos legalmente reconocidos para tales actos; f) debido a la ausencia de etapa probatoria en el proceso de amparo no se puede concluir si existió



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

buena fe para la celebración del acto matrimonial y si existen causas suficientes para demandar su ineficacia, en vista de que, tratándose de personas domiciliadas en el país, según su propia confesión y que señalaron domicilio en el Perú y no en el extranjero, al momento de celebrar el acto y siendo conocedoras de la vigencia de la legislación nacional, hayan recurrido a otro Estado que permite este tipo de acciones a fin de evadir las prohibiciones que, de manera general, establece el marco normativo que regula sus actos; y, g) pretender el reconocimiento de un matrimonio no regulado en el país argumentando que fue válidamente celebrado en un país extranjero representa un trato inequitativo para todos los demás connacionales que no tienen los recursos financieros para eludir dichas limitaciones con la celebración de su matrimonio en el exterior, para posteriormente poder inscribirlos en el territorio nacional vía “la acción de garantías constitucionales”(sic).

3. En primera instancia o grado se estimó la demanda, tras considerar que la Opinión Consultiva OC—24/17, de 24 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Costa Rica, sobre Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, fundamenta su decisión. Se asume que la familia debe ser entendida de una forma amplia y de acuerdo con la evolución social, y que las familias compuestas por personas del mismo sexo deben acceder a la protección de sus derechos ante la ley y las instituciones deben reconocer estos derechos en igualdad de condiciones. Así, se tiene establecido que el reconocimiento del derecho de estas personas debe ser amplio, no solo en cuanto a sus aspectos patrimoniales, sino como una modalidad de familia, por lo que la OC—24/17 resulta aplicable y no es compatible con el Código Civil Peruano, que solo reconoce como matrimonio a aquel celebrado por varón y mujer; por tanto, esta es una norma que no se debe aplicar, en el extremo que fija como contrayentes, necesariamente, a personas de distinto sexo, y prevalecen las normas convencionales que de manera expresa «protege[n] el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo», así como la Constitución Política que promueve el matrimonio, sin que se observe en su texto restricción al respecto.
4. En segunda instancia o grado se revoca la apelada, tras considerar que la Constitución consagra el matrimonio heterosexual entre personas que deciden hacer vida en común voluntariamente y que, si se toma en cuenta que la actual Constitución fue promulgada en 1993, es decir, con fecha posterior a la publicación del Decreto Legislativo 295 (Código Civil), ocurrida en 1984. Asimismo, la Sala argumenta que, para acreditar la vulneración del derecho a la igualdad, deberá realizarse necesariamente un examen de comparación entre dos situaciones sustancialmente iguales y demostrar la falta de razones objetivas y razonables que justifiquen el trato diferenciado, presupuestos que las demandantes no han logrado sostener. Y que lo expresado lleva a sostener válidamente el reconocimiento del matrimonio heterosexual. Agrega que este criterio interpretativo va aparejado con el



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

concepto constitucional de matrimonio, contemplado en los artículos 4 y 5 de la Constitución y el artículo 234 del Código Civil peruano, que incorpora el requisito de la diferencia de sexo entre los contrayentes.

II.- Precisiones sobre la denegatoria hecha por Reniec

5. En el primer pronunciamiento de Reniec sobre el particular, la Resolución Registral 303—2017—GOR/JR10LIM/ORLIMRENIEC, de 6 de febrero de 2017, el argumento central fue que es la Constitución quien deriva a la ley fijar las formas y demás requisitos que debe tener un matrimonio, y, según el artículo 234 del Código Civil vigente, uno de esos requisitos era la diversidad de sexo de los contrayentes.
6. La Resolución Administrativa 077—2017—GOR/JR10LIM/RENIEC, fue aún más radical, pues no solamente hizo suyo el argumento de su antecesora, ya que además trae a colación la necesidad de que, acudiendo al artículo 2050 del Código Civil. Señala que aquí habría un quiebre del orden público internacional, pues nuestra Constitución y nuestro Código Civil no permitían el matrimonio igualitario. Queda entonces claro que para Reniec, el fundamento central para denegar la inscripción del matrimonio de las recurrentes es que dicho matrimonio encierra una violación del orden público internacional.
7. ¿Es esta interpretación de Reniec sostenible, o encierra una situación de discriminación por razón de la orientación sexual de las recurrentes? Como se verá a continuación, yo estoy convencido que aquí se produjo un inaceptable acto de discriminación que, con todo respeto, lamentablemente el voto en mayoría ha terminado por convalidar.

III.- La constatación de una situación de discriminación por orientación sexual

8. Como es de conocimiento general, el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, a lo que se añade que “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.
9. Al respecto, y como también es de conocimiento general, en torno al principio-derecho de igualdad, se debe precisar que este tiene dos manifestaciones relevantes: la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. El análisis de la igualdad en la ley no es central en el presente caso, pero es importante señalar, siquiera a modo de información básica, que constituye un límite para el legislador, en tanto la libertad de legislar deberá estar encaminada a respetar la igualdad, encontrándose quien legisla prohibido de establecer distinciones basadas en criterios irrazonables y desproporcionados. En cuanto a la segunda manifestación (igualdad



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

en aplicación de la ley), el derecho a la igualdad se configura como un límite para la actuación de entidades privadas o públicas, y entre estas últimas, se incluye muy especialmente a las de carácter jurisdiccional. Se exige que estas entidades, al momento de aplicar la ley, no deben atribuir una consecuencia jurídica distinta a dos supuestos de hecho que sean sustancialmente iguales.

10. Por ende, y en tanto y en cuanto la parte demandada ha rechazado la inscripción del acta de matrimonio civil de las recurrentes sustentando su desempeño en una particular interpretación de un artículo del Código Civil peruano, conviene analizar si aquí se ha vulnerado el derecho de igualdad en la aplicación de la ley de las demandantes.
11. Es cierto que este Tribunal en alguna de sus composiciones ha señalado que el artículo 2.2 de la Constitución peruana recogería una serie de categorías consideradas sospechosas de discriminación, pues asume que aluden a determinados grupos sociales que han sido históricamente discriminados y que, por ende, merecen recibir una tutela especial o diferenciada de parte del ordenamiento jurídico (STC 2317-2010-PA, fundamento 33). Es más, aquí la presunción de constitucionalidad de los actos de quien tiene autoridad se pierde, siendo más bien la autoridad quien tiene la responsabilidad (carga de la prueba) de demostrar que al efectuar distinciones no se intenta discriminar.
12. Además, y desde una postura que hace suya la ponencia original, se sostiene que la lista colocada en el artículo 2.2 de nuestra Constitución es una lista expresa de "categorías sospechosas", pero, luego, no se cierra la posibilidad de atender elementos potencialmente discriminatorios con la referencia en el mismo artículo constitucional que acabo de reseñar ("de cualquier otra índole").
13. Ahora bien, con todo respeto creo que aquí se apela a una innecesaria disquisición más propia de una tradición jurídica distinta a la nuestra (la norteamericana), vinculada a la necesidad de, según la materia en que se produzca la diferenciación, pueda justificarse una evaluación (escrutinio) más o menos intenso sobre la justificación (o mejor dicho, la constitucionalidad de una diferenciación) llegando en algunos temas a plantearse la existencia de "categorías sospechosas", situaciones donde, según la jurisprudencia de la Suprema Corte Federal estadounidense, se dan con mayor habitualidad casos de discriminación, recurriéndose en esas situaciones al escrutinio fuerte y no a uno intermedio o a un escrutinio débil.
14. La técnica de los escrutinios apela a que el margen de evaluación de las y los diversos intérpretes sobre la justificación de las diferentes alegadas tendrá una intensidad variable según el tema en el cual se ha efectuado la distinción. En la mayoría de las materias el escrutinio o justificación de la diferencia efectuada a



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

aplicarse será denominado escrutinio mínimo o débil. Allí la valoración efectuada giraría en el análisis sobre la legitimidad del objetivo en el cual se sustenta la distinción, así como acerca de la adecuación de los medios empleados para alcanzar dicho objetivo.

15. A su vez, mediante el escrutinio intermedio utilizado para materias como las de género, en donde habitualmente ciertas veces las diferencias establecidas han encerrado pautas discriminatorias. Aquí la valoración a realizar busca responder la pregunta sobre si es realmente importante la relación existente entre la diferencia (clasificación) empleada y el objetivo buscado en esa medida distinta. Dicho en otros términos, deberá acreditarse la importancia de la distinción efectuada como medio para asegurar el fin deseado.
16. Y llegamos nuevamente, ahora sí, tal como se configura en su contexto original, a las “categorías sospechosas” (en Estados Unidos, por decisión jurisdiccional, se incluye allí lo referido a la razón o condición social, religión, etnia, orientación sexual, minusvalía, relación entre nacionales y extranjeros en materia laboral, o diferencias entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales). Aquí se aplicará el escrutinio estricto o fuerte que, como ya adelanté, parte de una inversión en la carga de la prueba, pues es la dependencia estatal la que deberá justificar si había una razón imperiosa para imponer la norma que recoge la distinción y si realmente era indispensable establecer un trato diferente en estos temas para obtener los objetivos buscados.
17. Todo ello suena muy importante, pero, con mucho respeto, está cargado de una poco útil carga subjetiva. Es difícil determinar cuáles son las razones que llevan a colocar a una materia dentro de un escrutinio u otro. Asimismo, es complejo ubicar un problema concreto (por ejemplo, el que padece un grupo de jubilados) al interior de una u otra categoría (en este ejemplo, edad o género), lo cual a su vez condiciona el escrutinio aplicable. Complicaciones realmente innecesarias en el Perú, pues nuestra Constitución, precisamente en su artículo 2.2, no hace una lista taxativa, sino una enunciativa de los supuestos en los cuales puede generarse situaciones discriminatorias.
18. Es más, en el Perú, y ante un uso innecesario de estos escrutinios, el Tribunal Constitucional concluyó que, a pesar de no encontrarse en la lista constitucional expresa de motivaciones discriminatorias, “la edad se entenderá como tutelada por expresión “cualquier otra índole”, afirmación en rigor absolutamente innecesaria por obvia. En síntesis, no resulta necesario en el Perú hablar de “categorías sospechosas”, frente a las cuales la carga de la prueba de las diferencias se hace mayor o admite variantes. En este punto se hace necesario especificar los alcances de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso I.V.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

contra Bolivia, con sentencia del 30 de noviembre de 2016. Allí, si bien se reclama una tutela reforzada frente a supuestos de discriminación, también se señala que establecer supuestas jerarquías como las de “categorías sospechosas” implica recurrir a criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes, derechos o cargas sociales (párrafo 240).

19. No hay pues, en el ordenamiento jurídico peruano, materias “más discriminatorias que otras”, ni cabe al antojadizo uso del escrutinio estricto para temas como el de la edad, que es en los Estados Unidos de Norteamérica parte de un escrutinio débil, como erróneamente lo hace una anterior sentencia de este Tribunal (ver STC. 5157-2014-PA, fundamento 31). Y es que lo que se debe aplicar en el Perú se deduce de la lectura de la versión inglesa del artículo 14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la cual reclama, en todos los temas donde se hace diferencias, actuar sin discriminación.
20. Aquello es lo que motiva a su vez la construcción planteada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su famoso test de igualdad, el cual consta de los siguientes pasos:
 - a) Encontrarnos ante situaciones comparables (existencia de un *tertium comparationis*).
 - b) Existencia de un fin u objetivo lícito (o por lo menos no prohibido ni contrario a los fines considerados como esenciales para el fundamento de una sociedad democrática), que motive el trato diferenciado.
 - c) Configuración de medidas concretas que guarden relación con el objetivo a alcanzar (examen de racionalidad), pero que, sobre todo, sean adecuadas a dicho objetivo o fin (examen de proporcionalidad).
21. Esta es la fórmula que en su momento acogió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que mayoritariamente ha utilizado nuestro Tribunal, sin recurrir a discutibles “categorías sospechosas”. Cosa distinta es que comprobemos cómo en nuestro país, y por diversas razones, hay sectores que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Sin negarse ello, basta con aplicar con rigor un test de igualdad para detectar como los y las integrantes del colectivo LGTBIQ son en nuestro país sistemáticamente expuestos a situaciones de discriminación, e inclusive a acontecimientos donde se pone en riesgo sus propias vidas, a través de los que muchas personas denominan “crímenes de odio”.
22. Justo es anotar que esta situación no es exclusiva del Perú, y que los y las integrantes del colectivo LGTBIQ son a nivel mundial también un sector de la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

población tradicionalmente discriminado. Así, por ejemplo, los “Principios de Yogyakarta” (o “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género”) resaltan como históricamente el colectivo LGTBIQ ha sido víctima de violaciones a sus derechos como consecuencia de su orientación sexual. En esa misma línea va la Declaración sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género” aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2008; el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género de 2012; o la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del año 2016.

23. La realidad peruana no escapa de este tipo de preocupaciones. El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 002-2018-JUS, aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, con un lineamiento estratégico que incluyó a la comunidad LGTBIQ. Importante también es el Informe Defensorial N° 1715, sobre los derechos humanos de las personas LGTBIQ, entre otros documentos.
24. Se ha impuesto también que la orientación sexual no heterosexual no constituye una enfermedad o una patología. Eso lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud desde 1990, o la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) desde 1973. Y luego de ello, un largo etcétera, que puede enmarcarse en la siguiente aseveración: no nos encontramos ante una enfermedad o una patología, pero sí ante una situación a la cual debe protegerse frente a su continua exposición a situaciones de discriminación.
25. Ahora bien, y para cerrar este aparte de nuestro texto, la orientación sexual, en su tratamiento concreto en el país, debe ceñirse a parámetros convencionalizados, los cuales buscan preservar condiciones de igualdad en el ejercicio de la orientación sexual de cada quien, y acerca de la cual hablaré después. Por ende, y tomando en cuenta lo señalado por la Cuarta Disposición Final de la Constitución vigente, debe hacerse de acuerdo con lo previsto en todos los tratados que el Estado peruano haya suscrito (y entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, o algunos tratados previstos en el ámbito del sistema universal de Derechos Humanos), la jurisprudencia dictada por los organismos de interpretación vinculante de dichos tratados (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), e incluso, con las normas con carácter de *iuscogens*.

IV.- La necesidad de reconocer y proteger los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la orientación sexual de prácticas discriminatorias

26. Sin llegar a los extremos de Bobbio, cuando señala que lo importante de la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ

Y GRACIA MARÍA FRANCISCA

ALJOVÍN DE LOSADA

fundamentación de los derechos era establecer su protección, no puede negarse que la capacidad de satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y nuestro desarrollo humano que se expresan mediante los derechos, no es completa sino cuenta con canales especiales, específicos y eficientes para su protección. Ya he resaltado en un anterior apartado de este texto, es insoslayable la importancia de respetar una necesidad humana básica expresada en el derecho a la orientación sexual de cada quien. Sin embargo, viendo o conociendo algunas situaciones existentes en nuestro país, decir que en el Perú está garantizado el libre desarrollo de la personalidad de cualquiera de nosotros es poco menos que una quimera. Ahora es cuando toca preguntarse cuán eficiente es el actual marco garantista que se le otorga a estos derechos.

27. Si nos manejamos con un concepto amplio de lo que se entiende por garantías, la relación de declaraciones, tratados y demás pronunciamientos emitidos a favor del respeto a la orientación sexual y su vinculación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad nos genera un escenario de buenas expectativas. El reconocimiento constitucional del derecho a no ser discriminado por su orientación sexual (que se desprende del artículo 2 inciso 2) y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (como consecuencia de la lógica del artículo 2 inciso 1), apuntan bien. A nivel de garantías procesales, el autodenominado Nuevo Código Procesal Constitucional habilita en su artículo 44 inciso 1 que el Amparo procede para la tutela del derecho a no ser discriminado por razón de su orientación sexual.
28. El Tribunal Constitucional peruano además ha desarrollado importantes pronunciamientos en contra de la cosificación de las personas y la tutela del libre desarrollo de la personalidad (ver. por ejemplo, las SSTC 2868-2004-PA/TC y 0032-2010-PI/TC). Sin embargo, todo esto puede devenir en absolutamente insuficiente.
29. Me explico: siempre es necesario tener presente que en un Estado Constitucional el poder es limitado y también entenderse que el contenido y el ejercicio de todos los derechos reclama límites. Ahora bien, estos límites a los derechos, máxime si están intrínsecamente vinculados a nuestra propia subsistencia y el desarrollo de nuestros proyectos de vida, deben encontrarse escrupulosamente justificados si lo que se va a limitar es la plasmación de nuestra orientación sexual o del libre desarrollo de nuestra personalidad. Aquí no cabe, bajo el argumento de, por ejemplo, contentar la satisfacción de un sector -inclusive mayoritario- imponer a otros(as) la vida que ese sector considera “perfecta” y “correcta”. Como bien señala este mismo Tribunal en su STC 0032-2010-PI, “toda medida perfeccionista se encuentra proscrita” (fundamento 50).



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

30. Tampoco cabe aquí, en nombre de supuestamente proteger los proyectos de vida propios, un paternalismo que, con sutileza o sin ella, intenta (y a veces lamentablemente logra) llevarnos a lo que se considera mejor para cada quien. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Riffo y niñas contra Chile, señaló con claridad que “el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de homosexual en sí misma, sino que se incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas” (párrafo 133). No basta con el reconocimiento del colectivo LGTBIQ, sino que es también vital el reconocimiento de que puedan hacer todo aquello que les permita plasmar sus diferentes proyectos de vida. Y entre ello debería estar, como no, el reconocimiento de matrimonios igualitarios como una apuesta de una pareja por compartir sus esperanzas e ilusiones de manera conjunta, y si es posible, hasta el final de sus días.

31. En este escenario, es inaceptable reconocer la existencia del colectivo LGTBIQ, pero negarle la oportunidad de, por ejemplo, el reconocimiento de su vida en pareja, encierra, necesario es decirlo, una cruel manera de discriminar, pues digo que un colectivo tiene derechos, pero en realidad no se los reconozco; o reconozco a dicho colectivo algunos derechos pero sin justificación razonable le niego otros que libremente deberían ejercer aquellas personas de orientación sexual heterosexual. Los derechos son de todos y todas, o de ninguno(a). Reconocer una cobertura recortada de derechos a algunos(as) sin un debido sustento, o como consecuencia de fórmulas “perfeccionistas” o “paternalistas” es en realidad establecer que existe una clara discriminación. Es, con dolor, asumir que hay personas “completas” o “de primera” y personas “incompletas” o de “segunda”. Y ello, repito, es absolutamente inaceptable, máxime si viene instaurado o asumido por entidades cuya verdadera finalidad debería ser la de satisfacer las necesidades humanas básicas de todos(as), permitiéndoles que el pleno ejercicio de sus derechos solamente admita limitaciones razonablemente justificadas.

V.- Los argumentos de Reniec para no atender la pretensión planteada

5.1. Sobre la supuesta existencia de vías igualmente satisfactorias

32. Reniec ha señalado que debe declararse improcedente la demanda, dado que el proceso contencioso administrativo constituye la vía procesal idónea para resolver la pretensión del recurrente. Reniec añade que el proceso contencioso administrativo cuenta con una etapa probatoria que resultaría necesaria para resolver la pretensión, y a ello agrega que la presente controversia no puede ser dilucidada en sede constitucional, toda vez que pretende el reconocimiento de un matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio que alega no era un acto permitido por la Constitución peruana.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

33. Sobre el particular, cabe preguntarse primero si el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero no constituye más bien un juicio de puro Derecho para el cual no parece ser necesario contar con una etapa probatoria. Y si lo de que se acusa a Reniec es precisamente de violentar el derecho a la igualdad de una pareja de esposas al discriminarlas en razón de su orientación sexual, lo más aconsejable pareciera ser recurrir a la vía directa de la tutela urgente de derechos que constituye el proceso de Amparo.
34. Ahora bien, y por si lo expuesto no fuese suficiente, conviene analizar si el contencioso administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria del Amparo, en este caso en particular en aplicación del artículo 7 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, y, sobre todo, en función de lo establecido en el caso “Elgo Ríos” (STC 02383-2013-PA) para determinar cuándo nos encontramos ante una vía igualmente satisfactoria que el Amparo.
35. Como todos y todas sabemos, en el fundamento 15 de la sentencia “Elgo Ríos” se establece que una vía ordinaria (como el proceso contencioso administrativo) será una vía igualmente satisfactoria al Amparo sí, de manera copulativa, demuestra el cumplimiento de los siguientes elementos:
- 1) Que la estructura del proceso (ordinario) es idónea para la tutela del derecho.
 - 2) Que la resolución que se fuera a emitir (en el proceso ordinario) podría dar una tutela adecuada.
 - 3) Que no exista riesgo de que se produzca la irreparabilidad (del daño alegado).
 - 4) Que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las circunstancias.
36. Además de que el caso presentado por las recurrentes involucra un juicio de puro Derecho que se dilataría innecesariamente en sede contencioso-administrativa, hay que reconocer cuál es la configuración del contencioso administrativo en el Perú. Y es que en el Perú se instituye en un contencioso administrativo de plena jurisdicción con varios defectos en su diseño y con una total insuficiencia de jueces y juezas encargados(as) de atender los diferentes casos que se generaban (toma, según el Informe de la Defensoría del Pueblo 120, un promedio de dos años para obtener una resolución de primera instancia o grado, resolución que puede ser apelada a segunda instancia o grado y llevada a la Corte Suprema en casación). Entonces, volviendo al



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

caso planteado, a la falta de necesidad de una etapa probatoria le añadiríamos una innecesaria dilación para resolver e incluso un fuerte riesgo de irreparabilidad del daño. El argumento de Reniec para alegar el uso del proceso contencioso administrativo en este caso se nos presente entonces como de gran debilidad, por decir lo menos.

5.2. Sobre la supuesta infracción al orden público internacional

37. Aquí tengo básicamente dos cosas que anotar: algo sobre los alcances que Reniec quiere darle al concepto “orden público internacional”, y, luego, algo más acerca de lo que ahora entiende al respecto. En un primer momento la noción de orden público internacional era planteada como una excepción de última ratio para eludir eventuales compromisos contraídos en el extranjero y que no querían honrarse en el país. El alegato más habitual era el de que nos encontrábamos ante situaciones que, de ser aceptadas quebrarían, o irían en contra del Estado interpelado, o irían contra valores básicos dentro de dicho Estado que serían violentados por la normativa o las actuaciones extranjeras.
38. Asimismo, de no encontrar en el pedido de las recurrentes nada que pueda alegarse que genere tanto peligro, y lo que, como veremos luego, estamos más bien de lo constitucionalmente posible en el Perú y que no encuentra prohibición alguna en el ordenamiento jurídico peruano (además de resaltar una manera de evitar se incurra en actos de discriminación a ciudadanos y ciudadanas en función a su opción sexual), importante es anotar como en estos últimos, con una dinámica que tiende a la integración de los diferentes ordenamientos jurídicos ha dejado completamente de lado esa antigua concepción del orden público internacional.
39. Y es que se debe entender que hoy se da un radical cambio en lo que se entiende por “orden público internacional”. Esta noción se encuentra más bien ligada a que los diferentes Estados respeten sus diversos compromisos internacionales (tratados suscritos respecto a la interpretación vinculante de dichos tratados), así como las disposiciones con carácter de *iuscogens*. Y al mismo tiempo implica para los diferentes Estados la imposibilidad de establecer trabas para el cumplimiento de estos tratados, los pronunciamientos vinculantes que se desprenden de estos tratados y las disposiciones con carácter de *iuscogens*. Para decirlo en pocas palabras, Reniec invoca el “orden público internacional” para desconocer o incumplir actuales alcances tal como veremos en este mismo texto.

5.3. La consideración de un supuesto reconocimiento constitucional al matrimonio heterosexual que proscibiría un sustento de este tipo al matrimonio igualitario

40. La Constitución peruana, en su artículo 4, establece un reconocimiento y reclama



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

una protección a la familia y al matrimonio como instituciones de gran relevancia dentro de nuestro ordenamiento, y presupuesto para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales. Una institución constitucionalmente garantizada, para decirlo en términos más técnicos. Ahora bien, y lo que es necesario resaltar, en ningún caso la Constitución establece como válido un tipo de familia o una clase de matrimonio.

41. Esta configuración constitucional ha permitido al Tribunal Constitucional, frente a la mora del legislador, dar respuestas a situaciones anteriormente no previstas pero que ahora se nos presentan como datos ineludibles de la realidad, que la labor de concretización que corresponde al juez(a) constitucional no puede soslayar.
42. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso “Schols Pérez”. La Constitución no establece un modelo de familia, y el legislador únicamente había consignado alguna regulación en el Código Civil para las familias nucleares, desconociendo, por ejemplo, la existencia en la realidad de otras fórmulas de familias, como son las familias ensambladas. El Tribunal Constitucional peruano reconoce la cobertura constitucional de la familia ensamblada, en la línea de lo previsto en el artículo 4 de la Carta de 1993. Para tratar de evitar el reconocimiento en sede constitucional de las familias ensambladas se planteaba una argumentación que ya puede parecer conocida: no había prescripción constitucional expresa, ni tampoco mención específica en el Código Civil.
43. Lo mismo puede alegarse sobre el matrimonio civil: que en el Código Civil se haya reconocido finalmente un tipo de matrimonio (el matrimonio heterosexual), no implica que no exista sustento constitucional o convencional para el reconocimiento de otro tipo de matrimonios. Sin embargo, y por motivos que no comparto se intenta realizar una interpretación a todas luces forzada de la Constitución para, en base a ello, intentar justificar que solamente habría cobertura constitucional al matrimonio heterosexual (e incluso tratar de proyectar una confesa descalificación del matrimonio igualitario, recurriendo a una ya doctrinariamente superada comprensión del orden público internacional). Se lee el artículo 5 de la Carta de 1993, destinado a establecer una protección a ciertos supuestos de convivencia heterosexual estricto sensu para de allí “dar el salto” a un supuesto reconocimiento (exclusivo y excluyente) del matrimonio heterosexual a nivel nacional.
44. Con el debido respeto que merece toda comprensión distinta a la nuestra, considero que en términos de interpretación (e incluso de integración) jurídica, nos encontramos ante un esfuerzo insostenible.
45. Me explico: en primer lugar, no puede hacerse una interpretación analógica entre dos instituciones de distinta naturaleza. El matrimonio no es el concubinato y, por



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

ende, lo que es invocable en uno no lo es necesariamente en el otro. En segundo término, el concubinato no es, como incluso se insinuó por allí, un matrimonio “en pequeño” o “incompleto”, y, por ello, lo que es aplicable al concubinato *a fortiori* no es predicable del matrimonio. Y finalmente, aun asumiendo que estuviésemos ante situaciones que hubiesen podido ser sometidas a un razonamiento analógico o a una consideración *a fortiori*, estas fórmulas no pueden ser utilizadas para restringir el alcance de derechos o instituciones.

46. El juez(a) constitucional tiene necesariamente que ser creativo en su labor interpretativa de la Constitución, pero debe ser respetuoso de ciertos parámetros, y uno de ellos es sin duda, lo que dice el texto de la misma Constitución, lo que se infiere razonablemente de su texto o de una lectura convencionalizada del mismo. No existe pues consagración constitucional del matrimonio heterosexual. Lo que existe más bien es una cobertura que coloca dentro de lo constitucionalmente posible al matrimonio igualitario, como veremos luego.
47. Ahora bien, y en todo caso, una discusión sobre el supuesto reconocimiento constitucional de una forma o fórmula de matrimonio de manera excluyente frente a otras, no parece ser acogida, pues dentro de lo constitucionalmente posible puede entenderse la habilitación de matrimonios igualitarios. Lo que pareciera aquí plantearse, en el voto mayoritario, y bajo argumentos sin duda muy respetables, pero que no comparto, es un pronunciamiento sobre los alcances de una institución constitucional, dándole coberturas mucho más limitadas, para en base a ello alegar una supuesta vulneración del orden público internacional, y llegar así a un pronunciamiento que va más allá de lo de lo pedido por la parte demandante (el reconocimiento de un matrimonio igualitario válidamente suscrito en el extranjero). Dicho en otras palabras, no se incide solamente en si Reniec debe o no reconocer un matrimonio igualitario hecho en el extranjero, sino que, además, se hace un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario, materia en la cual en rigor no entraba el pedido hecho por la parte demandante en swu escrito de demanda.

VI.- Resolviendo el caso planteado, y completando nuestra discrepancia con los votos de mayoría

6.1. El margen de competencias de Reniec y su necesaria relación con el reconocimiento y tutela de necesidades humanas básicas

48. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), conforme con lo señalado en el artículo 183 de la Constitución “tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el Estado Civil” (en ese mismo sentido, entre otras, la STC 04729-2011-PHD, fundamento ocho). El



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

artículo 2 de su Ley Orgánica añade que se encuentra bajo su responsabilidad la organización y el mantenimiento del registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Importantes funciones sin duda; pero que, dentro de un Estado Constitucional, deben ejercerse de acuerdo con los principios, disposiciones, derechos y deberes recogidos en la Constitución de nuestro país, o que se desprendan de su lectura sistemática o convencionalizada.

49. Y es que no existe Estado Constitucional en serio si sus entidades, públicas o privadas, no actúan conforme a parámetros constitucionales. Eso no quiere decir que todas ellas, por cumplir y hacer cumplir la Constitución, tengan la posibilidad de, por ejemplo, ejercer control difuso, como alguna vez lo dijo erróneamente alguna sentencia de este Tribunal felizmente ya rectificadas. Lo que se quiere decir es que cada cual debe actuar dentro de sus competencias constitucional y convencionalmente establecidas, y, sobre todo, en ese escenario, respetar los derechos y atribuciones de los demás.
50. Aquello tiene especial relevancia en el caso de Reniec. Como entidad con autoridad, su accionar debe seguir al menos parámetros de razonabilidad, racionalidad, deber de motivación y corrección funcional. Ahora bien, y a ello hay que añadir lo señalado en el mismo artículo 183 de la Constitución y el artículo 7 de su Ley Orgánica le otorgan, entre otras funciones, velar por el respeto de la identidad de la persona y demás derechos inherentes a ella. Y dentro de esos derechos inherentes a la identidad de las personas están, cómo no, el no ser sometidos a tratos discriminatorios, y el respeto a su orientación sexual y al libre desarrollo de la personalidad de cada quien.
51. Por ende, son muchas las veces que el Tribunal Constitucional peruano se ha tenido que pronunciar exigiendo al Reniec el cumplimiento de sus responsabilidades constitucional y convencionalmente establecidas. Reniec no debiera negarle a nadie tener un documento nacional de identidad; no debería regatear el acceso a dicho documento a personas adultos mayores o a quienes lo han perdido en situaciones debidamente justificadas; no debiera negarse a rectificar los datos referidos al estado civil o a la identidad de género de las personas; no debería, finalmente, impedir que se reconozca un matrimonio celebrado en el extranjero sin justificación razonable, alegando razones insuficientes (una supuesta vía procesal igualmente satisfactoria, o una comprensión desfasada del orden público internacional) o, como veremos a continuación, desconociendo los derechos fundamentales que debería defender, o incumpliendo los parámetros constitucionales y convencionales asumidos por nuestro país que directamente inciden en su labor.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

6.2. La labor de concretización del juez(a) constitucional y su fin último: la posibilidad de satisfacer necesidades humanas básicas, sobre todo de sectores vulnerables

52. El constitucionalismo contemporáneo no es el mismo que motivó en su momento las revoluciones burguesas, o aquel que rigió antes de la Segunda Guerra Mundial. Se ha pasado, no sin sobresaltos, dificultades y hasta eventuales retrocesos, de un constitucionalismo de límites (donde el eje de la preocupación del constitucionalismo era el de la limitación del poder para así evitar su ejercicio abusivo sobre los ciudadanos y ciudadanas) a un constitucionalismo de derechos (donde el aspecto primordial es el de permitir a la ciudadanía, y sobre todo a las minorías, exigir la posibilidad de poder hacer o dejar de hacer algo, mientras ello no sea ilícito, y siempre y cuando aquello sea vital para la satisfacción de sus necesidades humanas básicas, necesidades frente a las cuales lo que hoy conocemos como derechos son, probablemente, sus más calificados expresores en una sociedad determinada).
53. En ese contexto, la responsabilidad del juez o la juez constitucional es muy grande. Reconoce que existe una pluralidad de intérpretes vinculantes de la Constitución de su país, pero es el principal responsable de la concretización de las disposiciones, principios, valores, derechos, deberes y preceptos recogidos en una Constitución (o que se desprendan de su lectura sistemática o convencionalizada). Entonces, si se trata de la protección de los derechos (y sobre todo, de los derechos de las minorías, quienes en los hechos menos pueden disfrutar de esos expresores de sus necesidades humanas básicas, expresores a los que solemos denominar derechos), el juez(a) constitucional no puede contagiarse de la mora o el silencio de otros intérpretes vinculantes de la Constitución, y si existe cobertura constitucional para ello, se encuentra en la obligación de desarrollar, dentro de lo constitucionalmente posible, el contenido de medios e instituciones que permitan la plena satisfacción de las necesidades humanas básicas de todos y todas, y sobre todo, de quienes tradicionalmente han sido sometidos a situaciones de discriminación.
54. Eso es lo que hizo en su momento este Tribunal en el ya aquí mencionado caso "Schols Pérez", más no solamente en esa ocasión. Este Tribunal, con la actual composición, e incluso contando con el voto de algunos de quienes ahora configuraron el voto de mayoría, admitió una interpretación directa y conforme a la Constitución del tema de los migrantes en el caso "Mesquita de Oliviera", dejando de lado toda la normativa entonces vigente, la cual prohibía la reagrupación de un migrante extranjero con su familia peruana. Y junto a ello, un largo etcétera.
55. Es más, eso es precisamente lo que han hecho juezas y jueces constitucionales en varios países del orbe para precisamente reconocer el matrimonio igualitario (y no



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

solamente la mera inscripción de un matrimonio heterosexual celebrado en otro país). La labor, por ejemplo, las Cortes Supremas estadounidenses, argentina y costarricense, o del Tribunal Constitucional del Ecuador, han ido en ese sentido: han asumido el rol tuitivo y de interpretación directa o convencionalizada de sus constituciones, y han habilitado o reconocido la existencia de matrimonios igualitarios, sin esperar al legislador(a), sino más bien, con su actitud, han impulsado a quienes legislan a pronunciarse luego con detalle al respecto. Se hace necesario que entre a este nivel de análisis de la controversia, pues tanto Reniec como mis colegas que han configurado el voto de mayoría lo han hecho, aunque en base a premisas y aseveraciones que respeto, pero no comparto.

6.3. La relevancia de lo señalado por la Corte Interamericana al respecto

56. Durante el debate surgido al respecto, hay quien, alegando la aplicación de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, la cual reclama que los derechos en el Perú deben comprenderse de acuerdo con lo prescrito en los tratados de los cuales nuestro país parte, toman una lectura muy particular del artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos para luego señalar que el sistema americano ya se ha optado por un modelo de matrimonio que, de manera exclusiva y excluyente, implicaría una relación entre hombre y mujer. Nada más lejano de la realidad, como se verá de inmediato.
57. Y es aquí que se genera un problema parecido al ya descrito en el plano nacional. La letra de la convención reconoce expresamente y pide otorgar protección al matrimonio entre hombre y mujer, pero no descarta ni descalifica el reconocimiento y tutela de otros tipos de matrimonio. Y es que en materia de tutela de nuestras necesidades humanas básicas y nuestro desarrollo humano, así como en la línea de establecer límites al poder, las lecturas literales de normas destinadas a la tutela de derechos con un alcance restrictivo son siempre contraproducentes al rol tuitivo que justamente un sistema de protección supranacional busca consolidar. Cabe aquí recordar cómo en nuestro Tribunal Constitucional, desde el caso "LizanaPuelles", donde una lectura literal, sistemática y contraria al parámetro convencional de un artículo de nuestra Constitución fue justamente descartada por inconstitucional por quienes integraban el Tribunal Constitucional de ese entonces.
58. Lo cierto es que en el sistema interamericano de protección de derechos no existe una prohibición de fórmulas matrimoniales distintas a las del matrimonio heterosexual, sino todo lo contrario. Desde casos como "AtalaRiffo" o "Duque", el razonamiento de la Corte Interamericana va en un sentido diferente. Es más, y para despejar cualquier duda sobre el particular, basta con leer la Opinión Consultiva 24 del año 2017 para ver cómo la Corte Interamericana reconoce la relevancia de reconocer y proteger a los matrimonios igualitarios en los Estados sometidos a la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

competencia de la Corte, y, además, establece la obligación de que los Estados no pongan trabas o dificultades a la consagración de estas fórmulas matrimoniales.

59. Lo expuesto aquí reclama varias aclaraciones frente a algunas cosas dichas sobre el particular, seguramente por falta de información. En primer término, debe entenderse con claridad la naturaleza de una Opinión Consultiva de la Corte: no se trata de una recomendación, sino de un pronunciamiento vinculante para todos los Estados que admiten las competencias de Corte, pronunciamiento hecho a propósito de una consulta hecha en abstracto. Dada una Opinión Consultiva, lo resuelto allí es de cumplimiento inmediato para todos los Estados que aceptan la competencia de la Corte, tal como lo demostraron las actuaciones de la Corte Suprema de Costa Rica e incluso del Tribunal Constitucional del Ecuador, Estado que por cierto no formuló la Opinión Consultiva correspondiente.
60. En segundo lugar, y a modo de ejemplo de lo que también ocurre en otras latitudes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una muy conocida sentencia (Schalk and Kopk contra Italia, del 24 de junio 2010), reconoce que estamos ante una materia en evolución, ante la cual deja a los diferentes Estados que admiten la competencia del Tribunal Europeo un margen de apreciación para que estos tomen la regulación que consideren conveniente en sus contextos específicos. Dejar libertad de acción no es denegar.
61. Ahora bien, y volviendo a lo aplicable por el Sistema Iberoamericano de Protección de Derechos en nuestro caso, la consecuencia lógica de lo prescrito en la Opinión Consultiva 24 es muy clara. El Estado peruano no solamente debería limitarse a reconocer matrimonios igualitarios celebrados fuera de su territorio, sino que debía pasar a establecer una específica regulación tuitiva al respecto, y, además, suprimir cualquier traba a la tutela de la afirmación de estos matrimonios. En ese contexto, si Reniec, como entidad administrativa, desconocía los alcances de la Opinión Consultiva 24-17, y las sentencias “AtalaRiffo” “Duque” y “Gelman contra Uruguay”(sentencia mediante la cual la Corte Interamericana obliga a las entidades administrativas y los funcionarios(as) y servidores(as) de los Estados que aceptaron la competencia de la Corte, a actuar dentro de sus atribuciones de acuerdo a lo dicho por la Convención Americana y lo resuelto por la Corte Interamericana) estamos ante serios problemas.
62. Y es que una entidad administrativa, o sus integrantes, se siente limitada a tomar decisiones en ese sentido, en base a una discutible comprensión del principio de legalidad, la entidad administrativa en cuestión o sus integrantes están violando el plano convencional, y por ende, están violando la Constitución, pues este Tribunal ya ha dicho reiteradas veces que su control de constitucionalidad debe incluir un control de convencionalidad, y antes había señalado que los tratados sobre derechos



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

tienen rango constitucional. De otro lado, si ya han sido plasmados parámetros por la Corte Interamericana, o por normas del sistema universal como el Convenio 169 de la OIT, y el Congreso continuaba guardando silencio al respecto, tocaba al Tribunal Constitucional por lo menos otorgar el reconocimiento al matrimonio igualitario de las recurrentes, para así no solamente cumplir con los compromisos internacionales ya suscritos, sino también, y por sobre todo, no permitan que se plasme una situación de discriminación fácilmente apreciable con la sola aplicación del test de igualdad.

63. Explico de inmediato los alcances de lo que acabo de decir. Aquí hay una clara situación comparable (*tertiumcomparationis*): el de la del tratamiento dado al reconocimiento hecho por Reniec de todos los diferentes matrimonios celebrados en el extranjero. Ahora bien, y frente a esos matrimonios, uno de ellos no es reconocido como los demás, y esta distinción se realiza en base a argumentos que, como creo se haber podido acreditar en este texto, no cuentan con una justificación, y por ende, son casos donde pura y simplemente se había consagrado un supuesto de discriminación, con el agravante que dicho comportamiento desconocía el cumplimiento de lo claramente señalado mediante espacios cuya competencia para pronunciarse al respecto había sido aceptada por el Estado Peruano. No puede ignorarse el fenómeno de la convencionalización del Derecho, y por ende, cualquier norma, actuación de autoridad u omisión de autoridad no puede soslayar los parámetros convencionalmente establecidos, y ya vemos y sabemos cuáles son esos parámetros en el tena que venimos analizando.
64. Y es que, en estricta aplicación del test de igualdad, ante situaciones comparables no veo que la distinción realidad se sustenta en una justificación razonable. Más bien encuentro una situación de incumplimiento a los parámetros establecidos por el sistema interamericano que bien pueden llevar a que las recurrentes puedan llevar su caso a la Comisión Interamericana, y luego, que esta Comisión haga suyo y lleve el caso a la Corte. El pronunciamiento de la Corte Interamericana, luego de lo resuelto en la Opinión Consultiva 24, y los casos “AtalaRiffo” y “Duque” es a todas luces previsible: una condena al Estado Peruano, la cual no solamente va a implicar el reconocimiento del matrimonio igualitario de las demandantes en el Perú, sino también la exigencia de que el Estado peruano regule el matrimonio igualitario, para que así no se produzcan supuestos de discriminación y limitaciones irrazonables al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal como se ha producido en este caso en particular.
65. La labor de una Alta Corte debe estar dirigida a la generación de capacidades para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas, y nuestro desarrollo integral humano. El respeto de la orientación sexual es sin duda una de estas necesidades humanas básicas. Es más, está incluida en la lista de necesidades humanas básicas



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02653-2021-PA/TC

LIMA

SUSEL ANA MARÍA PAREDES PIQUÉ
Y GRACIA MARÍA FRANCISCA
ALJOVÍN DE LOSADA

que Nussbaum incluye en su propuesta de lista al respecto. Allí existe además puntos de contactos entre la "teoría de las capacidades" (Sen, Nussbaum) y la "teoría de los derechos humanos", potenciada luego de la segunda guerra mundial, tema que pasaré a analizar en detalle en próximas ocasiones.

66. Por todas estas consideraciones, mi voto es por declarar **FUNDADA** la demanda, por haberse producido una clara vulneración del principio-derecho a la igualdad y no discriminación, y en relación con ello se causa también un perjuicio al desarrollo de derechos como el del libre desarrollo de la personalidad y la identidad de doña Susel Ana María Paredes Piqué y doña Gracia María Francisca Aljovín de Lozada. En ese mismo tenor, deben declararse nulos los actos lesivos a esos derechos (Las resoluciones Registral 303—2017—GOR/JR10LIM/ORLIMRENEIC y Administrativa 077—2017—GOR/JR10LIM/RENEIC, emitidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú), y, finalmente, tiene que inscribirse el Acta de Matrimonio Civil celebrado en Miami por doña Susel Ana María Paredes Piqué y doña Gracia María Francisca Aljovín de Lozada y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú asuma los costos procesales generados por la presente controversia.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:

Flávio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL